



ANALES DEL CONCEJO

DE BOGOTÁ, D.C.

PROYECTOS DE ACUERDO

AÑO II N°. 3888 DIRECTORA: LUZ ANGÉLICA VIZCAINO SOLANO ENE. 23 DEL AÑO 2025

TABLA DE CONTENIDO	Pág.
PROYECTO DE ACUERDO NO 213 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN MODULAR VIRTUAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EMPREDIMIENTOS, MIPYMES Y STARTUPS EN BOGOTÁ”.....	26127
PROYECTO DE ACUERDO NO 214 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA REGULACIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EN PARQUES Y ZONAS ESPECÍFICAS DEL ESPACIO PÚBLICO”.....	26142
PROYECTO DE ACUERDO NO 215 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE PROMUEVE E INCENTIVA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE MEDIANTE EL TRÁNSITO GRADUAL A ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONTAMINANTE PARA VEHÍCULOS, TAXIS, SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL, MOTOS Y DEMÁS MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARÁCTER OFICIAL Y PARTICULAR EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	26176
PROYECTO DE ACUERDO NO 216 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA DEBIDA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESDE LA FUENTE EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE BOGOTÁ D.C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.....	26190
PROYECTO DE ACUERDO NO 217 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL 19 DE SEPTIEMBRE COMO EL DÍA DISTRITAL DE LA NIÑEZ CON CONDICIONES CRANEOFACIALES CONGÉNITAS EN BOGOTÁ D.C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA SU INCLUSIÓN”.....	26211
PROYECTO DE ACUERDO NO 218 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE PROMUEVE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE ATIENDAN A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN BOGOTÁ D.C.”.....	26224
PROYECTO DE ACUERDO NO 219 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA REGLAMENTAR LA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO Y AEROSOL EN BOGOTÁ DE ACUERDO CON LA LEY 2354 DE 2024”.....	26253
PROYECTO DE ACUERDO NO 220 DE 2025 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DIGITALES Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN MAYOR DE 50 AÑOS EN BOGOTÁ D.C.”.....	26284

PROYECTO DE ACUERDO NO 213 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN MODULAR VIRTUAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EMPREDIMIENTOS, MIPYMES Y STARTUPS EN BOGOTÁ”****1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO:****General:**

Establecer los lineamientos para el fomento de programas de capacitación modular virtual en la formulación de planes de negocio, emprendimientos que promueva la creación de Mipymes, Startups para emprendedores urbanos y rurales de las 20 localidades.

Específicos:

- a) Promover la reactivación económica de las localidades a través de programas de formación virtual, la formalización y la puesta en marcha de planes de negocio, Emprendimientos, Mipymes y Startups, desarrollados por jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, pequeños, medianos productores y prestadores de servicios.
- b) Desarrollar módulos virtuales fundamentos teórico para la formulación de plan de negocio y emprendimiento, fase de aplicación práctica, fase de retroalimentación, evaluación y certificación.
- c) Impulsar la innovación, el uso de herramientas TIC, el conocimiento de sistemas operativos y organizacionales, plataformas de proyección económica, financiera y contable, según la necesidad del emprendimiento y MIPYME.
- d) Gestionar la formalización, implementación, financiación y articulación clúster de negocios de los sistemas productivos locales y regionales.

2. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA

La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con las herramientas jurídicas y administrativas de orden Nacional y Distrital, para la creación de programas proyectos en materia de desarrollo económico y social, el fomento del emprendimiento, la formación de Mipymes, la formalización y la productividad para las comunidades en condición de alta vulnerabilidad, las personas naturales, comerciantes informales de sectores rurales y urbanos, a fin consolidar la organización de los diferentes sectores de la economía, incidir en la reactivación económica, la generación de empleo de las 20 localidades de Bogotá.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general".

Artículo 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Ley 590 de 2000 "Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa".

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto:

a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos.

Ley 905 de 2004 "Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones."

ARTÍCULO 1o. El literal b) del artículo 1o de la Ley 590 de 2000 quedará así:

b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.

ARTÍCULO 2o. El artículo 2o de la Ley 590 de 2000 quedará así:

Artículo 2o. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros:

1. Mediana empresa:

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o

b) <Ajuste de salarios mínimos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006. El texto con el nuevo término es el siguiente:> Activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT.

Notas de Vigencia Legislación Anterior

2. Pequeña empresa:

- a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o
- b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o,

3. Microempresa:

- a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
- b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes o,

PARÁGRAFO. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para la mujer.

Ley 1429 de 2010 "Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo", con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.

ARTÍCULO 3o. FOCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deberá:

- a) Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito orientados a empresas del sector rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años Técnicos por competencias laborales, técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del empleo, para lo cual utilizará herramientas como: incentivos a la tasa, incentivos al capital, periodos de gracia, incremento de las garantías financieras que posee el Estado y simplificación de trámites. Para el desarrollo de lo contenido en el anterior literal, la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que corresponda facilitará y simplificará los trámites a los que se encuentren sujetos los establecimientos de crédito y demás operadores financieros.
- b) Diseñar y promover, en el nivel central y en las entidades territoriales, el desarrollo de programas de apoyo técnico y financiero para asistencia técnica, capital de trabajo y activos fijos, que conduzca la formalización y generación empresarial, y del empleo en el sector rural. En todo caso, los montos de los apoyos y las condiciones de reembolso estarán sometidos al logro de los objetivos previstos por el proyecto productivo o empresarial que se desarrolle. El Gobierno Nacional, en cada uno de los sectores, definirá mediante reglamento los criterios para su aplicación e implementación.
- c) **Diseñar y promover programas de formación, capacitación, asistencia técnica y asesoría especializada, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, del empleo y el teletrabajo.**
- d) Fortalecer las relaciones entre Universidad-Empresa-Estado, fomentando en todo el país iniciativas tendientes a que estos tres sectores trabajen mancomunadamente en el desarrollo innovador en sus regiones.

- e) **Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes, diseñando, gestionando y evaluando una oferta que contemple todas las necesidades formativas de una persona en situación de exclusión y que cubra todas las etapas que necesite para su inserción social y laboral.**

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional establecerá mecanismos que conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del empleo, en el sector agropecuario.

PARÁGRAFO 3o. El Gobierno Nacional expedirá el reglamento para que el Fondo Nacional de Garantías otorgue condiciones especiales de garantía a empresas creadas por jóvenes menores de veintiocho (28) años tecnólogos, técnicos o profesionales, que conduzcan a la formalización y generación empresarial y del empleo, por el ochenta por ciento (80%) del valor del crédito requerido.

PARÁGRAFO 4o. El Conpes se reunirá al menos una vez al año para hacerle seguimiento a lo establecido en el presente artículo. El Comité Mixto de Formalización Empresarial y Laboral del Sistema Nacional de Competitividad se reunirá al menos una vez al año para coordinar los programas públicos y privados de desarrollo empresarial que sirvan de apoyo y estímulo a la creación y formalización de las empresas y los trabajadores, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo.

PARÁGRAFO 5o. Estos programas de formación y capacitación tendrán prioridad para los jóvenes discapacitados.

Ley 1676 de 2013 "Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias."

Ley 1780 de 2016 "Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones."

Ley 1819 de 2016 "Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones"

Ley 2069 de 2020 "Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia".

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.

Dicho marco delineará un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades socioeconómicas de cada región.

CONPES 3988 de 2020 DNP - Tecnologías para aprender: política nacional para impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales.

Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Concejo de Bogotá dictó las normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital.

Artículo 74. Misión del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo. El Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo tiene la misión de crear y promover condiciones que conduzcan a incrementar la capacidad de producción de bienes y servicios en Bogotá, de modo que se garantice un soporte material de las actividades económicas y laborales que permitan procesos productivos, de desarrollo de la iniciativa y de inclusión económica que hagan efectivos los derechos de las personas y viables el avance social y material del Distrito Capital y sus poblaciones, en el marco de la dinámica ciudad región.

Artículo 78. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación de políticas de desarrollo económico de las actividades comerciales, empresariales y de turismo del Distrito Capital, que conlleve a la creación o revitalización de empresas, y a la generación de empleo y de nuevos ingresos para los ciudadanos y ciudadanas en el Distrito Capital.

Que, para el cumplimiento de su objetivo misional, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tiene a su cargo entre otras funciones, las establecidas en el artículo 2° del Decreto Distrital 437 de 2016 entre las cuales se resaltan los siguientes literales:

“a. Formular, orientar y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de desarrollo económico y social de Bogotá relacionados con el desarrollo de los sectores productivos de bienes y servicios en un marco de competitividad y de integración creciente de la actividad económica.

c. Formular, orientar y coordinar las políticas para la generación de empleo digno e ingresos justos, y estímulo y apoyo al emprendimiento económico y al desarrollo de competencias laborales. En este sentido, participará en la elaboración y ejecución de la política de generación de empleo y la competitividad de las personas discapacitadas.

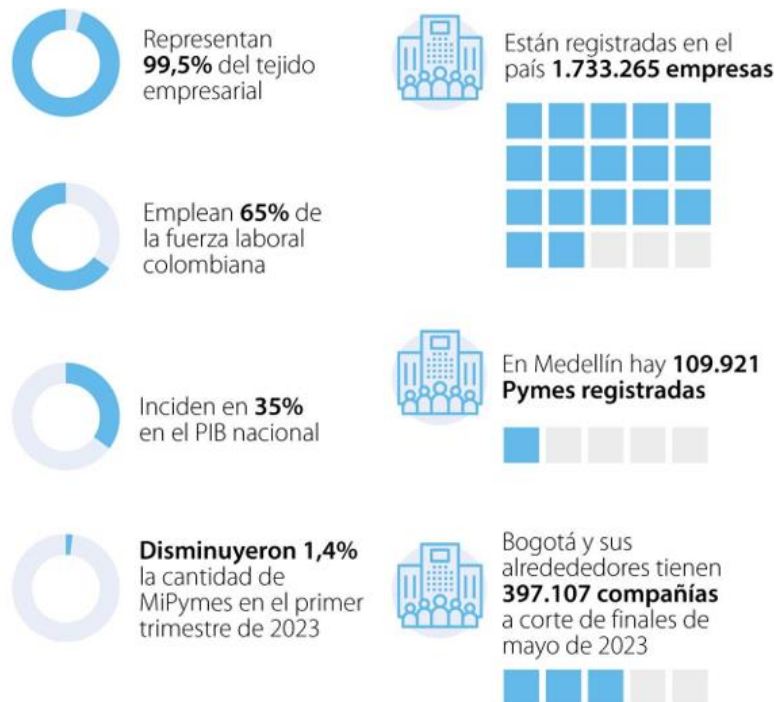
J. Formular, orientar y coordinar políticas de incentivos para propiciar y consolidar la asociación productiva y solidaria de los grupos económicamente excluidos.

Formular, orientar y coordinar políticas para el desarrollo de microempresas, famiempresas, empresas asociativas y pequeñas y mediana empresa”.

Acuerdo 862 de 2022 “ por el cual se establecen lineamientos para la creación de la comisión intersectorial de Apoyo al emprendedor y emprendedora joven rural campesina de Bogotá D.C y se dictan otras disposiciones.

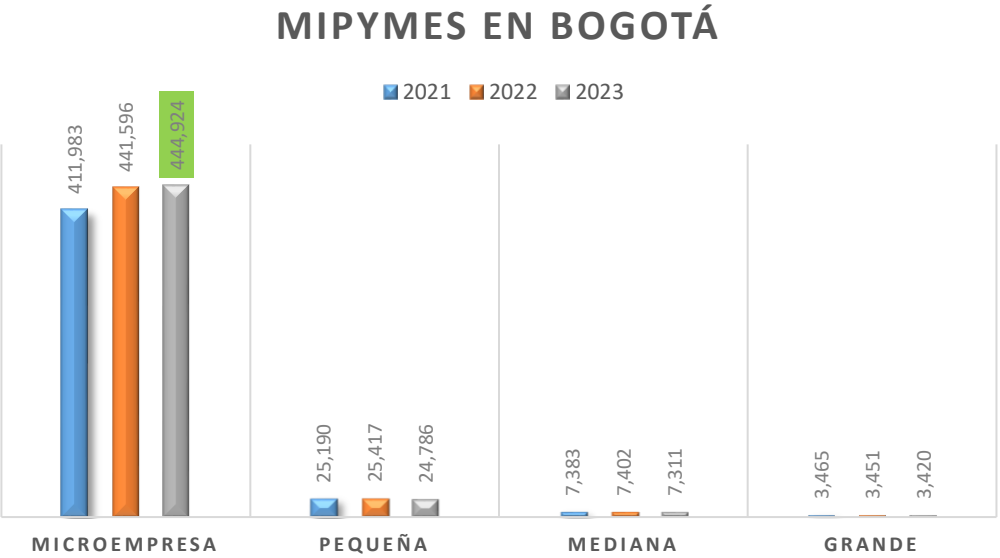
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

Según ACOPI, las MIPYMES en Colombia dinamizan la economía al emplear el 65% de la fuerza laboral, con una incidencia de un 35% en el PIB Nacional. Para el 2023 se contaba con 1,7 millones de empresas, 1.5 millones de micro empresas, 103,118 Pequeñas empresas y 27,317 medianas, su participación por sector evidencia en Mipymes 708.094 movilizan el sector comercio. 200,063 el sector hotelero, servicios de comida y 183.200 sector de industria y manufactura.



Fuente: Dane, Acopi y CCB, CCM Gráfico: LR-MN

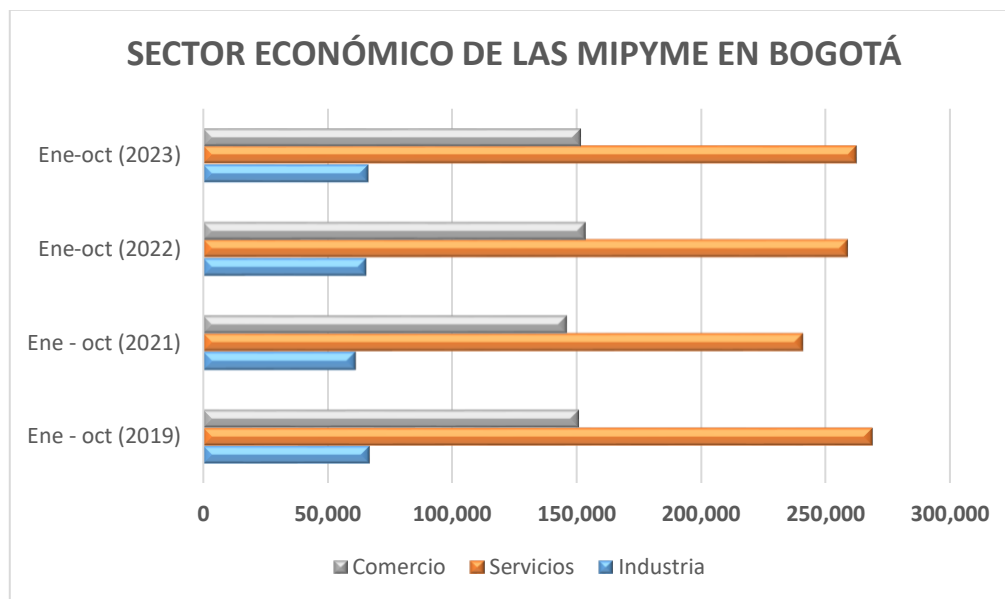
De acuerdo con los datos de la Cámara de comercio de Bogotá se observa que para octubre de 2023 se mantienen vigentes **444.924** micro empresas activas con el incremento de un 1%, en cuanto a la Pequeña empresa **24.786** vigentes, con una variación de menos un - 2%, Mediana **7.311** y Grande empresa **3420**, con una variación de menos uno -1% en comparación con el año anterior.



Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá CCB 2023.

Bogotá requiere que desde la Secretaría de desarrollo económico se gesten procesos de innovación, modernización y transformación digital, programas de formación continua en las 20 localidades para la actualización, el fomento, innovación y formalización de las Mipymes, en procesos organizacionales, administrativos, financiero y contables, uso de herramientas TIC, Marketing, gestión del talento humano, gestión de recursos, la consolidación de servicios y productos con estándares de calidad, y la apertura de nuevos mercados locales e internacionales.

Por lo tanto, en Bogotá, las MiPymes se ubicar en los sectores de servicios 54.4%, comercio 32% e industria 13,6%.

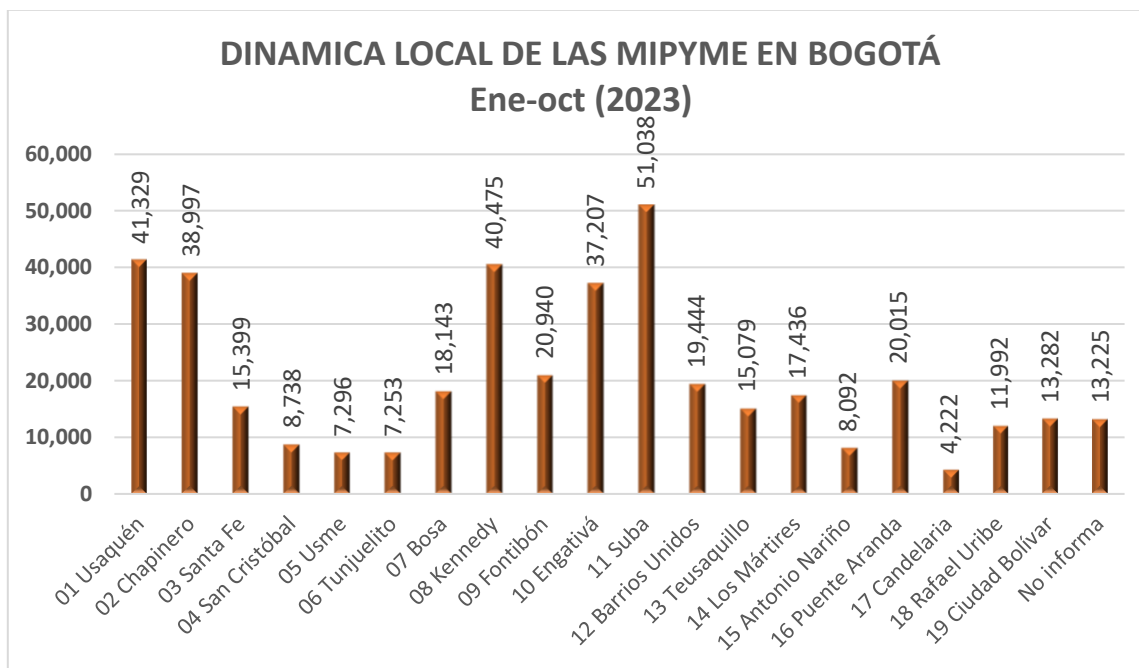


Fuente: Cámara de comercio de Bogotá 2023.

En la gráfica podemos observar que en Bogotá durante la vigencia 2019 a 2023, el sector de servicios predomina con **262.326**, seguidamente por el sector comercio **151.705** y en último lugar el sector industrial **66.410**, Mipymes que afrontaron el periodo de pandemia, la desaceleración económica, el aumento de los precios de las materias primas y combustibles, son Mipymes que han logrado mantenerse, ser corresponsables con sus trabajadores y proyectase en mantener el punto de equilibrio en un mediano y en largo plazo el crecimiento de sus servicios y negocios.

El desarrollo de la construcción de vivienda, progresivamente viene desplazando las actividades industriales, por lo tanto algunas empresas han desplazado sus operaciones hacia municipios, afectado la dinámica de los trabajadores, del mismo modo los programas educación media, técnica, tecnológica y profesional no hacen énfasis en la necesidad de generar un desarrollo industrial, no se fomenta la investigación, la creatividad, la inventiva para crear maquinaria, herramientas y productos que aporte a la automatización, eficacia y generación de nuevas empresas.

Sin desconocer que, la pequeña, mediana y grande empresa, según los datos de Insolvencia Colombia unas **4500** personas tuvieron que declararse en insolvencias, quiebra, cerrar, dejar de prestar servicios, y cancelar contratos a sus trabajadores.

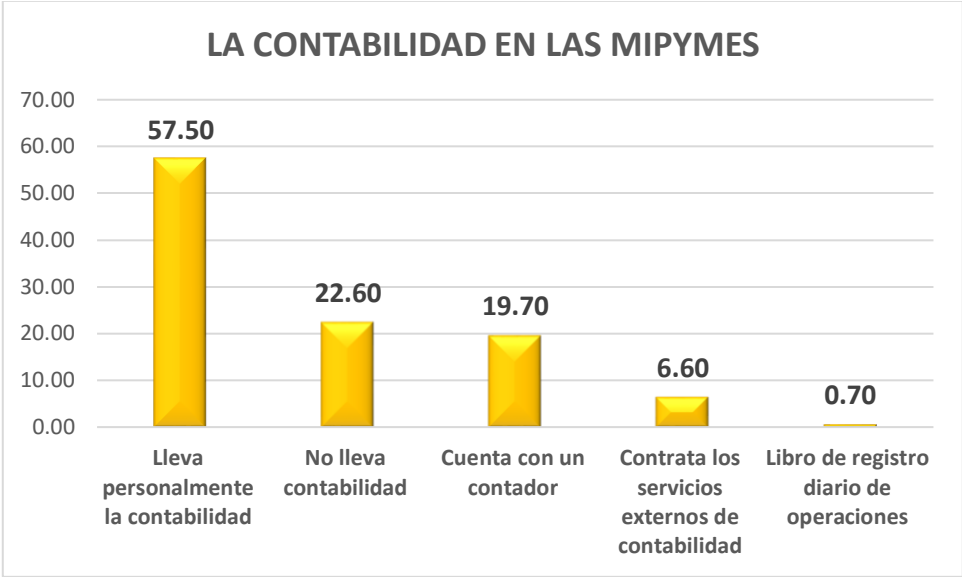


Fuente: Cámara de comercio de Bogotá 2023.

Según la grafica se observa que localidades como Suba, Usaquén, Chapinero, Kennedy y Engativá, son las más activas, productivas con la mayor concentración empresarial y prestación de servicios. Con respecto a localidades como la Candelaria, Tunjuelito y Usme sería necesario estudiar los factores, geográficos, el uso de los suelos, la extensión del territorio, la formación y caracterización de las comunidades en temas de productividad, generación de empleo y creación de las ideas de negocio, para estimular la creación o formalización de empresas en las localidades de menor productividad.

Si bien las MiPymes han logrado mantenerse, conservar los empleos, desarrollar los procedimientos administrativos rudimentariamente, es necesario que desde la administración distrital se suministre soporte especializado para mejorar las competencias organizacionales, administrativas, contables y comerciales.

Según Observatorio de desarrollo económico y ACOPI, en su Boletín Monitor de las Mipymes noviembre de 2023, evidencia que las microempresas en un 95.6% NO solicitan créditos, un 3.8% si ha solicitado y un 0.6% No cumplen exigencias de las entidades financieras para el acceso a créditos en un 33.3%, su reporte es negativo en centrales de riesgo en un 33.3% y su capacidad de pago es insuficiente 33.3%. por lo tanto, se demuestra la necesidad de formarlas en competencias de economía y finanzas con el propósito de proyectar su crecimiento, mejorar sus habilidades administrativas y el acceso a capitales para su desarrollo.

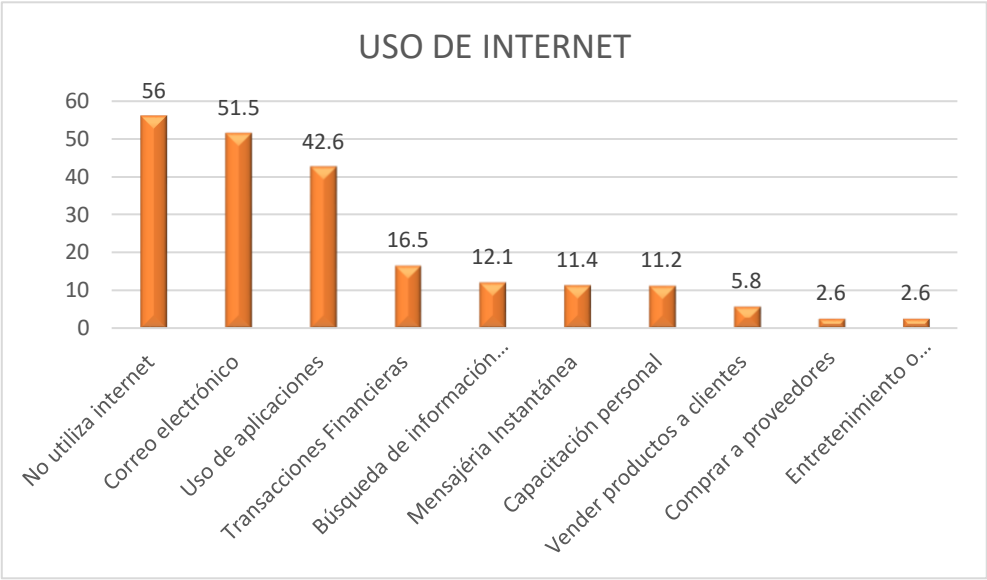


Fuente: Cámara de comercio de Bogotá 2023

En cuanto los procesos básico administrativos se observa que solo un 57% llevan personalmente a contabilidad, un 22.6% no llevan contabilidad, solo el 19,7% tiene un contador, un 6.6% contrata servicios externos de contabilidad y un 0.7 lleva registro diario de sus operaciones. El proceso contable y financiero de una empresa le permite cumplir con las exigencias de ley en materia de impuestos, contar con un balance para análisis de pérdidas y ganancias, la habilita para competir en la contratación pública como privada generando confianza y capacidad administrativa. Sin embargo, según la encuesta de Monitor de las Mipyme – SDDE, podría observarse un pobre desempeño en el control de las microfinanzas de la Mipyme, desconociendo su capacidad de administración, acción y competitividad ante empresas con procesos robustos y de calidad.

Esto demuestra la necesidad formación financiera y contable en el proceso organizacional que presentan las Mipymes en Bogotá y región, las economías informales crecen diariamente, sin planeación y visión, viven al diario con la “plata de bolsillo” esto responde a la carente formación y planeación que se tiene para el manejo, dirección y administración de un negocio.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL.



Al observar la gráfica, según los datos de la cámara de comercio de Bogotá, un 56% de las microempresas NO utilizan internet, es decir 444.924 Mipymes vigentes, el 51.5% unas 249,157 no han avanzado hacia una transformación digital, 42,6% unas 189.537 no usan aplicaciones, el 16.5% unas 73,412 no realizan transacciones financieras y el 11,2%, unas 49.831 no reciben capacitación personal. Las Mipymes en Bogotá realizan la mayor parte de sus operaciones de manera rudimentaria, lo cual limita su capacidad de competitividad, administración, gestión y actualización, para el acceso a mercados de mayor impacto.

La transformación digital permitirá a las MiPymes la renovación, innovación e implementación de tecnología, construcción de plataformas, manejo software para los diferentes procesos organizacionales, presencia en redes social, generar canales de ventas automatizadas, desarrollo de competencias formación continua de los trabajadores, reconocer las necesidades y datos en tiempo real de los clientes, afrontar la resistencia al cambio para que las Mipymes se adapten progresivamente, logren la innovación que están demandado los mercados locales, regionales y globales.

Alcance de la iniciativa

Este proyecto de acuerdo propone establecer los lineamientos para construir e implementar en las 20 localidades, programas y proyectos para crear, capacitar, actualizar y fortalecer las Mipymes en Bogotá a través de programas virtuales, presenciales con actividades vivenciales y tutorías sincrónicas, bajo la dirección de la Secretaría de desarrollo económico, que en el cumplimiento de su objeto misional esta a cargo del desarrollo económico y social de la ciudad:

- Garantizar el acceso personas en condición de alta vulnerabilidad, como personas con discapacidad, mujeres cabezas de hogar, jóvenes de escasos recursos, emprendedores y microempresa de contextos urbanos y rurales de Bogotá.
- Esto implica caracterizar a las empresas, los emprendedores, las Mipymes que ofertan productos y servicios en cada localidad.

- c. Identificar y registrar, ideas de negocio, emprendedores y MiPymes, informales en las 20 localidades.
- d. Establecer programas para la actualización, formación, formalización, creación, transformación digital de ideas de negocio, emprendimientos
- e. Establecer estándares de calidad y medición de la dinámica de las Mipyme en Bogotá, facilitando la trazabilidad de sus operaciones con el propósito de ajustar indicadores de procesos, procedimientos y estrategias en el servicio prestado, medir el impacto en el crecimiento de nuevos mercados, para garantizar mejora continua hasta alcanzar la satisfacción de la ciudadanía.
- f. La consolidación de datos actualizados y estructurados, en tiempo real en la secretaría de desarrollo económico, su gestión, avance, cobertura e impacto en las localidades.

COMPETENCIA

El Concejo de Bogotá es competente para expedir el presente Proyecto de Acuerdo en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993, según los cuales esta corporación tiene la facultad de:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

IMPACTO FISCAL

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación.

Adicionalmente, En este punto es de resaltar, que la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C- 911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa.

En conclusión, el impacto fiscal del presente proyecto de acuerdo en nada modifica el marco fiscal de mediano plazo presentado por la Administración Distrital.

Las presentes iniciativas no generan un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación.

Cordialmente,

Firmas:

Marco Acosta Rico

Autor - Concejal de Bogotá

Partido Colombia Justa Libres

Observación: El articulado a continuación fue revisado y concertado por los Honorables Concejales H.C. María Clara Name Ramírez (Coordinador) y H.C. Edison Julián Forero Castiblanco (ponente) en la vigencia 2024, con la aprobación de la administración en una mesa técnica.

PROYECTO DE ACUERDO NO 213 DE 2025**PRIMER DEBATE****“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN MODULAR VIRTUAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EMPREDIMIENTOS, MIPYMES Y STARTUPS EN BOGOTÁ”****EL CONCEJO DE BOGOTÁ**

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 12 numeral 1,13,19.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Objeto: Establecer los lineamientos para el fomento de programas de capacitación modular virtual, transformación digital y emprendimientos que promueva el fortalecimiento de MIPYMES y STARTUPS urbanos y rurales de las 20 localidades.

Promover la reactivación económica de las localidades a través de programas de formación virtual, la formalización y la puesta en marcha de planes de negocio, Emprendimientos, MIPYMES y STARTUPS, desarrollados por jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, pequeños, medianos productores y prestadores de servicios.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Administración Distrital fortalecerá los lineamientos y contenidos en módulos virtuales, fundamentos teórico-prácticos para el fortalecimiento de las habilidades emprendedoras logrando la transformación digital de Mipymes y la creación de STARTUPS.

ARTÍCULO TERCERO. LINEAMIENTOS: La administración distrital para la implementación del presente acuerdo podrá tener en cuenta, entre otros, los siguientes lineamientos:

- a. Promoción del acceso de personas en condición de alta vulnerabilidad, como personas con discapacidad, mujeres cabezas de hogar, jóvenes de escasos recursos, emprendedores y microempresa de contextos urbanos y rurales de Bogotá.
- b. Identificación de las empresas, los emprendedores y las Mipymes que ofertan productos y servicios en cada localidad.
- c. Fomento de la actualización, formación, formalización y transformación digital de emprendimientos y empresas.
- d. Promoción, a través del sitio web de los programas, contenidos, uso de las tecnologías de la información y comunicación, entornos de aprendizaje, acceso y uso de herramientas digitales.

ARTÍCULO CUARTO. INDICADORES: La Administración Distrital establecerá los indicadores que considere pertinentes para el seguimiento de las acciones que se desprenda de la implementación del presente acuerdo.

ARTÍCULO QUINTO. INFORME DE AVANCE. La Administración Distrital presentara al concejo un informe anual sobre la implementación del presente de acuerdo.

ARTÍCULO SEXTO: IMPLEMENTACIÓN. El presente acuerdo establece un plazo de doce (12) meses para la implementación.

ARTICULO SEPTIMO. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D. C. a los _____ días del mes de _____ de 2025

PROYECTO DE ACUERDO NO 214 DE 2025**PRIMER DEBATE****"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA REGULACIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, EN PARQUES Y ZONAS ESPECÍFICAS DEL ESPACIO PÚBLICO"****1. Objeto del Proyecto de Acuerdo**

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como propósito establecer un marco normativo integral para la regulación del porte y consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en parques y zonas específicas del espacio público de Bogotá. A través de esta iniciativa, se busca promover espacios seguros y saludables que protejan a las poblaciones vulnerables, especialmente niños, niñas y adolescentes, al tiempo que se fomenta el uso adecuado del espacio público como un bien común de la ciudadanía.

Este proyecto reconoce el consumo de SPA como una problemática social y de salud pública que exige un abordaje regulatorio claro y proporcional, fundamentado en principios de prevención, reducción de riesgos y la protección de derechos fundamentales. Con este propósito, se definirán las condiciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales se regularán dichas actividades, asegurando que las medidas implementadas respeten el libre desarrollo de la personalidad de los individuos, sin comprometer la seguridad, la salud y la integridad de los demás ciudadanos.

2. Sustento Jurídico**2.1. Constitución Política de Colombia**

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (Subrayado fuera de Texto)

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (Subrayado fuera de Texto)

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. (Subrayado fuera de Texto)

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. (Subrayado fuera de Texto)

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. (...)

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. (...) (Subrayado fuera de Texto)

Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales.

Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo

de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. (Subrayado fuera de Texto)

2.2. **Ámbito Legal**

2.2.1. **Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.**

Artículo 1. Naturaleza del Sistema General de Participaciones. Reglamentado por el Decreto Nacional 1101 de 2007. El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley.

Artículo 3. Conformación del Sistema General de Participaciones. Modificado por el Artículo 1 de la Ley 1176 de 2007. El Sistema General de Participaciones estará conformado así:

3.1. Una participación con destinación específica para el sector educativo, que se denominará participación para educación.

3.2. Una participación con destinación específica para el sector salud, que se denominará participación para salud. (Subrayado fuera de texto)

Artículo 42. Competencias en salud por parte de la Nación. Adicionado por el Artículo 32 de la Ley 1176 de 2007. Adicionado por el Artículo 5 de la Ley 1438 de 2011. Corresponde a la Nación la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, de acuerdo con la diversidad regional y el ejercicio de las siguientes competencias, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones:

42.1. Formular las políticas, planes, programas y proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud y coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación.

42.2. Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de inversión en materia de salud, con recursos diferentes a los del Sistema General de Participaciones.

(...)

42.11. Establecer mecanismos y estrategias de participación social y promover el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud. (...) (Subrayado fuera de texto)

Artículo 43. Competencias de los departamentos en salud. Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones: (...)

43.1.2. Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación o en armonía con éstas.

43.1.5. Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas que expida el Ministerio de Salud, así como las actividades que desarrollan los municipios de su jurisdicción, para garantizar el logro de las metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades competentes.

43.3. De Salud Pública

(...)

44.3.2. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, promoverá la coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes sectores para la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en salud pública en su ámbito territorial.

43.3.5. Monitorear y evaluar la ejecución de los planes y acciones en salud pública de los municipios de su jurisdicción. (Subrayado fuera de texto)

2.2.2. Ley 1566 de 2012 “Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias” psicoactivas”.

Artículo 1. Reconocimientos. Reconózcase que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y las Políticas Públicas Nacionales en Salud Mental y para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

¹**Artículo 2. Atención Integral.** Toda persona que sufra trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, tiene derecho a ser atendida en forma integral por las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones públicas o privadas especializadas para el tratamiento de dichos trastornos. (...)

Parágrafo 3°. Podrán utilizarse recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado –Frisco– para el fortalecimiento de los programas de prevención, mitigación, superación y desarrollo institucional, establecidos en el marco de la Política Nacional para la reducción del consumo de sustancias estupeficientes o psicotrópicas y su impacto. (Subrayado fuera de texto)

Artículo 3. Servicios de atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas. La atención de las personas con consumo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas referidas en el artículo 1° de la presente ley, se realizará a través de los servicios de salud habilitados en instituciones prestadoras de salud (IPS) de baja, mediana y alta complejidad, así como en los servicios para la atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas, debidamente habilitados.

Estos servicios se podrán prestar a través de cualquiera de las modalidades de atención establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, entre los cuales se encuentran: los servicios amigables para adolescentes y jóvenes, de carácter público o privado, unidades de salud mental de baja, mediana y alta complejidad, los centros de atención comunitaria, los equipos básicos de atención primaria en salud, entre otras modalidades que formule el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 5. Sanciones. Los Centros de Atención en Drogadicción (CAD), y Servicios de Farmacodependencia y demás instituciones que presten servicios de atención integral a las personas con consumo, abuso o adicción a sustancias psicoactivas que incumplan las condiciones de habilitación y auditoría, se harán acreedores a la aplicación de las medidas y sanciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud para tal efecto.

Artículo 6. Promoción de la salud y prevención del consumo. El Gobierno Nacional en el marco de la Política Pública Nacional de Prevención y Atención a la adicción de sustancias psicoactivas formulará líneas de política, estrategias, programas, acciones y procedimientos integrales para prevenir el consumo, abuso y adicción a las sustancias mencionadas en el artículo 1° de la presente ley, que asegure un ambiente y un estilo de vida saludable, impulsando y fomentando el desarrollo de programas de prevención, tratamiento y control del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas al interior del lugar de trabajo, las cuales serán implementadas por las Administradoras de Riesgos Profesionales.

¹ Ley 1566. (2012). Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias" psicoactivas. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48678>

Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y las entidades territoriales deben cumplir con la obligación de desarrollar acciones de promoción y prevención frente al consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, en el marco del Plan Nacional de Salud Pública, Plan Decenal de Salud Pública, Planes Territoriales de Salud y Plan de Intervenciones Colectivas y demás políticas públicas señaladas en la presente ley.

Tales acciones de promoción y prevención requerirán para su construcción e implementación la participación activa de todos los sectores productivos, educativos y comunitarios en las respectivas entidades territoriales.

Artículo 7. Proyecto institucional preventivo. De conformidad con lo preceptuado en el artículo anterior, las Administradoras de Riesgos Profesionales, a través de los programas de salud ocupacional, implementarán el proyecto institucional preventivo del consumo, abuso y adicción a las sustancias mencionadas en el artículo 1° de la presente ley, en el ámbito laboral. }

Así mismo, apoyarán la ejecución de programas, proyectos y actividades de prevención del consumo indebido de dichas sustancias, mediante la entrega de información, formación y capacitación del talento humano en todos los niveles, en consonancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

2.2.3. Ley 30 de 1986 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”

Artículo 1. Las expresiones empleadas en este Estatuto se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas; salvo las definiciones contenidas en él, a las cuales se les dará el significado expresamente establecido en sus disposiciones o en las que regulen la misma materia.

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se adoptarán las siguientes definiciones:

- a) Droga: Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo modifica sus funciones fisiológicas.
- b) Estupefaciente: Es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo dependencia.
- c) Medicamento: Es toda droga producida o elaborada en forma farmacéutica reconocida que se utiliza para la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de las enfermedades de los seres vivos.
- d) Psicotrópico: Es la droga que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo efectos neuro-psico-fisiológicos.
- e) Abuso: Es el uso de droga por una persona, prescrita por ella misma y con fines no médicos.

f) Dependencia Psicológica: Es la necesidad repetida de consumir una droga, no obstante sus consecuencias.

g) Adicción o Drogadicción: Es la dependencia de una droga con aparición de síntomas físicos cuando se suprime la droga.

h) Toxicomanía: Entiéndase como dependencia a sustancias médicamente calificadas como tóxicas.

i) Dosis Terapéutica: Es la cantidad de droga o de medicamento que un médico prescribe según las necesidades clínicas de su paciente.

j) Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo. Declarado Exequible por la Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1994}

Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos.

No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad.

k) Precursor: Es la sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales se producen, sintetizan u obtienen drogas que puedan producir dependencia.

l) Prevención: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir y evitar la dependencia.

m) Tratamiento: Son los distintos métodos de intervención terapéutica encaminados a contrarrestar los efectos producidos por la droga.

n) Rehabilitación: Es la actividad conducente a la reincorporación útil del farmacodependiente a la sociedad.

ñ) Plantación: es la pluralidad de plantas, en número superior a veinte (20) de las que pueden extraerse drogas que causen dependencia.

o) Cultivo: Es la actividad destinada al desarrollo de una plantación en los términos descritos en el literal anterior.

2.2.4. Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia

Artículo 20. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra: (...) 3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización.

2.2.5. Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social y se dictan otras disposiciones”.

Artículo 12. De la atención primaria en salud. Adáptese la Estrategia de Atención Primaria en Salud que estará constituida por tres componentes integrados e interdependientes: los servicios de salud, la acción intersectorial/transectorial por la salud y la participación social comunitaria y ciudadana.

La Atención Primaria en Salud es la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio de las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La atención primaria hace uso de métodos, tecnologías y prácticas científicamente fundamentadas y socialmente aceptadas que contribuyen a la equidad, solidaridad y costo efectividad de los servicios de salud. Para el desarrollo de la atención primaria en salud el Ministerio de la Protección Social deberá definir e implementar herramientas para su uso sistemático como los registros de salud electrónicos en todo el territorio nacional y otros instrumentos técnicos.

2.2.6. Ley 1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.”

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regular y establecer sus mecanismos de protección.

Artículo 2. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.

Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado.

Ahora bien, la Ley Estatutaria de Salud contempla como obligaciones a cargo del Estado, formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar su goce efectivo, en igual trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello, la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del sistema, así como la formulación y adopción de políticas

que propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales.

Asimismo, permite a todas las instituciones y entidades estatales, generar acciones que se encaminan a la promoción de la salud en torno a prevención y reducción de riesgos a través de acciones colectivas que garanticen el goce pleno del derecho a la salud.

Finalmente, el Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera describe la necesidad de “abordar el problema del consumo como un tema de salud pública, con programas de prevención, atención y rehabilitación de los consumidores”². En tal medida, “La política frente al consumo de drogas ilícitas debe ser una prioridad y una política de Estado que requiere, entre otros, el fortalecimiento de las capacidades, tanto nacionales como territoriales, en el marco del sistema de protección social, y la disposición correspondiente de recursos (...).

³En consecuencia, se reglamentó la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas mediante la resolución 089 de 2019, la cual constituye:

“Una apuesta de política de carácter integral, sostenible, continua y ordenada, orientada a transformar los determinantes sociales, familiares e individuales que favorecen el consumo de sustancias psicoactivas. Esto, a través del fortalecimiento de los factores protectores, procesos de prevención, tratamiento, rehabilitación integral e inclusión social, que aborden de manera transversal la reducción de daños como las acciones que hacen parte de la atención integral y que minimizan la afectación individual y colectiva”.⁴

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el desarrollo legal dentro del Distrito Capital, el Decreto 48 de 2009 de la Alcaldía Mayor de Bogotá conforma el Consejo Distrital de Estupefacientes, por medio del cual le asigna funciones de formulación de los planes y programas que deban ejecutarse en el Distrito Capital, con el objeto de promover, prevenir, proteger, restablecer y garantizar los derechos de las personas y grupos poblacionales afectados por la producción, tráfico y consumo de sustancias adictivas, en consonancia con las directrices del Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Estupefacientes.

En atención a lo anterior, se adopta mediante Acuerdo 376 de 2009, “Mediante el cual se establecen lineamientos para la Política Pública Distrital para la prevención del consumo de tabaco alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños,

² CANCELLERÍA. (2016). Cartilla Pedagógica: Acuerdo Final para la Terminación Del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable Duradera. Abc Acuerdo Final. Recuperado de: <https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/cartillaabcdelacuerdofinal2.pdf>

³ JEP. (2016). Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera. Recuperado de: https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/Texto-Nuevo-AcuerdoFinal.pdf?csf=1&e=0fpYA0

⁴ MINISTERIO DE SALUD. (2019). Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Recuperado de: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-089-de-2019.pdf>

niñas y adolescentes en Bogotá, D.C." y posteriormente, el Decreto 691 de 2011 adopta la Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C.

Asimismo, el Acuerdo 751 de 2019 fortalece la difusión de estrategias de información y comunicación definidas por el Consejo Distrital de Estupefacientes para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en armonía con la política pública vigente de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, política que tenía como plazo perentorio el año 2021.

2.2.7. Decreto 691 de 2011 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., Por medio del cual se adopta la Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C.

Artículo 1. Objetivo. Adóptese la Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la vinculación a la oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C., para el Decenio 2011 – 2021, que en adelante y para los efectos del presente Decreto se denominará la Política Pública.

Parágrafo. La Política Pública se articulará con las políticas distritales y sectoriales que promueven el mejoramiento de la calidad de vida y salud, que se formulen en el periodo de vigencia de la misma.

Artículo 2. Objetivo General. La Política Pública tiene como objetivo general establecer las directrices para el abordaje integral, articulado y continuo del fenómeno del consumo y la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas, reconociendo las múltiples manifestaciones del fenómeno y la diversidad poblacional y cultural que caracteriza al Distrito Capital.

Parágrafo 1. La implementación de la Política Pública, tiene presente que el fenómeno del consumo está mediado por los efectos contingentes en la salud física, mental, social, y por los factores históricos, políticos, económicos y culturales que influyen en las dinámicas y relaciones que se establecen con las sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales.

Parágrafo 2. Para el logro de este objetivo corresponde a las entidades del Distrito Capital ubicar en un lugar de preferencia de la agenda social temas como la atención, la prevención del consumo y la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas, y promover acciones de intervención con base en un enfoque de derechos.

Artículo 4. Principios orientadores de la Política Pública. La Política Pública se desarrollará con observancia de los siguientes principios:

Universalidad. Este principio se aplica teniendo en cuenta que la Política está dirigida a todos/as los/as ciudadanos/as residentes y transeúntes en el Distrito Capital, como partícipes de la transformación del fenómeno y con plenos derechos en materia de prevención y atención, con oportunidad, eficiencia, calidad y equidad.

Equidad. Entendida como la ausencia de diferencias sistemáticas, injustas y potencialmente evitables entre poblaciones o grupos poblacionales definidos social, cultural, económica, demográfica o geográficamente, lo que implica aplicar el principio de a cada cual según su necesidad y de a cada quien según su capacidad. En términos de capacidades, implica que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y que ninguna persona esté en desventaja para alcanzarlo.

Participación ciudadana. A través de la cual se reconocen las diferentes representaciones sociales, elementos culturales, simbólicos y relacionales en la voz y narraciones de los ciudadanos, y se construye coordinadamente la prevención y atención del fenómeno, de la mano del análisis de los diferentes sectores, instituciones y en articulación con las políticas públicas distritales.

Sostenibilidad, gestión y continuidad. Son elementos importantes para una nueva y específica Política Pública, que intenta responder a un fenómeno de alto impacto social que requiere urgente atención y, por tanto, movilización de todo tipo de recursos políticos, técnicos, económicos y sociales, entre otros, para su implementación progresiva y permanente.

2.2.8. Acuerdo 751 de 2019 “Por medio del cual se fortalece la difusión de estrategias de información y comunicación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas”

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto fortalecer la difusión de estrategias de información y comunicación definidas por el Consejo Distrital de Estupefacientes para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en armonía con la política pública vigente de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá.

Artículo 2. La Administración Distrital definirá los espacios y elementos de publicidad institucional para la difusión de las estrategias definidas en el artículo 1.

Parágrafo. Se priorizarán los espacios distritales de mayor afluencia de público tales como la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público, el espacio público, entre otros.

2.3. Precedentes

2.3.1. Sentencia C – 127 de 2023 (27 de abril de 2023)

La Corte Constitucional ha abordado la prohibición absoluta del consumo de sustancias psicoactivas, incluso de la dosis personal, en parques, considerando que esta medida es idónea para proteger los derechos de los niños que frecuentan dichos espacios. Esto se debe a que garantiza un entorno seguro para el ejercicio integral de sus derechos fundamentales.

Respecto a la conducta relacionada con el porte de sustancias psicoactivas o medicamentos con fines de consumo personal en parques, la Corte determinó que dicha conducta no representa una amenaza efectiva para los derechos de los niños. Esto se debe a que llevar consigo dichas sustancias, ya sea para consumo propio o por razones médicas, constituye una acción sin relevancia externa que no pone en peligro los derechos fundamentales de los menores. No obstante, la Corte sostuvo que la prohibición sí es constitucional cuando se trata del porte con fines distintos al consumo personal o medicado, pues este tipo de comportamiento carece de protección constitucional superior.

Las restricciones a la libertad individual deben fundarse en (i) el respeto a los derechos de los demás y (ii) la preservación del orden jurídico. Estas limitaciones no pueden anular completamente la posibilidad de realización personal del individuo. Por ello, son legítimas y proporcionadas siempre que tengan "fundamento jurídico constitucional" y respeten el núcleo esencial de los derechos fundamentales.

En este caso, el juicio de razonabilidad y proporcionalidad aplicado por la Corte fue estricto, debido a los siguientes factores:

- ❖ La regulación restringe de manera amplia y general ciertas conductas, configurando una prohibición absoluta.
- ❖ La medida afecta derechos constitucionalmente protegidos, como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud.

La restricción impone limitaciones significativas a estos derechos, pues convierte a la prohibición en la regla general, sin contemplar siquiera excepciones claras. En su providencia, la Corte estudió la tensión entre diversos derechos fundamentales:

Por un lado, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a la salud de los consumidores, al imponerse una limitación que prohíbe el porte y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos como parques, incluso cuando se trata de dosis personales.

Por otro lado, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, quienes frecuentan dichos espacios públicos y requieren protección frente al consumo y porte de estas sustancias.

La Corte enfatizó que el análisis de constitucionalidad se realizó mediante un juicio de razonabilidad y proporcionalidad en sentido estricto, guiado por los principios de interés superior del menor y pro infans. En consecuencia, la Corte decidió lo siguiente:

- ❖ Respecto al artículo 140.13 de la Ley 1801 de 2016, declarar exequible la expresión "*portar*", en el entendido de que esta restricción no se aplica cuando se trata de porte con fines de consumo propio o de dosis medicada.

Asimismo, declarar exequibles las expresiones "*consumir*", "*sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal*" y "*en parques*", siempre que dicha restricción se aplique en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme a la regulación expedida por las autoridades de policía competentes en cada nivel de gobierno.

2.3.2. Acuerdo 927 de 2024. “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

5.1. Bogotá avanza en seguridad: Bogotá debe ser una ciudad en la que cada uno pueda vivir sin miedos, y sin necesidades, en dónde todos sus habitantes se puedan desplazar tranquilamente en los ámbitos urbano, rural y regional; disfrutar del espacio público, vivir, trabajar y soñar sin restricciones; donde especialmente las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, puedan caminar y moverse sin sentir miedo y no haya espacio para el accionar delincuencia y violento. Para ello, se debe construir una ciudad en la que se respete la vida, la diferencia, la propiedad y donde se construyan y fortalezcan lazos de confianza y convivencia entre las personas, así como entre la ciudadanía y sus instituciones. De esta manera se garantiza el bienestar de las personas y el desarrollo del potencial de la ciudad. (...)

Artículo 7. Propósito y estrategias del objetivo estratégico “Bogotá avanza en seguridad”. Bogotá debe ser una ciudad en la que todos sus habitantes se puedan desplazar tranquilamente en los ámbitos urbano, rural y regional; disfrutar del espacio público, y vivir, trabajar y soñar sin restricciones, en la que, de manera central, las poblaciones de especial protección (las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, LGTBI, grupos étnicos, población con discapacidad) puedan caminar sin sentir miedo y no haya espacio para el accionar delincuencia y violento. (...)

8.5. Programa 5. Espacio público seguro e inclusivo. El espacio público en Bogotá se entiende como un escenario fundamental para que la ciudadanía ejerza sus derechos y pueda relacionarse en sana convivencia. Desde el enfoque de seguridad integral, ello se promueve tanto a partir de la focalización de estrategias de monitoreo y control, como de la intervención para la recuperación y generación de oportunidades formales y legales para su disfrute y, en general, a partir de la implementación de acciones que propicien el goce efectivo del derecho a la ciudad. Bogotá fortalecerá las capacidades para la seguridad y la convivencia en el espacio público con miras a que la ciudadanía pueda hacer uso y disfrute de este, sin temor a amenazas o actos violentos que comprometan la vida y la libertad de los ciudadanos, con especial atención en los riesgos que enfrentan las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. (...)

Artículo 192. Formulación y puesta en marcha de la política pública distrital de sustancias psicoactivas y su plan de acción con metas e indicadores. En cabeza de la Secretaría Distrital de Salud y en coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad, Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de Planeación, la administración distrital formulará la nueva Política Distrital de Sustancias Psicoactivas, que en

desarrollo de la Política Nacional de Drogas 2023-2033, la sentencia C 127 de 2023 de la Corte Constitucional, el enfoque de prevención y reducción de riesgos y daños por consumo de SPA, esta política contará con objetivos, metas indicadores, plan de acción, presupuesto, que atienda las disponibilidades fiscales de mediano plazo del sector en el marco de gasto y otros requerimientos técnicos que en su formulación y puesta en marcha le permitan contar con herramientas para su desarrollo, en el corto, mediano y largo plazo.

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de que el CONPES Distrital determine un instrumento de acción pública alternativa o complementario.

3. Contexto Internacional, nacional y Distrital

3.1. Contexto Internacional.

3.1.1. Estados Unidos de América.

Las zonas libres de droga son herramienta clave en la lucha contra este tipo de sustancias, su porte y consumo en estas zonas acarrea al infractor una pena más severa a que si lo hiciese en otro lugar (penas de tipo penal o administrativo, acorde al Estado),⁵ inicialmente se establecieron cerca de centros educativos y otros lugares como iglesias, guarderías y centros comerciales. Las zonas allí varían su tamaño acorde a la legislación estatal:

	State	Percent Covered by Drug-Free Zones	Total Area Covered ¹ (Square Miles)
1.	Alabama	73%	38,267
2.	South Carolina	18%	5,764
3.	Arizona	17%	19,378
4.	Pennsylvania	13%	5,987
5.	Connecticut	11%	610
6.	Florida	10%	6,576
7.	Mississippi	10%	4,844
8.	Utah	10%	8,490
9.	Nevada	9%	9,952
10.	Rhode Island	6%	93

3.1.2. Países Bajos

Han establecido medidas para prohibir la venta y consumo en zonas aledañas a los colegios; en el 2017, por ejemplo la Corte holandesa estableció que la alcaldía podía regular los horarios de apertura de los *coffeshops* (en donde se puede

⁵ PROJECT KNOW (2023). Analyzing Drug Free Zones across America, Disponible en la página web:<https://www.projectknow.com/discover/analyzing-drug-free-zones-across-america/>

consumir) que se encontraran a 250 metros de escuelas, lo anterior con la idea que la venta del cannabis se diera en un horario no escolar.⁶

3.2. Contexto Nacional.

Dentro del marco de la Política Nacional de Drogas, se establecen los lineamientos y estrategias para mitigar y prevenir el consumo de SPA, sin embargo en la realidad local, municipal y departamental no existen directrices desde los planes de desarrollo. La intencionalidad del mismo es iniciar proceso de promoción y prevención que permitan investigar y teorizar la realidad social, a través de políticas públicas y programas o proyectos de desarrollo humano social y sostenible para mitigar y prevenir el alto consumo en el departamento de La Guajira.

Existen marcadas diferencias territoriales en las tasas de atención en salud mental y consumo problemático de sustancias psicoactivas (SPA), que oscilan entre 2,2 y 29,3 casos por cada 100.000 habitantes. Además, el 53% de la oferta en servicios de salud mental y atención por consumo de SPA se concentra en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y la ciudad de Bogotá. Esta distribución desigual refleja un acceso limitado en otras regiones, agravando las disparidades en la atención a estas problemáticas.

A pesar de que se estima que alrededor de 700.000 personas en el país requieren tratamiento por consumo problemático de SPA, la capacidad instalada es insuficiente. En promedio, solo hay un servicio de atención por cada 1.000 personas, y apenas el 9,4% de quienes lo necesitan reciben tratamiento adecuado (Observatorio Nacional de Salud Mental, 2019). Estas cifras ponen de manifiesto una brecha significativa entre la demanda de atención y la oferta disponible, lo que limita la efectividad de los servicios de salud.

Aunque las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud deberían subsanar estas carencias, de las 42 EPS que operan en el país, apenas el 11,9% (cinco EPS) cuentan con habilitación para brindar atención integral en salud mental y en rehabilitación o reducción del daño por consumo de SPA (Observatorio Nacional de Salud Mental, 2019). Esta situación no solo afecta el acceso inicial a los servicios, sino también la continuidad y adherencia a los tratamientos, factores clave para una recuperación efectiva (Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, 2017).

La insuficiente oferta de servicios y las barreras para la atención integral destacan la necesidad urgente de fortalecer las capacidades del sistema de salud en todo el territorio nacional. Garantizar el acceso equitativo y la calidad en la atención para las personas con problemas de salud mental y consumo problemático de SPA es un paso esencial para enfrentar esta crisis de salud pública de manera efectiva.

⁶ ABC. Cierra el coffee shop más antiguo de Ámsterdam por estar cerca de una escuela. Disponible en la página web: https://www.abc.es/sociedad/abci-cierra-coffee-shop-mas-antiguo-amsterdam-estar-cerca-escuela201701021927_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fsociedad%2Fabci-cierra-coffee-shop-mas-antiguoamsterdam-estar-cerca-escuela-201701021927_noticia.html

3.3. Contexto Distrital.

El desarrollo de competencias socioemocionales constituye un factor protector fundamental en la vida personal y social, ya que favorece el manejo efectivo de situaciones interpersonales y contribuye a reducir eventos negativos como problemas de convivencia, abuso de sustancias psicoactivas (SPA). Según el Departamento Nacional de Planeación (2017) y el Ministerio de Salud y Protección Social (2015), la identificación oportuna de síntomas mentales permite un ingreso temprano al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), evitando la progresión de estas condiciones. Estas competencias están directamente relacionadas con la percepción de felicidad, el funcionamiento social y el bienestar general (Fernández B & Extremera, 2009)

Por otro lado, el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en Bogotá evidencia un problema social y de salud pública que exige atención prioritaria. De acuerdo con los datos más recientes, 19 de cada 100 personas han consumido alguna sustancia ilícita en algún momento de su vida, mientras que 6 de cada 100 lo hicieron en el último año (2023). Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a los hombres, quienes presentan el doble de prevalencia en la vida, tres veces más en el último año y hasta 3.5 veces más en el último mes, en comparación con las mujeres. Estas disparidades de género requieren estrategias diferenciadas para abordar la problemática.

El análisis por estratos socioeconómicos revela que las tasas de consumo son más altas en los estratos 4, 5 y 6, mientras que el estrato 2 presenta la menor prevalencia anual. Este hallazgo subraya la importancia de orientar políticas públicas hacia las poblaciones con mayor consumo y aquellas donde los recursos de prevención y tratamiento son insuficientes para satisfacer la demanda.

Tabla 41 Consumo reciente (prevalencia* y número de consumidores de último año) de cualquier sustancia ilícita e intervalos del 95% de confianza según estrato socioeconómico

Estrato socioeconómico	Prevalencia (%)			Número de casos		
	Estimación	I. de C.		Estimación	I. de C.	
1	4.49	3.01	5.97	32.183	21.586	42.780
2	4.43	3.27	5.59	99.690	73.586	125.794
3	5.52	3.46	7.58	140.896	88.233	193.559
4, 5 y 6	13.04	7.39	18.69	127.315	72.117	182.513
Total	6.16	4.91	7.41	400.117	318.714	481.520

*Prevalencia de último año incluye las siguientes drogas: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, inhalables, dick y heroína.

En cuanto al abuso y la dependencia de sustancias ilícitas, se estima que más de 161 mil personas presentan patrones problemáticos de consumo, lo que equivale al 2.49% de la población general. De esta cifra, los hombres representan el 3.37%, mientras que las mujeres alcanzan el 1.66%. Además, entre quienes consumieron sustancias ilícitas en el último

año (2023), el 37% de los hombres y el 35% de las mujeres presentan abuso o dependencia, destacando la necesidad de reforzar programas de tratamiento específicos.

Geográficamente, el consumo problemático se concentra en ciertas zonas de la ciudad. La zona 5 presenta el mayor porcentaje de personas con abuso o dependencia, con un 61.54% de quienes consumieron sustancias ilícitas en el último año, lo que significa que 7 de cada 10 personas en esta zona exhiben patrones problemáticos. En contraste, la zona 4 tiene la tasa más baja, aunque estas diferencias reflejan también variaciones en tamaño poblacional y densidad de consumo.

Zona	Número de personas	% respecto a	
	Abuso o dependencia	Población total	Consumidores último año
1	5.829	3.39	46.81
2	16.005	4.00	25.94
3	24.325	1.44	34.94
4	6.186	0.61	8.01
5	38.977	3.71	61.54
6	18.876	3.52	57.49
7	8.347	2.55	44.16
8	1.835	1.25	30.52
9	19.871	2.80	41.33
10	21.540	4.67	38.78
11	9	0.30	48.80
Total	161.800	2.49	36.30

Los datos se refieren a marihuana, cocaína y basuco.

Zona 1 Centro oriente: Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria. Zona 2 Norte: Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo. Zona 3 Suroccidente: Kennedy, Bosa y Puente Aranda. Zona 4 Occidente: Engativá y Fontibón. Zona 5 Suba: Suba. Zona 6 Ciudad Bolívar: Ciudad Bolívar. Zona 7 Usme: Usme. Zona 8 Tunjuelito: Tunjuelito. Zona 9 Rafael Uribe: Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y San Cristóbal. Zona 10 Usaquén: Usaquén. Zona 11 Sumapaz: Sumapaz.

Para consultar el mapa de abuso o dependencia de cualquier sustancia ilícita visite el enlace <https://bit.ly/ECSPBOG-5>, o escanee el código QR:



4. Justificación del Proyecto de Acuerdo

4.1. Uso de Sustancias Psicoactivas (SPA).

Gran parte de la literatura científica y la percepción social consideran que los consumidores de drogas presentan un déficit de autocontrol derivado de la cantidad, severidad y cronicidad del consumo.⁷ Este marco sitúa el abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (SPA) como dañino únicamente cuando el consumo no es regulado y afecta negativamente la salud del individuo.

Si bien se ha constatado que se presenta un déficit de autocontrol en los consumidores de drogas, hay que sopesar una salvedad y es que, cerca del 87%⁸ de la población que consume habitualmente SPA ilegales en el mundo lo hacen de manera consciente y controlada, en ese orden de ideas, no sufren ningún trastorno por el consumo, por lo que, “es posible abordar esta cuestión desde otro punto de vista, que se refiere a la posibilidad de que muchos consumidores de drogas sean capaces, en buena medida, de ejercer un control específico de su consumo de drogas.”⁹

De acuerdo con la literatura científica contemporánea y numerosos estudios efectuados alrededor del mundo es posible ejercer un uso racional y consciente de SPA en la sociedad, llevando a cabo diferentes estrategias para manejar el consumo. Un ejemplo de ello nos lo ofrece Rodner (2006)¹⁰ en el cual se establece que las personas siguen una serie de normas implícitas para tener control total del consumo de SPA como:

1. **Autocontrol** (no consumir fuera del tiempo de ocio, para que la droga no afecte a las responsabilidades diarias, pensando que si las drogas se utilizan con demasiada frecuencia pierden su sentido lúdico, dejando de consumir por periodos de tiempo prolongado (...));
2. **Control Ambiental** (adquiriendo las drogas proveedores de confianza, conociendo bien el tipo de pastillas, consumir en un ambiente seguro, con gente de confianza, comiendo de forma saludable antes y después de la droga, bebiendo agua cuando se toma éxtasis, consumiendo en lugares privados y no públicos);
3. **Rechazando lo marginal o excesivo** (rechazando el consumo de cocaína la ruta inyectada, mostrando preocupación por el consumo de los menores, fortaleciendo el sentido de pertenencia a un grupo de personas que controlan el consumo frente al grupo marginal de droga dependientes. Por lo anterior, se considera que la gran mayoría de la población consumidora posee la capacidad de definir y percibir el consumo de SPA como una actividad de ocio que no les impide tener una vida normal, en la que estudie o trabaje a lo largo de su semana,

⁷ AMIGÓ, S. (2017). Manual Para el Consumo Moderado y Responsable de Drogas. Editorial ACCI Ediciones- Asociación Cultural y Científica Iberoamericana. (Pág.15)

⁸ UNODC. (2021). Informe Mundial sobre Drogas 2021: los efectos de la pandemia aumentan los riesgos de las drogas, mientras los jóvenes subestiman los peligros del cannabis. Recuperado de: <https://www.unodc.org/peruandecuador/es/noticias/2021/informe-mundial-sobre-drogas-2021.html>

⁹ AMIGÓ, S. (2017). Manual Para el Consumo Moderado y Responsable de Drogas. Editorial ACCI Ediciones- Asociación Cultural y Científica Iberoamericana. (Pág.16).

¹⁰ RODNER, S. (2006). Practicing risk control in a socially disapproved area: Swedish socially integrated drug users and their perception of risks. Journal of Drug Issues. (Pág.933-951).

es entonces donde cabe la posibilidad de romper con el perfil consumidor que se tiene en la sociedad capitalina, como un individuo marginal y rebelde a uno que se encuentra totalmente adaptado a la sociedad.

Ahora bien, cabe aclarar que este tipo de consumidor no es ajeno a sucesos fatales como, *“Sobredosis, comas etílicos, accidentes bajo los efectos de las drogas, tráfico mayor de drogas, con las consiguientes consecuencias penales, e incluso muertes por golpes de calor, parada cardiorrespiratoria y otras complicaciones, en el terreno sanitario”*¹¹. La gran mayoría de estos sucesos están determinados por una serie de factores derivados de *“La adulteración de las drogas, ambientes en ocasiones poco recomendables donde habitualmente se consume y, sobre todo, una deficiente información sobre cómo hay que reducir los riesgos y peligros de las drogas.”*¹²

4.2. Tipos de Consumo de Sustancias Psicoactivas:

Aunado a lo anterior, existen diversas formas de consumir SPA y, en consecuencia, de consumidores, cuyas diferencias están relacionadas con el entorno, lugar, propósito del consumo, la regularidad en que se consume, entre otras, así pues, se construye una caracterización del consumidor y la prevalencia del consumo enmarcado en los siguientes cuatro subgrupos de acuerdo con el ICBF¹³:

- A. **Consumo experimental:** “En este punto se inicia el consumo de sustancias psicoactivas (no es una línea determinante del patrón de consumo). Se produce cuando el individuo toma contacto con la droga o drogas, puede ser por curiosidad o por presión grupal. Puede o no continuar con el consumo de esa sustancia”. Este tipo de consumo puede continuar con el abandono después del contacto inicial con la sustancia o proseguir con el consumo y tener contacto con una o varias sustancias.
- B. **Consumo social: de acuerdo con el ICBF este:** “Se consume de forma ocasional o durante reuniones con círculos de amigos o momentos de ocio. Puede o no tener un patrón regular. Su objetivo es la búsqueda de experiencias agradables y placenteras”.
- C. **Consumo habitual:** en el cual “se observa un encadenamiento y ritual de consumo, y un debilitamiento y extinción de los mecanismos de autocontrol. Es aquí donde se instalan comportamientos de consumo. Estos no son tan adaptativos, por lo que se remarcen las conductas y situaciones de riesgo. La droga adquiere un papel y un lugar en la vida del consumidor”. En este tipo de consumo, las situaciones en las que se recurre a las drogas crecen, ya que el individuo las utiliza tanto en grupo como de manera individual.

¹¹ AMIGÓ, S. (2017). Guía Del Uso Racional De Las Drogas. Editorial ACCI Ediciones- Asociación Cultural y Científica Iberoamericana. (Pág. 1-47).

¹² AMIGÓ, S. (2017). Guía Del Uso Racional De Las Drogas. Editorial ACCI Ediciones- Asociación Cultural y Científica Iberoamericana. (Pág. 1-47).

¹³ ICBF. ABC Consumo de Sustancias Psicoactivas. Recuperado de: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/abc_consumo_de_sustancias_psicoactivas_-_spa.pdf

- D. **Consumo problemático:** de acuerdo con el ICBF “provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo. Se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses: tolerancia, abstinencia, deseo persistente e intentos fallidos de abandonar el consumo de SPA, ansias o necesidad de consumir la sustancia, consumo recurrente de la sustancia que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales, problemas sociales o interpersonales provocados por el consumo de sustancias.

Así mismo, en Columbia Británica se desarrolló un estudio denominado *Provincial Guidelines for Biopsychosocial Spiritual Withdrawal Management Services* (2017)¹⁴, en donde se añade un nuevo espectro dentro del consumo de SPA, estableciendo el uso de SPA como una alternativa terapéutica y medicinal que puede ser beneficiosa para el ser humano, dejando de ser únicamente experiencias de placer y se presenta como una herramienta para domesticar dolencias e influir positivamente en el tratamiento de la depresión, las adicciones y el estrés postraumático.

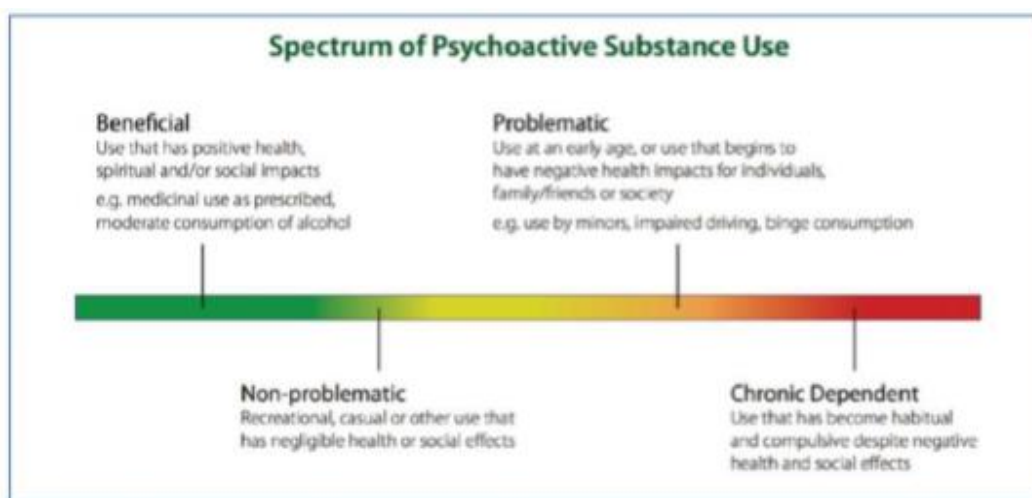


Figura 2: Espectro de consumo de Sustancias Psicoactivas Fuente: *Provincial Guidelines for Biopsychosocial Spiritual Withdrawal Management Services* (2017).

Es evidente que cada uno de los tipos de consumo deben tratarse con distinción, a través de estrategias y enfoques diferenciales que se inclinan por la transformación social, en tanto, se complementan con programas de reducción de riesgos y daños en donde el consumidor tenga un mayor protagonismo y se encuentre en un entorno más amigable.¹⁵

Lo anterior con el fin de garantizar que, si el individuo en cuestión decide no abandonar el consumo de SPA, se propenda minimizar los efectos negativos y no se perturbe su salud o integridad propia y, tampoco la de su alrededor.

¹⁴Tomado de <https://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2017/adult-withdrawal-management-services-guidelines-final.pdf>, revisado el 15 de enero de 2025

¹⁵ ÉCHELE CABEZA. (2023). Guía de buenas prácticas para la gestión de placeres, la reducción de daños y el bienestar en los espacios de fiesta. Bogotá.

4.3. Consumo de SPA en Niños, Niñas y Adolescentes: Prevalencia.

Por otro lado, el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes debe ser tratado, mediante una estrategia diferencial. Según el Estudio de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C. realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el 2022: diferenciados por grupo de edad “la mayoría de las personas que cumplen los criterios de abuso y dependencia están entre los 12 y 17 años, y representan 27.477 personas de la población total de esa edad, seguido por los jóvenes, con casi el 6%”

En cualquier caso, es imperativo considerar el consumo de sustancias en menores como problemático. Se hace necesario implementar estrategias y programas específicos adaptados a las necesidades particulares de este grupo demográfico. La prevención y el tratamiento deben ser diseñados teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, así como la influencia de factores como el entorno familiar, escolar y social en su desarrollo.

4.4. Disfrute y uso del espacio público en Bogotá:

El espacio público es definido por el artículo 139 de la Ley 1801 de 2016¹⁶ como “El conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público (...), destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional.”, de modo que, es en el espacio público donde un niño, niña o adolescente se reconoce como ciudadano y aprende a ser parte de la sociedad y su funcionamiento, puesto que, estos lugares son elementos esenciales para la mejora de la calidad de la vida de las personas y del ambiente en la ciudad.

De esta manera, considerando que son los niños, niñas y adolescentes quienes permanentemente se desplazan en lugares como colegios, parques y alrededores de estos, acompañados en su mayoría por adultos o personas mayores, son las autoridades nacionales y locales las que deben garantizar que esta comunidad goce de un espacio público sano que posibilite su desarrollo adecuado y seguro, evitando la realización de actividades que puedan inducirlos al consumo de sustancias psicoactivas y prohibidas en dichos escenarios, o verse expuestos a situaciones que atenten contra sus derechos, por parte de quienes desarrollan el consumo de tales sustancias¹⁷ en los espacios públicos delimitados, en consecuencia, este proyecto busca la preservación de estas zonas para que la población constitucionalmente protegida y la comunidad en general puedan disfrutar de sus derechos a la vida, la salud, la educación, la cultura y la recreación, entre otros, sin que se vea afectada su protección Constitucional de la prevalencia de sus derechos sobre los de los demás.

¹⁶ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. (2016). Ley 1801 de 2016. Secretaría del Senado. Recuperado de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1801_2016.html

¹⁷ ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. (2019). Decreto 825 de 2019. Recuperado de <https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Decreto%20825%20de%202019.pdf>

Así, este proyecto busca fomentar el uso y goce del espacio público a través de la reglamentación sobre el consumo de sustancias psicoactivas en estos espacios, teniendo en cuenta que, cada espacio público es dinámico y se ha ido transformando conforme ha avanzado la ciudad, ajustándose a las necesidades de la población, entre ellas, de las personas de especial protección constitucional, en los cuales podemos encontrar parques, zonas verdes, zonas de recreación y deporte, plazoletas, entre otras muchas que, en especial para los niños y niñas forman parte de la infancia, siendo estos espacios públicos los lugares idóneos para la realización de actividades de recreación, deporte y desarrollo de identidad por parte de los menores, con el fin de garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales expresamente señalados en el artículo 44¹⁸ de la Constitución Política, el cual determina que “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

4.5. Primacía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

La Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” determina en sus artículos 8° y 9° el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes y la prevalencia de sus derechos en el ordenamiento jurídico, respectivamente así:

“Artículo 8°. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.

Artículo 9°. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.”

¹⁸ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 (1991). Asamblea Nacional Constituyente - Gestor Normativo. Función Pública. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

La sentencia C – 127 de 2.023 del 27 de abril del presente año, revisó la constitucionalidad de los numerales 13 y 14 del artículo 140 de la ley 1801 de 2.016. En dicha providencia se estudió la tensión de varios derechos fundamentales; por una parte, el “...libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a la salud de los consumidores, por cuanto se establece una limitación al porte y al consumo de sustancias psicoactivas, en general, que cobija la dosis personal, en los parques, áreas y zonas del espacio público, sin ninguna exclusión. [y, por otra] “...los derechos de los niños, niñas y adolescentes en relación con el consumo y porte de sustancias psicoactivas, en lugares del espacio público habitualmente concurridos por ellos.” Agregó la Corte, que el “...análisis de constitucionalidad estuvo mediado por la aplicación de un juicio de razonabilidad y de proporcionalidad en sentido estricto, que se guió por la aplicación de los principios de interés superior del menor de edad y pro infans.” Bajo ese entendido, la corte decidió:

“Primero. En relación con el artículo 140.13 de la Ley 1801 de 2016, DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “portar” en el entendido de que esta restricción no se aplica cuando se trata del porte con fines de consumo propio o de dosis medicada. Adicionalmente, DECLARAR EXEQUIBLES las expresiones “consumir”, “sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal”, “y en parques” en el entendido de que la restricción aplica, además, en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y conforme a la regulación que expidan las autoridades que ejercen poder de policía en todos los niveles, en el ámbito de sus competencias, con base en los principios pro infans, de proporcionalidad, razonabilidad y autonomía territorial, en los términos de la presente providencia

Segundo. En relación con el artículo 140.14 de la Ley 1801 de 2016, DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “portar” en el entendido de que esta restricción no se aplica cuando se trata del porte con fines de consumo propio o de dosis medicada. Adicionalmente, DECLARAR EXEQUIBLES las expresiones “consumir”, “sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal”, “en áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio. La delimitación de estas áreas o zonas debe obedecer a principios de razonabilidad y proporcionalidad”, en el entendido de que la restricción aplica, además, en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y conforme a la regulación que expidan las autoridades que ejercen poder de policía en todos los niveles, en el ámbito de sus competencias, con base en los principios pro infans, de proporcionalidad, razonabilidad y autonomía territorial, en los términos de la presente providencia.”

De lo visto, prontamente se advierte que las decisiones de exequibilidad condicionada tomadas por la Corte Constitucional en la sentencia C – 127 de 2023, sobre las normas que regulan los numerales 13 y 14 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2.016, restrictivas del consumo de “sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal” resultan adecuadas para lograr el

fin que se pretende conseguir, esto es, tener un espacio libre de drogas en lugares de interés público, recreativo, deportivo o cultural.

La decisión de la Corte persigue un fin legítimo: la protección de los riesgos prohibidos y daños en la salud de los niños, niñas, adolescentes, y personas no adictas, ello, en plena consonancia con el tan mencionado principio de precaución, con lo cual, la medida restrictiva resulta necesaria para lograr tal fin.

4.6. Derecho Fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad está consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política y protege la capacidad de las personas para definir, en forma autónoma, las opciones vitales que habrán de guiar el curso de su existencia. Este derecho presupone, que el titular del mismo tenga la capacidad y autonomía suficientes para llevar a cabo juicios de valor que le permitan establecer juicios de valor sobre su propia existencia.¹⁹

El consumo de sustancias psicoactivas ha sido asociado por la literatura jurídica al libre desarrollo de la personalidad y la Corte Constitucional, reconoció la adicción a estas no como una actividad delincencial sino como una condición en salud que per se no es problemática, por tanto, es labor del Estado garantizar la atención integral de las personas consumidoras y generar medidas educativas, preventivas y de reducción de riesgos y daños en salud.

El alto tribunal también reiteró que la Constitución no consagra una prohibición absoluta del consumo de sustancias psicoactivas y que el artículo 49 de la Carta sólo proscribe el uso y consumo de sustancias psicoactivas con el fin de prevenir y atacar la drogadicción como enfermedad y problema de salud pública.²⁰ Así las cosas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad incluye la protección del porte y consumo de la dosis personal, la dosis de aprovisionamiento, el consumo consensuado entre adultos y porte y consumo con finalidades médicas. Dicha decisión debe respetarse siempre que no afecte los derechos de las demás personas. Aunque aquella puede no compartirse y el Estado tiene la posibilidad de desestimarla.

Es entonces pertinente concluir que el Legislador puede regular, a través de normas de policía, el consumo de sustancias psicoactivas cuando resulte inadecuado o socialmente nocivo atendiendo, en todo caso, a la protección a otros derechos fundamentales como es el caso del libre desarrollo a la personalidad. Para tal efecto, son impertinentes las prohibiciones absolutas, por lo tanto se deberán fijar las circunstancias asociadas a lugar, edad y temporalidad, entre otras

4.7. Autonomía administrativa y poder de policía residual.

¹⁹ CORTE CONSTITUCIONAL (1998). Sentencia SU 642 de 1998 MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

²⁰ CORTE CONSTITUCIONAL (2011). Sentencia C-882 de 2011, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

La descentralización y la autonomía territorial son principios constitucionales y pilares fundamentales de un Estado Social de Derecho, entendiéndose como el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a las entidades territoriales regionales o locales, que son ejecutadas bajo su propio nombre y bajo su propia responsabilidad.

Bajo tal perspectiva, el nivel local adquiere notoria importancia dentro de la organización territorial y política del Estado; el artículo 288 de la Constitución establece que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, atendiendo a los lineamientos constitucionales y legales.

Así las cosas, las entidades territoriales se convierten en articuladores entre lo local y el Estado Central pues se erigen como expresión del principio democrático y de un criterio de racionalización administrativa:

“La autonomía inherente a la descentralización supone la gestión propia de sus intereses, es decir, la particular regulación de lo específico de cada localidad, pero siempre dentro de los parámetros de un orden unificado por la voluntad general bajo la forma de ley. Es decir, la normatividad propia debe estar en armonía con la ley general del Estado, ya que la parte se ordena al todo, así como lo específico está comprendido dentro de lo genérico”²¹

Por su parte, el poder de policía hace referencia a la facultad de expedir la ley de policía u otras normas que regulen la conducta ciudadana y se caracteriza por “ser de naturaleza normativa y consiste en la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de carácter general, impersonal y abstracto, orientados a crear condiciones para la convivencia social.

Este poder compete por disposición constitucional y legal al Congreso de la República, sin embargo, las entidades territoriales en virtud de los principios descritos en párrafos anteriores, tienen un poder subsidiario para regular esta materia en los asuntos que no sean de reserva legal (Ley 1801 de 2016):

“ARTÍCULO 12. PODER SUBSIDIARIO DE POLICÍA. *Las asambleas departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá, dentro de su respectivo ámbito territorial, ejercen un poder subsidiario de Policía para dictar normas en materias que no sean de reserva legal, en el marco de la Constitución y la ley.*

Estas corporaciones en el ejercicio de poder subsidiario no podrán:

1. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador.

²¹ CORTE CONSTITUCIONAL (1997). Sentencia C-497A de 1997, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

2. Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.

3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.

PARÁGRAFO 1o. *El Concejo Distrital de Bogotá podrá establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.*

PARÁGRAFO 2o. *Las normas de Policía y convivencia expedidas por el Concejo del Distrito Capital de Bogotá no están subordinadas a las ordenanzas.*

ARTÍCULO 13. PODER RESIDUAL DE POLICÍA. *Los demás Concejos Distritales y los Concejos Municipales dentro de su respectivo ámbito territorial, podrán reglamentar residualmente los comportamientos que no hayan sido regulados por la ley o los reglamentos departamentales de Policía, ciñéndose a los medios, procedimientos y medidas correctivas establecidas en la presente ley.*

Estas Corporaciones en el ejercicio del poder residual no podrán:

1. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador

2. Establecer medios, procedimientos o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.

3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.

PARÁGRAFO. *Los Concejos Municipales y Distritales podrán establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.”*

En ese sentido, las autoridades locales tienen la facultad de regular complementariamente el ejercicio de la convivencia pacífica y su relación con el espacio público en sus territorios, de forma armónica, garantizando el ejercicio de los derechos fundamentales.

Ante este panorama, el proyecto de acuerdo propone una intervención integral que contemple programas de prevención y tratamiento del consumo de sustancias ilícitas, priorizando las poblaciones y zonas más afectadas. Asimismo, se busca fomentar el desarrollo de competencias socioemocionales como herramienta clave para prevenir el abuso y la

dependencia, fortalecer redes de apoyo social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Estas acciones son fundamentales para abordar de manera efectiva esta problemática y promover un entorno más saludable y equitativo.

5. Competencia del Concejo de Bogotá.

De conformidad con el Decreto Ley 1421 expresa el artículo 12, lo siguiente: “Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)
7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.”

6. Impacto Fiscal.

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, en la medida en que el presupuesto fue proyectado dentro del marco del Plan de Desarrollo Distrital.

En mérito de lo expuesto,



JUAN JAVIER BAENA MERLANO
H.C. Partido Nuevo Liberalismo



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
H.C. Movimiento Con Toda Por Bogotá

Anexos:
Copia:
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:

7. **Articulado del Proyecto de Acuerdo.**

PROYECTO DE ACUERDO NO 214 DE 2025

PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO _____ 2025

"Por medio del cual se establecen medidas para la regulación del consumo de sustancias psicoactivas, en parques y zonas específicas del espacio público"

EL CONCEJO DE BOGOTÁ

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene como objeto establecer medidas para regular el porte y consumo de sustancias psicoactivas (SPA), en parques y espacios públicos de Bogotá.

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos del presente Acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones:

- A. Espacio Público:** Conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional (artículo 139 de la Ley 1801 de 2016).
- B. Parque:** Corresponde a un subconjunto del espacio público al que pueden concurrir todas las personas (incluidos los consumidores) que no tiene, prima facie, un uso exclusivo por parte de niños, aunque aquellos concurren habitualmente a este.
- C. Zona Histórica:** Es un sitio, edificio, monumento o área que tiene un valor significativo desde una perspectiva histórica.

- D. **Zona declarada de interés cultural:** Corresponden a aquellos bienes que, por sus valores y criterios, la autoridad competente los ha declarado mediante acto administrativo como bien de interés cultural, así como, los bienes del patrimonio arqueológico que son considerados bienes de interés cultural de acuerdo con la Ley 397 de 1997.
- E. **Niños y niñas.** Personas entre los 0 y 12 años (artículo 3º, Código de Infancia y Adolescencia)
- F. **Adolescentes.** Personas entre 12 y 18 años de edad (artículo 3º, Código de Infancia y Adolescencia).
- G. **Sustancia psicoactiva.** La sustancia psicoactiva, es aquella que, introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más de las funciones cognitivas, emocionales o psicológicas de este, y que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo efectos neuro-psicofisiológicos.
- H. **Persona consumidora.** Aquella persona que adquiere, utiliza o disfruta sustancias psicoactivas legales o ilegales, siendo diferente de quienes producen, facilitan, suministran o expiden dichas sustancias.
- I. **Dosis para consumo personal:** cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo (artículo 2º, Ley 130 de 1986)
- J. **Dosis de aprovisionamiento:** cantidad de sustancia psicoactiva mayor a la dosis mínima, que se adquiere con la finalidad de aprovisionarse de ella para luego hacer uso de ella para consumo propio.
- K. **Reducción de riesgos y daños:** Se refiere a las acciones orientadas a reducir los efectos negativos del uso de sustancias psicoactivas y los riesgos asociados a las prácticas del consumo, y a favorecer la accesibilidad a la red asistencial para estos usuarios, mejorando su calidad de vida.
- L. **Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.** Conducta penalizada (artículo 376 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011 y adicionado por el artículo 13 de la Ley 1787 de 2016).

Artículo 3. Enfoques. Las autoridades en el ejercicio de su poder de policía, residual o subsidiario, al momento de regular lo dispuesto por la normatividad vigente en materia de uso de SPA, podrán tener en cuenta:

- A. **Enfoque de salud pública:** Implementando una perspectiva de prevención y reducción de riesgos y daños asociados al consumo, identificando las necesidades individuales y colectivas y fortaleciendo y articulando las respuestas de todos los actores institucionales y comunitarios en el territorio.
- B. **Enfoque de derechos:** Protegiendo y respetando la dignidad humana y los derechos enmarcados en el reconocimiento, la participación efectiva y la respuesta diferenciada, acorde a una perspectiva integral y sin discriminación.

- C. **Enfoque étnico-racial:** Construyendo acciones que den garantía a las personas y los pueblos indígenas, rom (o gitanos), negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, respetando y protegiendo la diversidad étnica y cultural.
- D. **Enfoque de género:** Brindando todas las acciones que contribuyan a las garantías para la eliminación de las desigualdades e inequidades que han afectado históricamente a mujeres y personas LGBTIQ+ y otras con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, acorde a la necesidad de superación de barreras en acceso a derechos que se derivan de patrones sociales y culturales.
- E. **Enfoque interseccional:** Reconociendo la superposición de elementos identitarios que incrementan la carga de la desigualdad.
- F. **Enfoque territorial:** Identificando los derechos de la población que habita y reproduce cotidianamente este territorio. Lo anterior, vinculando a la infraestructura, física, institucional, social y comunitaria y los medios a los que se tiene acceso para la realización y goce efectivo de los derechos individuales y colectivos.

Artículo 4. Lineamientos. La Administración Distrital tomará las medidas necesarias teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

- A. **Decisiones con base en evidencia.** Se tomarán las decisiones requeridas para cumplir el objeto del presente Acuerdo, con base en evidencia sustentada en datos, estudios, informes u otros soportes técnicos.
- B. **Garantía y prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.** Los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecerán si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona, en concordancia con el principio de favorabilidad de su condición de menor.
- C. **Principio de proporcionalidad en el ejercicio material de las medidas correctivas previstas en los numerales 13 y 14 del artículo 140 de la ley 1801 de 2016.** Las medidas restrictivas de porte y consumo de sustancias psicoactivas no pueden ser absolutas, en tanto se deben establecer los elementos de tiempo, modo y lugar para su aplicación. Estos criterios atienden los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad, en particular en locaciones como parques y áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público.

- D. Principio de participación democrática ciudadana en las decisiones públicas del consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público.** Se promoverá la participación ciudadana como principio general en los procesos decisorios que inciden en distintos aspectos de la vida de las personas o grupos sociales referentes al consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades.
- E. Restricción cuando se trata del porte con fines de consumo propio o de dosis medicada.** Las siguientes conductas no podrán ser objeto de sanción o criminalización, pues ello excedería la legitimidad de la intervención estatal en la esfera privada para la protección de la salud pública: Porte de dosis personal, porte de dosis de aprovisionamiento, consumo consensuado entre adultos y porte y consumo con finalidades médicas. Lo anterior, prevaleciendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
- F. Diferenciación entre las actividades de porte de dosis para uso personal y consumo en contraste con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.** Cuando el porte de sustancias tiene la finalidad del consumo propio no puede ser restringido injustificadamente pues es una conducta amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, el porte o la conservación de sustancias estupefacientes sicotrópicas o drogas sintéticas, en cantidades comprendidas incluso dentro de la categoría de dosis personal, pero destinadas no al propio consumo sino a la comercialización o tráfico, será una conducta penalizada toda vez que tiene la potencialidad de afectar, entre otros bienes jurídicos, el de la salud pública.
- G. Principio de no discriminación a las personas que consumen sustancias psicoactivas.** Se debe evitar conductas discriminatorias que constituyan diferencias de trato injustificadas frente a quienes realicen actividades de quienes consuman sustancias psicoactivas, salvo que exista una norma expresa que restrinja esa conducta en situaciones particulares. Al respecto, se podrán aplicar las medidas correctivas y medios de policía previstos en la ley y bajo las circunstancias establecidas en la norma expresamente.

Artículo 5. Zonas de aplicación. El Alcalde Mayor o quién para tal efecto designe, deberá identificar las zonas en donde se restringirá el consumo de sustancias psicoactivas en el Distrito, bajo las consideraciones de modo, tiempo y lugar y atendiendo los principios de la razonabilidad, prevalencia de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes; y proporcionalidad de la actuación policiva para sancionar el porte y el consumo de sustancias psicoactivas.

Parágrafo 1. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, y las demás entidades competentes, podrán basarse en la evidencia y realizar una evaluación de los distintos parques que tiene Bogotá, calificando en cuáles de ellos hay mayor exposición y permanencia de

niños, niñas y adolescentes. Lo anterior podrá servir para realizar pilotos, teniendo presente los criterios de modo, tiempo y lugar, acorde a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Parágrafo 2. La Secretaría Distrital de Salud en articulación con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud - IDIPRON- y las demás entidades competentes, deberán identificar, periódicamente, las zonas del espacio público en donde se realizan actividades de consumo de sustancias psicoactivas.

Artículo 6. Definición de Modo, Tiempo y Lugar. La Administración Distrital en un plazo máximo de cuatro (4) meses a partir de la entrada en vigencia de esta norma, deberá reglamentar las zonas de aplicación establecidas en el presente Acuerdo. Dicha reglamentación deberá contar con presencia institucional de la Administración Distrital, a través de todas sus rutas de atención (educación sobre sustancias psicoactivas, medidas de reducción de riesgos y daños por consumo, y atención de consumos problemáticos).

Dentro del plazo establecido, la Administración Distrital podrá promover espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía, a través de la Secretaría de Seguridad, los Sectores de la administración central, la Secretaría Distrital de Educación, la Secretaría Distrital de Integración Social, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y con vinculación de las alcaldías locales, juntas de acción comunal, sociedad civil, gremios económicos, instituciones académicas y veedurías.

Artículo 7. Campañas de concientización, pedagogía y señalización para la reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas. La Administración Distrital, de conformidad con los presupuestos con que cuente cada una de las entidades involucradas, en consonancia con los planes, metas y programas dispuestos para tal efecto, podrá llevar a cabo campañas de comunicación pública y de pedagogía para informar a la ciudadanía sobre las zonas de aplicación y el propósito de la medida, así como sobre los lineamientos establecidos en este Acuerdo.

La Administración Distrital podrá instalar progresivamente, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que para ello se asigne, elementos de señalización, presencial, virtual o digital. Dicha señalización podrá indicar cuáles son los lugares identificados como Zonas de Aplicación, establecidos en el presente Acuerdo.

Artículo 8. Investigación y rigurosidad científica en el consumo de sustancias psicoactivas. La Secretaría Distrital de Salud o las entidades competentes, buscarán formular en el marco de alguna de las estrategias, planes y/o programas, líneas de investigación relacionadas con el riesgo químico de sustancias para emitir alertas tempranas, patrones de consumo, usos terapéuticos y ancestrales de sustancias, entre otras; y estructurará estrategias diferenciadas e innovadoras que promuevan la disminución del uso problemático de sustancias psicoactivas.

Parágrafo 1. Se podrá promover evidencia científica para la conformación de programas que permitan la sustitución de sustancias como una alternativa de reducción de riesgos y daños en el uso problemático de sustancias psicoactivas de alto impacto. Para tal fin, la administración distrital podrá coordinar con el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), IDIPRON, ATENEA, Observatorio Interinstitucional de Drogas y, las demás entidades que vea convenientes.

Parágrafo 2. La Administración Distrital junto con otros agentes sociales podrán promover a través de distintas formas asociativas, el testeo y análisis de sustancias psicoactivas, como forma de detección temprana de la existencia de nuevas sustancias nocivas para la salud.

Artículo 9. Caracterización y recolección de datos sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el Distrito Capital. El Observatorio De Salud de Bogotá “SALUD DATA”, o quien haga sus veces, sistematizará, consolidará, caracterizará y difundirá la información referente a salud mental, defunciones, sobredosis y demás problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C., en función de lo estipulado en artículo sexto de la Resolución 451 y el artículo cuarto del Decreto distrital 548 de 2016 y, las demás normas que le sean concordantes.

Artículo 10. Medidas correctivas. La Policía Metropolitana de Bogotá sancionará a quien incurra en cualquiera de los comportamientos señalados en la normatividad vigente. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, promoverá el cumplimiento de las mismas.

Para las demás conductas constitutivas de delitos, tráfico, distribución, ofrecimiento, comercialización, producción y otras conductas expresas en el artículo 376 del Código Penal, las autoridades procederán conforme a los procedimientos legales y reglamentarios vigentes.

Artículo 11. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

PROYECTO DE ACUERDO NO 215 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR EL CUAL SE PROMUEVE E INCENTIVA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE MEDIANTE EL TRÁNSITO GRADUAL A ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONTAMINANTE PARA VEHÍCULOS, TAXIS, SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL, MOTOS Y DEMÁS MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARÁCTER OFICIAL Y PARTICULAR EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**1. OBJETO DEL PROYECTO**

El presente proyecto de acuerdo pretende promover e incentivar el tránsito a una movilidad urbana sostenible en el Distrito Capital, cumpliendo las disposiciones de la Ley 1964 de 2019, *“Por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia y se dictan otras disposiciones”*, con el propósito de minimizar la contaminación ambiental y las enfermedades respiratorias de los ciudadanos de Bogotá, producidas por la contaminación generada por los vehículos de combustión; asimismo, lograr las metas de los ODS exigidos a Colombia en el Acuerdo de París de 2015.

2. ANTECEDENTES

El presente proyecto encuentra como antecedente directo el proyecto 239 de 2021, presentado con ponencia positiva por las concejales María Clara Name Ramírez y María Susana Muhamad González, actual ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aunque no recibió comentarios de la administración en su momento, el proyecto fue archivado, dejando un precedente importante en el Concejo de Bogotá.

A nivel internacional, Colombia ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático mediante la Ley 164 de 1994, comprometiéndose a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) para evitar daños irreversibles en el sistema climático. Este esfuerzo se conecta con la Declaración de Río de 1992, que sentó las bases del desarrollo sostenible al integrar la protección ambiental dentro del proceso de desarrollo. Entre los principios destacados de esta Declaración están el desarrollo sostenible, el criterio de precaución frente a riesgos ambientales, y la necesidad de reducir patrones de consumo y producción insostenibles.

Posteriormente, en el año 2015, la adopción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas introdujo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como una guía global para enfrentar los principales desafíos ambientales, sociales y económicos. Colombia, protagonista en la estructuración de esta agenda, incorporó los ODS en su estrategia nacional a través de políticas como el ingreso a la OCDE, el cumplimiento del Acuerdo de París y la implementación de su estrategia de Crecimiento Verde.

El Documento CONPES 3918 estableció un marco técnico para el seguimiento de estas metas, priorizando indicadores, la territorialización de los ODS y su integración en los planes de desarrollo locales.

A nivel distrital, este proyecto se alinea con los propósitos y metas del Plan de Desarrollo Bogotá Camina segura 2024-2027, orientado hacia una Bogotá más sostenible e incluyente. Este plan enfatiza la necesidad de mitigar y adaptarse al cambio climático, promover una movilidad eficiente y limpia, y reducir la contaminación ambiental. En este contexto, el presente proyecto de acuerdo busca contribuir de manera significativa a los objetivos del Plan de Desarrollo, vinculándose también con los ODS 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13 y 17. Su propósito es articular los compromisos internacionales con las políticas locales, asegurando que Bogotá avance en la construcción de un modelo urbano sostenible y resiliente que responda a las necesidades ambientales y sociales de sus habitantes.

3. JUSTIFICACIÓN

En Bogotá, la movilidad ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años, reflejadas en las preferencias de los ciudadanos y en la adopción de tecnologías más sostenibles. Sin embargo, estas mejoras han sido desiguales, y los retos persisten, especialmente en el transporte público y en la reducción de la congestión vehicular.

Por un lado, los ciudadanos han mostrado una creciente preferencia por los medios de transporte individuales. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024 de Bogotá Cómo Vamos, las motocicletas lideran en niveles de satisfacción con un 88%, seguidas por las bicicletas y los desplazamientos a pie, con un 81%. Los automóviles también cuentan con un respaldo significativo, alcanzando un 75%. Estas cifras reflejan una tendencia hacia la búsqueda de independencia en los desplazamientos, posiblemente como respuesta a las limitaciones percibidas en el transporte público.

En contraste, el sistema de transporte público enfrenta una valoración considerablemente más baja. Los buses zonales del SITP cuentan con apenas un 47% de satisfacción, mientras que TransMilenio registra un preocupante 45%. Entre las principales quejas de los usuarios destacan problemas de seguridad, como los robos, y aspectos funcionales, como la congestión, las demoras y la falta de certeza en las frecuencias. Esta situación refleja una desconexión entre las necesidades de los ciudadanos y la capacidad del sistema público para satisfacerlas, lo que plantea un desafío significativo para las autoridades de la ciudad.

A pesar de las críticas al transporte público, Bogotá ha logrado avances notables en la transición hacia una movilidad más sostenible. La ciudad cuenta con una de las mayores flotas de buses eléctricos del mundo, con 1.485 unidades en operación, contribuyendo a la reducción anual de aproximadamente 5.000 toneladas de CO₂ y 37 toneladas de material particulado. Además, la adopción de vehículos de cero y bajas emisiones, que incluye eléctricos, híbridos y aquellos que funcionan con gas natural, ha alcanzado las 25.729 unidades registradas en el Distrito. Estos logros posicionan a Bogotá como un referente en la región en la lucha contra el cambio climático.

El enfoque en vehículos de cero y bajas emisiones busca mitigar el cambio climático y mejorar la calidad del aire en Bogotá. Tecnologías como los vehículos eléctricos e hidrógeno lideran esta transición, mientras que los híbridos y a gas natural ofrecen alternativas intermedias. Sin embargo, barreras económicas e infraestructura limitada dificultan su adopción masiva. Lograr un equilibrio entre innovación, accesibilidad y eficiencia es clave para consolidar una movilidad más limpia y sostenible.

Impacto de la contaminación en la salud y la necesidad de transformación vehicular

En Bogotá, las enfermedades respiratorias agudas (ERA) han mostrado un incremento alarmante, con casos que pasaron de 25,470 en 2011 a 31,529 en 2012, según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente. Estas afecciones son más comunes en localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Kennedy y Suba, que coinciden con las zonas de mayor concentración de partículas PM10. Sin embargo, el PM2.5, más pequeño y más dañino, representa un mayor riesgo, al penetrar profundamente en los pulmones y afectar el intercambio de gases, según la OMS.

Para mitigar este problema, Bogotá debe priorizar la transición hacia un parque automotor libre de emisiones contaminantes, comenzando por los vehículos de transporte público. La implementación de incentivos, como créditos verdes y subsidios para propietarios que migren a tecnologías limpias, sería un paso crucial. Esto requiere la colaboración entre la Alcaldía, el gobierno nacional, entidades financieras y empresas de transporte.

Desafíos y oportunidades de la conversión vehicular

El reemplazo de vehículos de combustión por eléctricos o híbridos es imprescindible, pero enfrenta dos obstáculos principales: el alto costo de estos vehículos en Colombia y el riesgo de aumentar la congestión si los vehículos reemplazados no salen de circulación. Una solución viable es la conversión de vehículos de combustión a eléctricos, una práctica ya disponible en Bogotá y Medellín con costos entre 22 y 29 millones de pesos, mucho más accesible que adquirir un vehículo eléctrico nuevo.

La intervención del SENA en la formación de técnicos especializados en conversión podría reducir significativamente los costos y generar empleos. Este enfoque no solo disminuiría las emisiones de CO₂ (cada vehículo transformado dejaría de emitir aproximadamente 51 gramos diarios) sino también los niveles de ruido y calor asociados con la combustión.

En resumen, abordar la contaminación del aire requiere una combinación de acciones: fomentar la conversión vehicular, garantizar la salida de circulación de vehículos de combustión, e incentivar políticas públicas que permitan una transición asequible y sostenible para todos los ciudadanos.

Avances y desafíos en la movilidad eléctrica en Bogotá

Gracias a los avances tecnológicos, los vehículos eléctricos ahora alcanzan autonomías de más de 350 kilómetros. Sin embargo, al considerar el uso óptimo de las baterías, la autonomía efectiva es del 80%, es decir, alrededor de 280 kilómetros. Esto es suficiente para cubrir los recorridos diarios de un taxi en Bogotá, que oscilan entre 230 y 250 kilómetros, permitiendo operar con una sola carga.

al día. Además, los centros de carga rápida pueden recargar una batería en solo 15 minutos, lo que reduce tiempos de inactividad y mejora la eficiencia operativa.

A pesar de estas ventajas, la red de recarga en Bogotá necesita una expansión significativa. Contar con estaciones de carga rápida accesibles es crucial para estimular la adopción de vehículos eléctricos entre los ciudadanos, especialmente para quienes no disponen de puntos de recarga en casa o en su lugar de trabajo. Este desarrollo no solo impulsaría la transición hacia una movilidad sostenible, sino que también representa una oportunidad de negocio rentable para el sector privado.

En cuanto a los vehículos híbridos, su batería tiene una vida útil de aproximadamente 150,000 kilómetros, ofreciendo mayor autonomía que los eléctricos. Con los avances tecnológicos acelerados, se espera que estas cifras sigan mejorando, mientras que las baterías actuales mantienen una alta confiabilidad por más de 10 años. Es importante destacar que los vehículos eléctricos son más eficientes en tránsito urbano que en carretera, lo que los hace ideales para ciudades como Bogotá.

Costos y sostenibilidad de las baterías

El costo inicial de un vehículo eléctrico o la conversión de uno de combustión sigue siendo el mayor obstáculo. Sin embargo, el costo total de propiedad a lo largo de su vida útil es significativamente menor debido al ahorro en combustible, mantenimiento y revisiones.

Por otro lado, el reciclaje y la reutilización de baterías son fundamentales para minimizar su impacto ambiental. Actualmente, entre el 50% y el 80% de los materiales de una batería de ion de litio pueden recuperarse en el proceso de reciclaje. Además, las baterías que ya no son funcionales en vehículos eléctricos se destinan a usos secundarios, como sistemas de energía de emergencia o iluminación de espacios públicos. Este enfoque reduce la necesidad de extraer nuevos metales, disminuye costos y optimiza el consumo de recursos, asegurando un manejo adecuado de los residuos tóxicos.

En conclusión, mientras Bogotá avanza hacia una movilidad más limpia, la implementación de una red de carga eficiente y la adopción de estrategias sostenibles para las baterías serán claves para superar los retos actuales y maximizar los beneficios ambientales y económicos.

Importancia del Mantenimiento de Estaciones de Carga

Un mantenimiento adecuado asegura la disponibilidad y eficiencia de las estaciones de carga, evitando tiempos de inactividad que puedan afectar negativamente la experiencia de los usuarios y la adopción de vehículos eléctricos. En América Latina, diversos países han implementado con éxito proyectos de infraestructura para la carga de vehículos eléctricos, impulsando la movilidad sostenible en la región.

1. Chile

Chile ha experimentado un notable incremento en la adopción de vehículos eléctricos, con un aumento del 183% en las ventas en 2024, alcanzando 4.500 unidades vendidas, lo que representa

el 6,2% del total de autos comercializados. Este crecimiento ha sido acompañado por una expansión en la infraestructura de carga, con la instalación de más puntos de recarga y la adopción de conectores europeos, facilitando el acceso y uso de estos vehículos.

2. Colombia

En Bogotá, la empresa Enel X ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Actualmente, cuenta con 204 puntos de carga, tanto públicos como privados, distribuidos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Armenia e Ibagué. Además, como socio estratégico de 'La Rolita', ha instalado 15 puntos de recarga pública en seis zonas estratégicas de la capital, apoyando la movilidad sostenible en la ciudad.

Para garantizar la operatividad continua de las estaciones de carga para vehículos eléctricos, se recomienda establecer protocolos técnicos y estructurados que incluyan inspecciones y mantenimientos periódicos, definidos bajo estándares internacionales. Además, es crucial asignar responsabilidades claras a entidades específicas, asegurando una coordinación eficiente y respuestas ágiles ante posibles fallas. La implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real, basados en tecnologías avanzadas, permitirá la supervisión constante del estado de las estaciones, facilitando la detección y resolución proactiva de problemas.

Finalmente, se debe fomentar la capacitación técnica especializada para el personal encargado del mantenimiento, asegurando que estén actualizados en las tecnologías más recientes y en las mejores prácticas de operación y reparación, lo que fortalecerá la confiabilidad y la sostenibilidad del sistema.

II. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

- **Artículo 2:** El Estado debe servir a la comunidad y garantizar los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a un ambiente sano, base de la prosperidad y el bienestar social.
- **Artículo 11:** El derecho a la vida, que está vinculado al derecho a un ambiente sano. La movilidad urbana sostenible, al reducir la contaminación, contribuye a la protección de la vida y la salud de la población.
- **Artículo 58:** La propiedad privada tiene una función social, incluida la obligación de contribuir a la protección del medio ambiente. El fomento de tecnologías sostenibles en el transporte contribuye a esta función.
- **Artículo 79:** Derecho a gozar de un ambiente sano, obligación del Estado de protegerlo y fomentar la participación en decisiones que lo afecten.
- **Artículo 80:** Planificación del manejo de recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible y prevenir el deterioro ambiental.
- **Artículo 95:** Deber ciudadano de proteger los recursos naturales y velar por la conservación del ambiente, que se relaciona directamente con el fomento de una movilidad sostenible.
- **Artículo 317:** Los concejos deben dictar normas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico, lo que incluye la promoción de tecnologías limpias como la energía eléctrica para transporte.

- **Artículo 339:** Los planes de desarrollo deben incluir estrategias para la preservación ambiental, lo que se ve reflejado en este proyecto de acuerdo, al promover el uso de energías limpias en el transporte público y privado, en concordancia con las políticas de desarrollo económico y social sostenible.

En resumen, este proyecto de acuerdo está alineado con los principios fundamentales de la Constitución, particularmente los relativos a la protección del medio ambiente, el derecho a la salud y vida, y el desarrollo sostenible. La transición gradual a vehículos eléctricos no contaminantes se presenta como una medida integral que contribuye a la mejora del ambiente urbano y al bienestar de los ciudadanos.

2. NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y SANITARIA

LEYES

- **LEY 23 DE 1973:** Esta ley busca prevenir y controlar la contaminación ambiental, promoviendo la conservación y restauración de los recursos naturales para salvaguardar la salud y el bienestar de los habitantes del país.
- **LEY 1450 DE 2011:** Establece que municipios de más de 300,000 habitantes pueden aplicar tasas sobre áreas con alta congestión o contaminación para financiar proyectos de infraestructura vial y transporte público. Los fondos recaudados deben destinarse a la mitigación de la contaminación vehicular.
- **LEY 1964 DE 2019:** Promueve el uso de vehículos eléctricos para contribuir a la movilidad sostenible y la reducción de emisiones contaminantes. Establece incentivos como exenciones fiscales, parqueaderos preferenciales y la construcción de estaciones de carga rápida, con un enfoque en las ciudades principales como Bogotá.
- **LEY 09 DE 1979:** Regula las emisiones atmosféricas y establece normas para la calidad del aire. Permite al Ministerio de Salud aplicar medidas correctivas, como la modificación o prohibición de circulación de vehículos con emisiones contaminantes.
- **LEY 99 DE 1993:** Crea el Ministerio del Medio Ambiente y establece los principios generales de la política ambiental, enfocándose en el desarrollo sostenible y la gestión integrada del medio ambiente. La ley promueve la acción conjunta entre el Estado, la comunidad y el sector privado.
- **LEY 388 DE 1997:** Garantiza el uso del suelo acorde con su función social y la protección del medio ambiente, buscando un ordenamiento territorial que respete el desarrollo sostenible y la protección del espacio público.
- **LEY 629 DE 2000:** Aprueba el Protocolo de Kioto, comprometiendo a Colombia a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en línea con los compromisos internacionales sobre el cambio climático.

Esta normatividad respalda el proyecto de acuerdo al fomentar el uso de tecnologías limpias y la reducción de emisiones contaminantes, alineándose con los principios de sostenibilidad y salud pública.

DECRETOS

- **DECRETO 2811 DE 1974:** Este Decreto establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. El objetivo principal es preservar y restaurar el ambiente, gestionando racionalmente los recursos naturales renovables para asegurar el bienestar y desarrollo armónico de la población. Regula la conducta humana en relación con el medio ambiente y los recursos naturales, incluyendo la atmósfera, el suelo, el subsuelo y la energía no agotable. Además, reconoce el derecho de todos a un ambiente sano y establece medidas para controlar la contaminación, asegurando un uso eficiente de los recursos naturales.
- **DECRETO 02 DEL 11 DE ENERO DE 1982:** Este Decreto regula las emisiones atmosféricas, de acuerdo con la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2822 de 1974. Define la contaminación del aire y las fuentes móviles de contaminación, estableciendo normas para controlar los contaminantes en el aire, con el fin de proteger la salud humana, animal y vegetal. También establece los niveles permisibles de contaminantes para mantener la calidad del aire y prevenir efectos adversos sobre la salud y el bienestar.
- **DECRETO 948 DEL 5 DE JUNIO DE 1995:** Este Decreto regula la Ley 23 de 1973, el Decreto-Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica. Establece disposiciones para proteger la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes, incluyendo medidas preventivas y correctivas para los sectores industriales y urbanos. Su enfoque es proteger la salud pública y el medio ambiente, promoviendo un control más eficaz de la contaminación atmosférica.

Estos decretos son fundamentales en la normatividad ambiental del país, brindando las bases legales para el control de la contaminación y la protección de los recursos naturales, garantizando la preservación de un ambiente saludable.

RESOLUCIONES

- **RESOLUCIÓN 005 DEL 09 DE ENERO DE 1996.** Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a Gasolina o Diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones.
- **RESOLUCIÓN 909 DE 1996.** Por la cual se modifica parcialmente la resolución 005 de 1996 que reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a Gasolina o Diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones.
- **RESOLUCIÓN 453 DEL 27 DE ABRIL DE 2004.** Por la cual se adoptan los principios, requisitos y criterios, y se establece el procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que optan al mecanismo de desarrollo limpio, MDL.

JURISPRUDENCIA

- **SENTENCIA C- 449 DEL 16 DE JULIO DE 2015.** Por medio de la cual, la Corte Constitucional avaló la constitucionalidad de la facultad conferida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, para definir las bases de depreciación y los costos sobre

cuya base se fija el monto de las tarifas de las tasas retributivas y compensatorias por contaminación ambiental.

PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-2027

En el marco del Objetivo 4 del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, que busca consolidar un sistema de movilidad sostenible como catalizador de sostenibilidad ambiental, integración social y bienestar ciudadano, el presente proyecto de acuerdo se alinea con las estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y mejorar la calidad del aire en Bogotá. Esto incluye la transición hacia medios de transporte que utilicen energías limpias y no contaminantes, promoviendo el uso de vehículos eléctricos en cumplimiento de la Ley 1964 de 2019 y en concordancia con los compromisos adquiridos por Colombia en el Acuerdo de París de 2015.

El tránsito gradual hacia una movilidad urbana sostenible, tal como lo promueve este proyecto, responde a la necesidad de mitigar los impactos negativos del transporte basado en combustibles fósiles, reduciendo su contribución a la contaminación del aire y a las enfermedades respiratorias asociadas. Además, la implementación de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, junto con la integración de sistemas de transporte sostenible como bicicletas públicas y cicloparqueaderos, permitirá fortalecer la transición energética, promover modos de transporte activos y multimodales, y fomentar un entorno urbano más limpio, saludable e inclusivo para los habitantes del Distrito Capital.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, establece como prioridad el ascenso tecnológico y la promoción de la movilidad activa y sostenible para avanzar hacia la descarbonización del sector transporte. Este marco normativo se complementa con la Ley 2169 de 2021, que crea el Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico, y con los incentivos y estrategias nacionales para la transición hacia vehículos de cero y bajas emisiones, priorizando tecnologías eléctricas e hidrógeno.

Entre las metas específicas de este proyecto se encuentran la promoción de incentivos locales en línea con las exenciones tributarias nacionales, la instalación de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en el Distrito Capital, y la electrificación progresiva del transporte público, particular y de carga. Estas acciones buscan fortalecer el cumplimiento de los compromisos de Colombia frente al Acuerdo de París y las estrategias nacionales de movilidad activa y descarbonizada, como MOVE, NAMAS y TANDEM, contribuyendo a la reducción de las emisiones de GEI, la mejora de la calidad del aire y la promoción de un transporte inclusivo, eficiente y seguro en Bogotá.

Adicionalmente, el proyecto articula su alcance con las disposiciones de la Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional y con los esquemas de cofinanciación para infraestructura sostenible, orientados a garantizar que la ciudad adopte medidas que prioricen la movilidad activa, la transición

energética y el fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas del sector transporte, de acuerdo con las necesidades locales y regionales.

III. COMPETENCIA

- Decreto Ley 1421 de 1993.

El Concejo Distrital de Bogotá D.C. es competente de conformidad con el artículo 12: Artículo 12º. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.

- Acuerdo 741 de 2019

Artículo 65.- INICIATIVA.

Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por Concejales individualmente, a través de las Bancadas de manera integrada con otros Concejales o Bancadas y por el Alcalde Mayor, por medio de sus Secretarios, Jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas.

(...)

IV. IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, y, conforme a lo establecido por el Decreto Ley 1421 de 1993 y el reglamento interno del Concejo Distrital; la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación.

La financiación será a través de la implementación de Asociaciones Público-Privadas (APP) para el desarrollo del presente proyecto de acuerdo. El objetivo principal de estos proyectos es compartir costos, riesgos e ingresos entre socios públicos y privados. El socio público a menudo es responsable de asignar terrenos adecuados, integrar de las estaciones con la plataforma de cobro en línea, las tarifas a los usuarios y la obtención de los permisos de construcción. El socio privado generalmente tiene la responsabilidad de la ejecución técnica del proyecto, la financiación, la operación y los mantenimientos mayores.

No obstante, En este punto es de resaltar, que la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C- 911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa.

Cordialmente,

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
Concejal de Bogotá D.C.

PROYECTO DE ACUERDO NO 215 DE 2025

PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO No. ____ DE 2025

“POR EL CUAL SE PROMUEVE E INCENTIVA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE MEDIANTE EL TRÁNSITO GRADUAL A ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONTAMINANTE PARA VEHÍCULOS, TAXIS, SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL, MOTOS Y DEMÁS MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARÁCTER OFICIAL Y PARTICULAR EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 12 numerales 1, 5 y 25 .

ACUERDA

ARTÍCULO 1°. OBJETIVOS. El presente acuerdo se rige por el siguiente objetivo:

El presente Acuerdo tiene como objetivo central promover una movilidad urbana sostenible en Bogotá mediante la transición gradual a vehículos impulsados por energía eléctrica no contaminante. Esto busca cumplir con la Ley 1964 de 2019 y otros marcos normativos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, para reducir las emisiones contaminantes y mitigar sus efectos negativos en la salud pública y el medio ambiente.

Objetivos específicos:

1. Reducir drásticamente la contaminación generada por vehículos de combustión, principal fuente de material particulado en la ciudad.
2. Combatir las enfermedades respiratorias asociadas a la mala calidad del aire y disminuir las tasas de mortalidad relacionadas.
3. Asegurar que Bogotá cumpla con sus compromisos internacionales en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
4. Posicionar a Bogotá como un modelo global de movilidad sostenible y ciudad verde.
5. Fomentar una cultura ciudadana basada en el uso de energías limpias y renovables.
6. Hacer accesible la conversión de vehículos a tecnologías limpias mediante incentivos y estrategias financieras.
7. Aumentar significativamente la adopción de vehículos eléctricos a través de facilidades económicas y de infraestructura.
8. Impulsar la economía local mediante la creación de empleos relacionados con la movilidad eléctrica, como talleres de conversión y servicios asociados.

ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES. Para el presente Acuerdo se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

- **Movilidad Urbana Sostenible:** Modelo de transporte que minimiza su impacto ambiental y promueve el bienestar ciudadano sin comprometer los recursos naturales para las generaciones futuras.
- **Vehículo Eléctrico:** Medio de transporte automotor propulsado por energía eléctrica que no genera emisiones contaminantes.
- **Estación de carga:** Infraestructura para recargar vehículos eléctricos, clasificada en rápida (más de 50 kW) y lenta (entre 7 kW y 49 kW).
- **Zona de Parquímetro:** Espacios señalizados para estacionamiento público, regulados por una tasa de uso distrital.

ARTÍCULO 3°. ESTRATEGIAS. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Hacienda y las demás entidades responsables y corresponsables en la materia, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía deberán adoptar las siguientes estrategias para lograr la implementación del presente Acuerdo:

- a. Regular los vehículos de tracción limpia, en términos de las exenciones de las medidas de restricción a la circulación vehicular en cualquiera de sus modalidades dispuestas por autoridad de tránsito (pico y placa, día sin carro, restricciones por materia ambiental, entre otros).
- b. Contar como mínimo con 20 estaciones de carga rápida. Se entregará al Concejo de Bogotá un informe de gestión y avance de las instalaciones de estas estaciones de carga rápida al término de los seis (6) meses siguientes de aprobado el presente Acuerdo, procurando cumplir con la meta dispuesta por la Ley.
- c. Aplicar criterios territoriales para las distintas formas de energía renovable, con mapas de sensibilidad y políticas de zonificación para orientar de forma clara el desarrollo del sector.
- d. Garantizar el uso adecuado de los fondos públicos, en cuanto a la coherencia entre los objetivos energéticos, climáticos y de biodiversidad de las inversiones que se financien con ellos.
- e. Implementar medidas que permitan disponer de los recursos humanos suficientes para todo el trabajo asociado a la movilidad urbana sostenible.
- f. Establecer directrices con criterios de capacidad que garanticen que la implementación de las energías renovables se haga de forma responsable en todas las localidades del Distrito Capital.
- g. Impulsar los criterios de carácter técnico y financiero para la implementación de las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo, desarrollando la adopción de los modelos de Asociaciones Público- Privadas (APP) establecidas por la Ley, para el desarrollo de las inversiones en infraestructura, equipos y actores necesarios para la adaptabilidad de la ciudad a la movilidad eléctrica.

ARTÍCULO 4°. ESTACIONES DE CARGA Y MANTENIMIENTO.

La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación y las demás entidades responsables y corresponsables en la materia, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, impulsarán de forma general las actuaciones y proyectos necesarios para adecuar a la normatividad de construcción de la ciudad, las disposiciones necesarias para las instalaciones de autoconsumo de energías renovables en los edificios públicos y las zonas edificadas, y de uso comercial o industrial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 1964 de 2019.

Asimismo, deberá definir la normativa del uso de suelo para el despliegue de estaciones de carga pública y delimitar las necesidades en infraestructura de soporte a los planes de expansión a los sistemas de transporte eléctrico. A su vez, adoptar lineamientos para garantizar el mantenimiento efectivo y la operatividad de las estaciones de carga eléctrica, incluyendo:

1. Establecer protocolos de inspección periódica.
2. Implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para supervisar el funcionamiento de estas infraestructuras.
3. Determinar entidades responsables para su gestión y mantenimiento.

ARTÍCULO 5°. PARQUEADEROS SOSTENIBLES.

Las entidades públicas del distrito y los establecimientos comerciales que ofrezcan al público sitios de parqueo deberán destinar un porcentaje mínimo del dos por ciento (2%) del total de plazas de parqueo habilitados para el uso preferencial de vehículos eléctricos, y contar por lo menos con un punto o estación de carga rápida. La Administración Distrital, con apoyo de la Secretaría de Movilidad y el Departamento Administrativo de la Defensoría Del Espacio Público (DADEP), dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acuerdo, deberá reglamentar vía decreto, la identificación de los parqueaderos preferenciales a los que se refiere el presente artículo, incluyendo un logotipo y color para los mismo; sin perjuicio de lo dispuesto sobre las plazas de parqueo para personas con movilidad reducida que consagra la Ley 1287 de 2009 ni la prioridad a los ciclo parqueaderos que contempla la Ley 1811 de 2016.

ARTÍCULO 6°. INCENTIVOS. La secretaria Distrital de Hacienda implementará medidas para priorizar, incentivar y premiar el ahorro y la eficiencia en todos los sectores de la ciudad, en aras de reducir la demanda de la energía fósil y mejorar el medio ambiente en virtud del artículo 5 de la ley 1964 de 2019, el cual determina que las entidades territoriales podrán desarrollar, promover y ofertar la adopción de esquemas de incentivos económicos para impulsar la movilidad eléctrica a nivel territorial tales como, descuentos sobre el registro o impuesto vehicular, tarifas diferenciadas de parqueaderos o exenciones tributarias.

ARTÍCULO 7°. INICIATIVA PÚBLICA EN EL USO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. Dentro de los 6 años posteriores de entrada en vigencia del presente acuerdo, la Administración Distrital deberá cumplir en todas sus entidades con una cuota mínima del 30% (Treinta por ciento) de vehículos eléctricos en los vehículos que anualmente sean comprados o contratados para sus funciones misionales y administrativas, teniendo en cuenta las necesidades de cada entidad, en consonancia en lo dispuesto para las entidades del orden nacional por la ley 1964 de 2019, Así

mismo se aplicaran las mismas disposiciones de este artículo para los vehículos adquiridos por el Concejo de Bogotá.

ARTÍCULO 8°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 216 DE 2025**PRIMER DEBATE*****“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA DEBIDA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESDE LA FUENTE EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE BOGOTÁ D.C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”*****EXPOSICIÓN DE MOTIVOS****1.- OBJETO**

Por medio de la Secretaría Distrital de Ambiente, establecer lineamientos para promover y orientar prácticas que faciliten e incentiven la clasificación de residuos sólidos en la fuente, por parte de los establecimientos de comercio de Bogotá D.C., de acuerdo con los planes institucionales, las disposiciones legales vigentes y a través de incentivos, campañas de sensibilización y programas de reciclaje, con el fin de reducir el impacto ambiental, mejorar la gestión integral de residuos sólidos en la ciudad y reducir la cantidad de residuos enviados al Relleno Sanitario Doña Juana.

2.- ANTECEDENTES

Una vez revisada la información que reposa en las bases de datos del Concejo de Bogotá, se encontró que la iniciativa no cuenta con antecedente alguno.

Igualmente cabe señalar que, con el propósito de contribuir a la protección del medio ambiente, en los últimos años se han venido desarrollando normas y Proyectos de Acuerdo que promueven la separación en la fuente, el almacenamiento temporal, la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos en Bogotá D.C.; sin embargo, dicha promoción se queda corta a la hora de hacer que el Distrito Capital aborde la iniciativa en línea con el marco normativo nacional, donde se cumplan los deberes normativos en cabeza de los usuarios no residenciales del servicio público de aseo como generadores de residuos sólidos ordinarios y especiales, en el marco de la gestión integral de residuos sólidos y su separación desde la fuente.

Para el caso puntual, se encuentra el Acuerdo No. 726 de 2018, por medio del cual se implementan medidas que promuevan la gestión de residuos sólidos en el Distrito Capital; el cual tiene como objetivo generar estrategias de recuperación y aprovechamiento, e incentivar a las entidades distritales a consolidar las buenas prácticas en materia de gestión integral de los residuos sólidos. Igualmente se encuentra el Proyecto de Acuerdo N°. 156 de 2016, por el cual se establece el objetivo basura cero como lineamiento de las políticas distritales sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos en el distrito capital, y que tiene como objetivo estimular la producción de bienes de consumo reutilizables o biodegradables, al igual que construir una cultura de recolección separada de residuos y aprovechamiento final de estos.

Dicho esto, se evidencia que las iniciativas dadas en Bogotá D.C. en torno a la clasificación de basura y otras prácticas relacionadas con la gestión de residuos, están reguladas principalmente por medidas y estrategias ambientales y de saneamiento básico, las cuales simplemente incluyen recomendaciones y algunos lineamientos generales para promover la reducción en la generación de residuos, la separación en la fuente, el reciclaje y la disposición final adecuada; evidenciándose así que dichas iniciativas no contemplan la ampliación y aplicación de lineamientos que abordan a los principales generadores de residuos sólidos de la ciudad, como lo son los establecimientos de comercio.

Es así que, el interés de esta iniciativa se centra en que la gestión adecuada de los residuos sólidos en Bogotá, trascienda más allá de la recolección y transporte que hoy por hoy se hace desde las estaciones de clasificación y aprovechamiento o disposición final; para que por medio de la Secretaría Distrital de Ambiente, como la entidad encargada de vigilar y supervisar el cumplimiento de las normativas relacionadas con la gestión de residuos sólidos, se implementen nuevos lineamientos que se articulen con los contenidos normativos y así mismo se haga un seguimiento efectivo de la separación en la fuente, que permita verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en el marco jurídico aquí relacionado por medio de la gestión efectiva y eficiente de los mismos y tomando medidas correctivas respecto a la clasificación en la fuente, haciendo que esto influya en la reducción de basuras, mejor aprovechamiento de los residuos sólidos provenientes de los principales generadores y finalmente en la reducción de la contaminación ambiental.

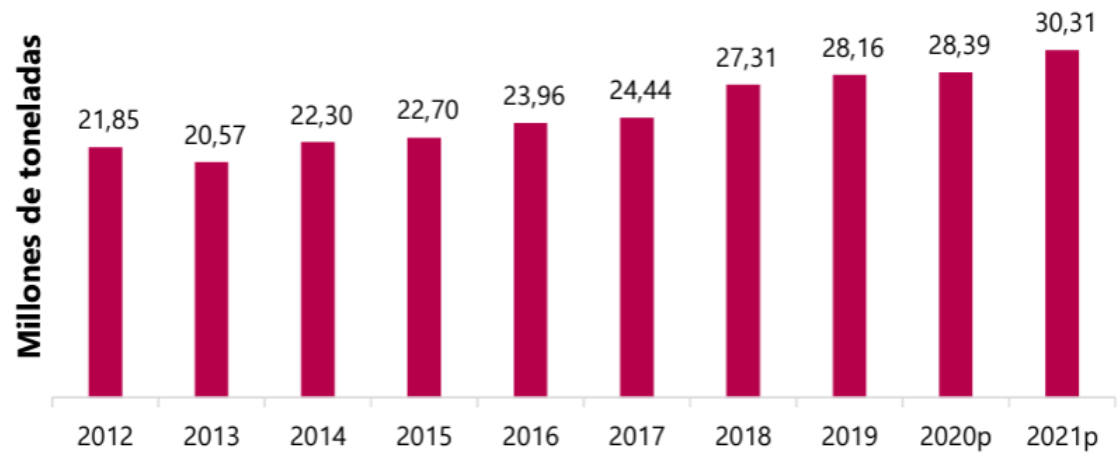
3.- JUSTIFICACIÓN DEL AUTOR PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE ACUERDO

En materia de residuos sólidos, es importante tener en cuenta el más reciente informe del Global Waste Management Outlook 2024 (GWMO), publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en colaboración con la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), el cual revela una preocupante situación respecto a la gestión de residuos sólidos, donde se advirtió que de mantenerse los patrones actuales respecto a la gestión inadecuada de la basura, se espera que la generación total de residuos sólidos a nivel mundial aumente casi un 80% entre 2020 y 2050; indicando así la necesidad de:

- Implementar acciones concretas para desvincular el desarrollo económico de la generación de residuos.
- Prevenir los residuos.
- Mejorar la reciclabilidad de los residuos inevitables.

En Colombia, los establecimientos de comercio en el desarrollo de su actividad económica son unos de los principales generadores de los residuos sólidos sobre los que trata el mencionado informe; pues de acuerdo con la Cuenta Ambiental y Económica de Flujos de Materiales – Residuos Sólidos 2020 – 2021p presentada por el DANE, se indicó que en 2021 la oferta de residuos sólidos y productos residuales derivados de los procesos de producción, consumo y acumulación ascendió a 30,31 millones de toneladas, en donde el 82,2%, que corresponde a 24,90 millones de toneladas, pertenecen a residuos sólidos. Esto muestra un crecimiento con relación al año 2020, explicado por un aumento del 7,8% en las millones de toneladas de residuos generados por las actividades económicas e importaciones. Cifras que se evidencian en la siguiente gráfica:

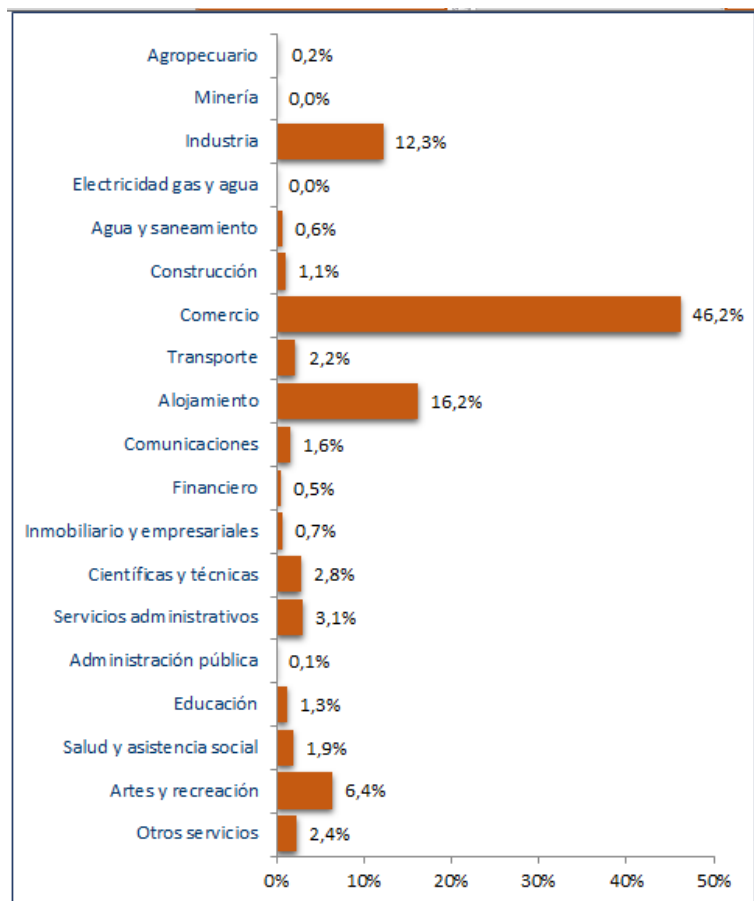
Oferta de residuos sólidos y productos residuales (millones de toneladas) Total nacional 2012-2021p



Fuente: DANE, CAEFM-RS. (2023)

Dicho esto, en Bogotá y conforme a datos brindados por la Secretaría Distrital de Planeación (2023), el número de establecimientos de comercio con matrícula activa en la ciudad, a marzo de 2023, correspondía a 132.377 establecimientos, distribuidos en actividades económicas tal y como se muestra a continuación:

Porcentaje de establecimientos con matrícula activa por actividad económicaBOGOTÁ Año 2023



Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. (Con corte a marzo 31 de 2023)

En Bogotá existe un alto número de establecimientos de comercio, por ello la importancia de tomar medidas efectivas frente a estos como uno de los principales generadores de residuos sólidos según lo indicado por el DANE. Se hace necesario dictar nuevos lineamientos, en donde se promueva que los establecimientos de comercio implementen el esquema de clasificación en la fuente y la recolección selectiva de residuos sólidos de acuerdo a las normas ambientales vigentes, estando así mismo sujetos a la supervisión y regulación de la Secretaría Distrital de Ambiente en lo que respecta a dicha clasificación y a otras actividades relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos en la ciudad.

Por otro lado, es de resaltar que según el informe del Global Waste Management Outlook 2024, mencionado al inicio de esta justificación, se proyecta que de mantenerse el modelo actual de disposición final de residuos sólidos, la cantidad de residuos enviados a destinos no controlados se duplicará en las próximas décadas, lo cual afectaría principalmente a los países en desarrollo, donde la infraestructura tiende a ser inadecuada.

Los rellenos sanitarios son la estrategia de disposición final de los residuos sólidos más utilizada en el mundo, los cuales tienen una vida útil y una vez sobrepasan su uso, esto lleva a efectos nocivos sobre el medio ambiente por la generación de gases y lixiviados; donde también es importante tener presente que esta presión de basuras

sobre el terreno y sus alrededores, puede generar presiones ambientales por contaminación del aire, agua, suelo y alteración paisajística (Álvarez et al., 2021)

Particularmente en economías emergentes y países en desarrollo como Colombia, la creciente generación de residuos sólidos se está convirtiendo en un problema preocupante por la insuficiente e inadecuada infraestructura para disponer de estos. En el año 2022 se dispusieron en promedio 11.983.709,70 toneladas de residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo en el territorio nacional, lo cual representó un aumento del 0,26% respecto al año 2021, donde del total de toneladas diarias dispuestas, el 43,7% corresponde a las 8 ciudades con mayor población, dentro de las que está Bogotá D.C. tal y como se evidencia en la siguiente tabla (SSPD, 2023).

TONELADAS ANUALES DISPUESTAS - CIUDADES PRINCIPALES			
Bogotá D.C.	2.257.372,85	Cartagena	505.628,28
Cali	594.241,04	Santa Marta	206.985,82
Medellín	679.329,22	Bucaramanga	179.866,10
Barranquilla	562.871,14	Pasto	113.437,51

Fuente: Base de disposición final 2022. Cálculos SSPD

En materia ambiental y especialmente en lo que se refiere a la clasificación de residuos en la fuente, se encuentran las disposiciones dadas en la Ley 1333 de 2009, Ley 1801 de 2016, el Decreto 2981 de 2013 y el Decreto 349 de 2014, las cuales son normas que contienen obligaciones y sanciones para los usuarios residenciales y no residenciales que no separen las basuras debidamente. Igualmente a nivel nacional, el Decreto 802 de 2022 creó el “Incentivo al Aprovechamiento” como recompensa a las personas prestadoras de las actividades principales y complementarias del servicio público de aseo que separen sus residuos y que se ve reflejada en una reducción de la tarifa de aprovechamiento.

Si bien existen lineamientos, sanciones y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) incluyó incentivos en la fórmula del servicio de aseo para la clasificación y aprovechamiento de los residuos sólidos, las cifras relacionadas anteriormente evidencian que no han sido suficientes los esfuerzos realizados por los gobiernos nacional y distrital en la gestión integral de residuos sólidos. Existe baja cultura de aprovechamiento en todos los actores de la gestión integral de estos residuos, razón por la cual continúan ciertas prácticas, conocimientos, percepciones y valoraciones que no se han extendido a acciones como la separación en la fuente y que requieren indispensablemente del compromiso y participación de la ciudadanía y los agentes comerciales en el desarrollo de su actividad económica.

Es así como dicha situación requiere un esfuerzo mayor en el cambio de prácticas interiorizadas y transmitidas, que mediante una estrategia de incentivos, pedagogía y de publicidad amplia y diferenciada por tipo de generador de residuos, involucre a la ciudadanía y convoque a los establecimientos de comercio a generar un compromiso colectivo para un medio ambiente sano y un hábitat digno para los ciudadanos; esto, teniendo en cuenta la importancia de seguir las instrucciones distritales y las políticas de gestión de residuos, que en el caso de Bogotá es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el documento que dicta los lineamientos para garantizar una separación adecuada y una disposición final responsable de la basura, y el cual adoptó su más reciente actualización por medio del Decreto 345 de 2020, planteando la necesidad de generar articulación interinstitucional para:

- Generar estrategias de capacitación, formación y sensibilización técnica a las entidades del Distrito, empresas prestadoras del servicio de aseo, operadores del servicio público de aseo, Servicio Público Complementario de Aprovechamiento - SPCA -, generadores y gestores de residuos en el marco de la responsabilidad extendida, para implementar medidas pedagógicas dirigidas a cada tipo de productor de residuos y así fomentar la cultura de separación en la fuente. Objetivo que está a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Gobierno, SPCA y Operadores de aseo.
- La aplicación efectiva de sanciones contenidas en la ley en el marco de la gestión integral de residuos sólidos, donde se dice que se adelantarán mesas de trabajo con las entidades competentes para la imposición de medidas sancionatorias por manejo inadecuado de residuos. Estas sanciones estarán a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Gobierno, SDGSeg, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Alcaldías Locales y Policía.

Es así que, de acuerdo con los objetivos establecidos en el PGIRS y las disposiciones dadas en el artículo 103 del Acuerdo 257 de 2006, le corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y complementar la acción de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB- para desarrollar proyectos de saneamiento y descontaminación, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP. También le corresponde a la SDA, la elaboración y diseño de políticas referidas al manejo integral de residuos sólidos en el marco de la Ley 99 de 1993, la cual otorga a las autoridades ambientales distritales, la competencia para regular y controlar las actividades que afectan el medio ambiente en su jurisdicción.

De igual forma, la Ley 1333 de 2009 estipula que el Estado ejercerá la potestad sancionatoria en materia ambiental a través del Ministerio de Ambiente y las entidades adscritas a este, potestad que será ejercida en acompañamiento de la Policía, teniendo en cuenta que esta es la autoridad competente para hacer cumplir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el cual establece sanciones por los comportamientos relacionados con la salud pública, contemplando multas para quienes no separen en la fuente los residuos sólidos.

Ahora, teniendo en cuenta que en Bogotá ya existe normativa que incluye un reglamento técnico sectorial para la gestión de residuos sólidos de Construcción y Demolición - RCD (Resolución No. 1257 de 2021); Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE (Resolución No. 0851 de 2022); Residuos Hospitalarios y Similares (Decreto 351 de 2014); y Desechos Peligrosos (Decreto 4741 de 2005), se hace pertinente extender las estrategias y lineamientos pedagógicos, publicitarios y de incentivos para los establecimientos de comercio que generan este tipo de residuos sólidos. Sin embargo, se requiere dar especial atención y acompañamiento técnico a la debida implementación de la Resolución No. 2184 de 2019, mediante la cual empezó a regir en el 2021 el código de colores para la separación de residuos en la fuente y que busca darle una debida gestión a los residuos aprovechables por medio de la siguiente clasificación:

- Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables.
- Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón.
- Color negro para depositar los residuos no aprovechables.

Según el Ministerio de Ambiente, este código de colores deberá ser adoptado por los municipios o distritos que adelanten programas de aprovechamiento conforme a sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), donde el PGRIS de la ciudad de Bogotá D.C., establece que “(...)los usuarios del servicio público de aseo deberán presentar sus residuos de manera separada como lo determina la mencionada Resolución No. 2184 de 2019, y que en el caso de que el usuario pertenezca a una ruta contenerizada, este deberá trasladar los residuos hasta el contenedor correspondiente en las frecuencias y horarios establecidos por el prestador del servicio y cumplir con las normas establecidas para su correcto funcionamiento incluyendo la separación adecuada de los residuos (aprovechables y no aprovechables) para disponer en el contenedor que corresponda, de manera que se garantice el acceso al material aprovechable debidamente separado por los usuarios a los recicladores de oficio(...)”.

Igualmente, la norma técnica colombiana GTC 2009, ofrece una guía para la separación en la fuente de los residuos y establece que esta es una actividad a realizar por el generador de residuos para facilitar su posterior transporte y aprovechamiento, lo cual garantiza la calidad de los residuos aprovechables, donde se sugiere un código de colores que permita la clasificación de basuras en pro de facilitar la labor de identificación de los materiales residuales tal y como se describe en la siguiente tabla:

Tabla 1. Código de colores

Sector	Tipo de residuo	Color
Doméstico	Aprovechables	Blanco
	No aprovechables	Negro
	Orgánicos biodegradables	Verde
Industrial, comercial institucional y de servicios	Cartón y papel	Gris
	Plásticos	Azul
	Vidrio	Blanco
	Orgánicos	Crema
	Residuos Metálicos	Café oscuro
	Madera	Naranja
	Ordinarios	Verde
NOTA 1 Se recomienda que cada generador establezca un código de colores particular para aquellos residuos no incluidos en la tabla.		
NOTA 2 Se recomienda consultar la legislación local vigente para verificar si existe algún código de colores establecido por la autoridad competente.		
NOTA 3 Para residuos peligrosos se establecerá el código de colores e iconos en la guía para residuos peligrosos.		
NOTA 4 Los colores establecidos en la tabla obedecen a la normativa aplicable		

Fuente: Norma Técnica Colombiana GTC 24 (2009)

Es entonces pertinente que se articulen las herramientas técnicas y normativas existentes, junto con los instrumentos de planeación institucional que permitan la formulación, implementación y seguimiento de acciones y nuevos lineamientos para controlar la contaminación en la ciudad a través del seguimiento de residuos desde la fuente y no en los sitios de disposición final que es donde normalmente se centra la atención.

De esta forma, esta iniciativa pretende minimizar los residuos sólidos enviados al Relleno Sanitario Doña Juana y que son generados en su mayoría por establecimientos de comercio; procurando así el cuidado del medio ambiente y la salud pública. Esto, como se ha venido explicando, implica que la Secretaría Distrital de Ambiente en el marco de sus competencias, provea lineamientos para la implementación y operación de contenedores, rutas selectivas, desarrollo de pedagogía diferenciada para los distintos generadores de residuos, fomento de incentivos y proporción de asesoría técnica en la concertación y seguimiento de los objetivos planteados en el PGIRS desde la gestión integral de residuos sólidos y las prácticas de sostenibilidad alrededor que permitan mejorar las condiciones ambientales en el Distrito y maximizar los procesos de aprovechamiento que involucre a la Administración Distrital, la ciudadanía y el sector productivo.

Finalmente, el presente Acuerdo se alinea con:

- CONPES 3874, el cual es el instrumento de “*Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos*”, que busca adoptar medidas que vayan en pro del desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático a través de la gestión de los residuos sólidos no peligrosos con la promoción de la cultura ciudadana, la educación e innovación en gestión integral de residuos y así prevenir la generación de estos, promover la reutilización e incrementar los niveles de separación en la fuente y de aprovechamiento.
- Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, el cual aborda de manera integral los desafíos del cambio climático con acciones de mitigación, en donde respecto a la gestión integral de residuos sólidos, se establece que el Distrito Capital aumente los porcentajes de aprovechamiento y tratamiento de residuos, reduciendo así el transporte improductivo de largo trayecto, el enterramiento en Doña Juana, contribuyendo a preservar la naturaleza y reducir las emisiones de efecto invernadero, por lo que se propone “*(...)consolidación de una mesa permanente distrital de reciclaje, en la cual se involucren otros actores sociales relacionados e interesados con la cadena de valor del reciclaje, así como su participación en la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos [PGIRS]. El nuevo modelo también incluirá infraestructura de tratamiento y valorización, especialmente de orgánicos, y la mejora sustancial de la operación de disposición final en tecnología de relleno sanitario, contribuyendo así a preservar la naturaleza y reducir las emisiones de gases efecto invernadero.*”

4.- MARCO LEGAL

MARCO INTERNACIONAL

ISO 14001

Versa sobre el sistema de gestión ambiental, que permite a una empresa identificar y gestionar los riesgos ambientales, planteando opciones de cuidado al medio ambiente como:

- Protección del medio ambiente utilizando la prevención.
- Mitigación de los impactos ambientales.

- Mitigar los efectos secundarios según las condiciones ambientales de la empresa.
- Fomenta prácticas que incluyen la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos como parte de un enfoque integral de gestión ambiental.

ODS 12

"Producción y consumo responsables"

En su Meta 12.5, busca *"reducir considerablemente la generación de desechos a través de la prevención, reducción, reciclaje y reutilización para el año 2030"*, donde promueve acciones que incluye la implementación de sistemas de clasificación en origen como parte de las estrategias para alcanzar los objetivos de reducción y gestión responsable de los residuos.

MARCO NACIONAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

Artículo 79. *“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.*

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”

Artículo 95. *“El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos a los colombianos en esta Constitución, implica responsabilidades como:*

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.”

Artículo 333. *“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.”*

LEYES:

Ley 99 DE 1993

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”

Esta ley establece las disposiciones para la gestión ambiental en Colombia y otorga a las autoridades ambientales distritales, que en el caso de Bogotá es la Secretaría Distrital de Ambiente, la competencia para regular y controlar las actividades que afectan el medio ambiente en su jurisdicción.

Artículo 66. Competencia de Grandes Centros Urbanos. (...) *“Las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.”*(...)

Ley 1333 de 2009

“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.”

Artículo 1. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. *“El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993”*

Artículo 5. Infracciones. *“Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen (...)”*

Ley 1801 DE 2016

“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”

Artículo 3. Ámbito de aplicación del Derecho de Policía. *“El derecho de Policía se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas, de conformidad con este Código.*

Las autoridades de Policía sujetarán sus actuaciones al procedimiento único de Policía, sin perjuicio de las competencias que les asistan en procedimientos regulados por leyes especiales.”

Artículo 94. Comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica.

“Los siguientes comportamientos relacionados con la salud pública afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse:

(...) 2. No separar en la fuente los residuos sólidos, ni depositarlos selectivamente en un lugar destinado para tal efecto.

PARÁGRAFO 1. *Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:*

Multa General tipo 4; Suspensión temporal de actividad.

Multa General tipo 3; Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)(...)”

DECRETOS:**Decreto 2811 de 1974**

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.”

Artículo 34. *“En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las siguientes reglas:*

(...) b) La investigación científica y técnica se fomentará para:

4. Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, recolección, depósito y disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos no susceptibles de nueva utilización. (...)”

Artículo 38. *“Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso.”*

Decreto 312 de 2006

“Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital”

Este Decreto pretende que por medio de comportamientos individuales y colectivos, se de manejo adecuado de residuos incentivando el reuso, la minimización y la separación en la fuente, orientado a los generadores hacia la producción más limpia.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. *“El presente plan aplica a todas las personas que generan, reciclan y aprovechan residuos sólidos ordinarios y especiales y a las entidades públicas y personas o empresas privadas y organizaciones comunitarias y cooperativas vinculadas a la prestación del Servicio Público de Aseo.”*

Artículo 66. Programa de Campañas pedagógicas de separación en la fuente. *“La UAESP y las entidades que prestan el servicio Público de aseo directamente o en convenio con otras entidades, desarrollarán campañas de cultura ciudadana en el manejo responsable de los residuos y de separación en la fuente.”*

Decreto 2981 de 2013

“Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.”

Artículo 17. Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la presentación de residuos sólidos.

“Son obligaciones de los usuarios del servicio público de aseo, en cuanto al almacenamiento y la presentación de residuos sólidos:

- 1. Almacenar y presentar los residuos sólidos, de acuerdo a lo dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los municipios o distritos, en los respectivos programas para la prestación del servicio público de aseo, aspectos que deben estar definidos en el Contrato de Servicios Públicos.*
- 2. Realizar la separación de residuos en la fuente, tal como lo establezca el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del respectivo municipio o distrito para su adecuado almacenamiento y posterior presentación.”*

Artículo 93. Gestión diferencial de residuos aprovechables. *“Cuando sea viable el desarrollo de proyectos de aprovechamiento, el ente territorial deberá establecer, acorde con el régimen de servicios públicos, una estrategia técnica, operativa y administrativa que garantice la gestión diferencial de residuos aprovechables y no aprovechables. Para ello se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:*

- 1. Desarrollar un programa de separación en la fuente.*

Parágrafo 1º. *Es deber de los usuarios realizar separación en la fuente cuando se haga recolección selectiva de residuos sólidos aprovechables, de acuerdo con las condiciones establecidas por los respectivos Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS y el Programa de Prestación del Servicio.”*

Decreto 349 de 2014

“Por el cual se reglamenta la imposición y aplicación del Comparendo Ambiental en el Distrito Capital”

Artículo 7. Las infracciones.

“(…)

18. No disponer separadamente para su recolección, los residuos reciclables de los no reciclables.

“(…)”

Anexo: Tanto para persona natural como persona jurídica que cometa esta infracción, se dispone una multa de 5 s.m.l.l.v.

Artículo 9. *“Las sanciones por las infracciones de que trata el presente Decreto son de naturaleza policiva y se impondrán sin perjuicio de las facultades de otras autoridades.*

Decreto 345 de 2020

“Por el cual se adopta la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”

Plantea la necesidad de generar la articulación interinstitucional para la aplicación efectiva de sanciones contenidas en la ley en el marco de la gestión integral de residuos sólidos, donde se establece:

“(…) Adelantar mesas de trabajo con las entidades competentes para la imposición de medidas sancionatorias por manejo inadecuado de residuos. Estas sanciones estarán a cargo de SDG, SDGSeg UAESP, SDA, Alcaldías Locales, Policía(…)”

“Los usuarios del servicio público de aseo deberán presentar sus residuos de manera separada de acuerdo como lo determina la Resolución No. 2184 de 2019 o la normatividad que se expida en materia de gestión integral de residuos la que la modifique o sustituya.”

Artículo 5. Coordinación General del PGIRS. *“La coordinación general del PGIRS estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP – o quien ejerza sus funciones, en consecuencia, será la responsable de articular las diferentes acciones interinstitucionales requeridas para el cumplimiento de los programas, proyectos, actividades y metas planteadas en el PGIRS.”*

Decreto 555 de 2021

“Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”

Artículo 17. Medidas Territoriales para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.

“(…)”

El Distrito Capital promoverá una propuesta integral de aprovechamiento de residuos orgánicos y plásticos a escala barrial, local, distrital y regional, con el fin de cerrar gradualmente la disposición final (entierro de residuos) en el Parque de Innovación Doña Juana en coordinación con el PGIRS.”

Decreto 802 de 2022

“Por el cual se sustituye el capítulo 7, al título 2, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente al incentivo al aprovechamiento de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones”

Artículo 2.3.2.7.2. Ámbito de Aplicación. *“El presente capítulo aplica a las personas prestadoras de las actividades principales y complementarias del servicio público de aseo, a las entidades territoriales y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.”*

Artículo 2.3.2.7.5. Facturación del incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT). *“La facturación del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) al suscriptor o usuario del servicio público de aseo será responsabilidad de la persona prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables.”*

Parágrafo. *“Para el efecto, en el momento de liquidación de la tarifa final al suscriptor o usuario, el Valor del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos, será adicionado al costo de disposición final en relleno sanitario calculado de conformidad con la metodología tarifaria vigente adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).”*

RESOLUCIONES:

Resolución 2184 de 2019

“Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones”

Las modificaciones que consagra la resolución recaen sobre la fomentación de la cultura ciudadana en relación con la separación, clasificación y presentación de residuos, donde se presenta una distribución de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente en todo el territorio nacional, que dispone lo siguiente:

- Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables
- Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón.
- Color negro para depositar los residuos no aprovechables.

Esto aplica para todos los municipios o distritos, quienes implementarán el código de colores para la presentación de los residuos sólidos en bolsas u otros recipientes, en el marco de los programas de aprovechamiento de residuos del servicio público de aseo, de acuerdo con lo establecido en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

ACUERDOS:

Acuerdo 257 DE 2006

“Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”

Artículo 103. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Ambiente. *“La Secretaría Distrital de Ambiente tiene las siguientes funciones básicas:*

q. Realizar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y desechos o residuos peligrosos y de residuos tóxicos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños

ambientales y complementar la acción de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB- para desarrollar proyectos de saneamiento y descontaminación, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

5. La elaboración y diseño de políticas referidas a la movilidad, la prevención de desastres, la disposición y manejo integral de residuos sólidos y el manejo del recurso hídrico en el Distrito Capital, en coordinación con las entidades distritales responsables en cada una de estas materias.”

Acuerdo 927 de 2024

“Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

Artículo 152. Sostenibilidad y Circularidad de los servicios públicos en Bogotá: “(...) **Parágrafo 4.** *Se contemplará la selección de una alternativa para la prestación de los servicios públicos domiciliarios involucrando actores regionales, a las autoridades ambientales competentes, con el fin de contribuir en la garantía de largo plazo en el abastecimiento de agua, el tratamiento de aguas residuales y la gestión integral de residuos sólidos, encaminadas en el aprovechamiento y valorización mediante la implementación de acciones que eliminen el enterramiento de los residuos e innove en tecnologías limpias que generen subproductos, en la búsqueda de equilibrar y mitigar los impactos ambientales y sociales de los municipios de la región metropolitana”*

5.- IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, en el Decreto Ley 1421 de 1993 y el reglamento interno del Concejo Distrital; la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación.

No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007 puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en óbice para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa.

Esta iniciativa está alineada con el objetivo 4 del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina segura: “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”, particularmente con la meta estratégica:

ID	Objetivo	Nombre Indicador	Fuente de línea base	Año línea base	Valor de la línea base	Meta proyectada 2027
65	4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	Toneladas de residuos (promedio día) que se disponen en el Parque de Innovación Doña Juana	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	2023	6.000	4.800

6.-

COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

En concordancia con las disposiciones legales vigentes, en la Constitución Política de Colombia en su Artículo 313 se establece que corresponde a los Concejos: “4. *Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio*”.

En las atribuciones conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993 – Estatuto Orgánico de Bogotá en su artículo 12, le corresponde al Cabildo Distrital: “1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito (...)*”.

Es así como este Concejo tiene las competencias para presentar este proyecto de acuerdo como iniciativa propia de los concejales, para estudiarlo y aprobarlo, ya que no hace parte de las temáticas o propuestas que sólo pueden ser dictadas o reformadas a iniciativa del alcalde mayor.

REFERENCIAS

Acuerdo No. 726 de 2018 [Concejo de Bogotá]. Por medio del cual se implementan medidas que promuevan la cultura de la gestión de residuos sólidos en el Distrito Capital. 17 de diciembre de 2018.

Álvarez, et al. (2021). Rellenos sanitarios en Colombia, ¿una solución o un problema? [Trabajo de grado, Universidad CES]. Repositorio Institucional - Universidad CES

Decreto 4741 de 2005 [Presidente de la República]. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 30 de diciembre de 2005.

Decreto 2981 de 2013 [Presidente de la República]. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 20 de diciembre de 2013.

Decreto 349 de 2014 [Alcalde Mayor de Bogotá]. Por el cual se reglamenta la imposición y aplicación del Comparendo Ambiental en el Distrito Capital. 27 de agosto de 2014.

Decreto 351 de 2014 [Presidente de la República]. Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. 19 de febrero de 2014.

Decreto 345 de 2020 [Alcaldesa Mayor de Bogotá]. Por el cual se adopta la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. 31 de diciembre de 2020.

Decreto 802 de 2022 [Presidente de la República]. Por el cual se sustituye el capítulo 7, al título 2, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente al incentivo al aprovechamiento de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 16 de mayo de 2022.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2023). Cuenta ambiental y económica de flujos de materiales de residuos sólidos (CAEFM-RS) 2020 provisional – 2021 provisional. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/CAEFM-RS/bol-CAEFMRS-2021pr.pdf>

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2009). Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente (GTC 24). <https://tienex.co/media/b096d37fcdee87a1f193271978cc2965.pdf>

Ley 99 de 1993 [Congreso de Colombia]. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 22 de diciembre de 1993

Ley 1333 de 2009 [Congreso de Colombia]. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. 21 de julio de 2009.

Ley 1801 de 2016 [Congreso de Colombia]. Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 29 de julio de 2016.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2024). Global Waste Management Outlook 2024. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/44939/global_waste_management_outlook_2024.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Proyecto de Acuerdo N°. 156 de 2016 [Concejo de Bogotá]. Por el cual se establece el objetivo basura cero como lineamiento de las políticas distritales sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos en el Distrito Capital. 2016.

Resolución No. 2184 de 2019 [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible]. Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. 26 de diciembre de 2019.

Resolución No. 1257 de 2021 [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible]. Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones. 23 de diciembre de 2021.

Resolución No. 0851 de 2022 [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible]. Por la cual se desarrollan los artículos 2.2.7A.1.3, 2.2.7A.2.1, el numeral 3.1 del artículo 2.2.7A.2.2, el numeral 3 del artículo 2.2.7A.2.4, el artículo 2.2.7A.4.2 y el artículo 2.2.7A.4.4 del Título 7A del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones. 5 de agosto de 2022

Secretaría Distrital de Planeación. (2023). Número de matrículas activas de establecimientos de comercio para Bogotá por localidad y UPZ a 2022. <https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/establecimientos-de-comercio%5D>

Superintendencia de Servicios Públicos. (2023). Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos 2022. <https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Informe-Nacional-de-Disposicion-Final-de-Residuos-Solidos-2022.pdf>

Atentamente,

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Concejal de Bogotá
Partido Liberal

Anexos: N/A

Copia: N/A

Elaboró: Andrea Camelo, judicante

Revisó: Diana Riveros, asesora H.C. AGG

PROYECTO DE ACUERDO NO 216 DE 2025

PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO No. ____ de 2025

“Por medio del cual se establecen lineamientos para promover la debida clasificación de residuos sólidos desde la fuente en establecimientos comerciales de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política y el Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 12 numerales 1, 7 y 25

Artículo 1°. Objeto. La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, establecerá los lineamientos y medidas necesarias para promover la clasificación de residuos sólidos aprovechables en la fuente por parte de los establecimientos de comercio de la ciudad, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, con el fin de contribuir a la reducción de la cantidad de residuos destinados a disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana y a la conservación del medio ambiente.

Artículo 2°. Definiciones. Para los fines del presente Acuerdo, se establecen las siguientes definiciones:

Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, para posteriormente realizar su reincorporación al ciclo económico productivo en forma ambientalmente eficiente.

Campaña de sensibilización: Es una estrategia de comunicación diseñada para crear conciencia, informar y educar a la población sobre la importancia y los beneficios de clasificar los residuos desde el lugar donde son generados. Busca promover cambios de comportamiento en los ciudadanos y fomentar la adopción de prácticas de separación de residuos en sus hogares, lugares de trabajo y otros espacios.

Clasificación en la Fuente: Proceso mediante el cual los residuos sólidos son separados y agrupados según su composición y características (aprovechable y no aprovechable) en el lugar de generación, con el fin de facilitar su posterior recolección, tratamiento y disposición final de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

Disposición final de residuos sólidos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos, en especial los no aprovechables, en forma definitiva en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

Establecimiento de comercio: Es un conjunto de bienes y elementos organizados para desarrollar las actividades comerciales y cumplir los fines de la empresa. Ejemplo: tiendas, supermercados, restaurantes, cafeterías, fábricas, etc.

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades para el manejo de los residuos sólidos que abarca todas las etapas del ciclo de vida de los mismos desde su generación hasta su disposición final, las cuales van encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables.

Medidas correctivas: Acciones impuestas a aquellos generadores de residuos sólidos que incumplen con las disposiciones legales en el marco de la gestión integral de residuos sólidos y su obligatoria separación desde la fuente.

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS: Es un instrumento de planificación municipal o regional que establece las políticas, estrategias, metas y acciones necesarias para garantizar una adecuada gestión de los residuos sólidos en un determinado territorio, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo.

Reciclaje: Proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelven a los materiales sus potencialidades de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos, con el fin de aprovechar los recursos existentes en los residuos y reducir la necesidad de utilizar nuevos recursos naturales, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

Relleno Sanitario Doña Juana: Es la principal obra de ingeniería que tiene Bogotá para tratar cada uno de los residuos que llegan y que posteriormente se producen después de la disposición final.

Residuo sólido: Se refiere a cualquier material, sustancia u objeto principalmente sólido que el poseedor desecha tras su vida útil y que es procedente de la fabricación, transformación, utilización o consumo de un

bien. Estos residuos sólidos, en su mayoría, son susceptibles de aprovecharse o transformarse con un correcto reciclado.

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que puede ser recuperado, reciclado y transformado para su reincorporación a un proceso productivo.

Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.

Usuario residencial: Persona natural o jurídica que usa los servicios públicos domiciliarios para las actividades necesarias de los hogares y núcleos familiares.

Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de la actividad comercial, industrial, y los oficiales que se benefician con la prestación del servicio público de aseo.

Artículo 3°. Competencias. En el marco de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 103 del Acuerdo 257 de 2006, la Administración Distrital por medio de la Secretaría Distrital de Ambiente, es la encargada de revisar y armonizar el Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS junto con las demás políticas distritales y nacionales sobre la separación en la fuente y gestión integral de los residuos sólidos en Bogotá D.C.; para el desarrollo de estas estrategias y de acuerdo al Decreto 345 de 2020, tendrá el acompañamiento interinstitucional de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y demás entidades competentes.

Parágrafo. Se faculta a la Administración Distrital para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las normas reglamentarias necesarias para la implementación y cumplimiento del presente Acuerdo.

Artículo 4°. Lineamientos. La promoción de la clasificación de residuos sólidos en la fuente, se llevará a cabo en el Distrito Capital atendiendo los siguientes lineamientos:

1. Campañas de concientización: La Secretaría Distrital de Ambiente propenderá por la difusión y desarrollo de campañas de sensibilización y educación ambiental a los establecimientos comerciales para las adecuadas prácticas de gestión de residuos sólidos, quienes a su vez podrán replicar esta información entre su personal y clientes.

2. Bolsas de colores: Se propenderá porque los usuarios no residenciales separen los residuos sólidos desde la fuente en contenedores y bolsas que cumplan con las características del código de colores que establece la norma técnica colombiana GTC 2009 y la Resolución No. 2184 de 2019, en tres categorías principales: i. Residuos orgánicos y biodegradables: color verde, ii. Residuos aprovechables: color blanco; y iii. Residuos no aprovechables: color negro.

3. Ilustraciones pedagógicas y didácticas: Se difundirá a través de medios de comunicación masivos, redes sociales, material impreso y actividades comunitarias, ilustraciones describiendo visualmente cómo separar

residuos sólidos en la fuente, que sean de fácil comprensión para la ciudadanía, principalmente en contenedores y recipientes de clasificación de residuos sólidos en los establecimientos de comercio.

4. Divulgación de incentivos fiscales: A través de los medios de comunicación físicos y virtuales, la UAESP en cabeza de la Secretaría Distrital de Ambiente, informará a los establecimientos comerciales sobre el Valor del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos que se aplica a la tarifa final del servicio público de aseo, de acuerdo con la metodología tarifaria vigente establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA.

5. Alianzas estratégicas: La Secretaría Distrital de Ambiente podrá impulsar alianzas público privadas para promover y ejecutar proyectos encaminados a la gestión integral de residuos sólidos en los comercios.

Para efectos de lo dispuesto en este numeral, la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Ambiente promoverá el proyecto ‘Producción y Comercio Sostenible’ de la Cámara de Comercio de Bogotá que busca dinamizar la gestión de residuos en Bogotá- región.

6. Sello Verde: La Secretaría Distrital de Ambiente será la encargada de otorgar el Sello Verde a los establecimientos de comercio que implementen y desarrollen una óptima gestión integral de residuos sólidos. Esto les permitirá a los comercios estar en posesión de una distinción ambiental, recibiendo un reconocimiento mediante un sello de calidad que influye en su ventaja competitiva, su percepción y sus relaciones con organizaciones, clientes y la comunidad donde opera.

7. Monitoreo y evaluación: Efectuar la revisión de la implementación y desarrollo de la separación en la fuente de residuos sólidos en los establecimientos de comercio de Bogotá D.C., para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Acuerdo junto con las normas ambientales vigentes relacionadas con la gestión de residuos sólidos.

8. Medidas correctivas: La Secretaría Distrital de Ambiente aplicará las sanciones y medidas correctivas para aquellos establecimientos de comercio que incurran en infracciones ambientales respecto a la debida separación de residuos en la fuente, con el acompañamiento de la Policía, de acuerdo a lo estipulado en PGIRS y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Se promoverá la participación ciudadana en aras de la vigilancia, mediante la implementación de mecanismos de denuncia y reporte de infracciones ambientales.

Artículo 5°. Implementación. La Administración Distrital reglamentará y dará inicio a la implementación del presente Acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a su entrada en vigencia.

Artículo 6°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 217 DE 2025**PRIMER DEBATE**

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL 19 DE SEPTIEMBRE COMO EL DÍA DISTRITAL DE LA NIÑEZ CON CONDICIONES CRANEOFACIALES CONGÉNITAS EN BOGOTÁ D.C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA SU INCLUSIÓN”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**1. OBJETO DE LA INICIATIVA**

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto declarar el 19 de septiembre como día conmemorativo y de reconocimiento a niños y niñas que tienen malformaciones craneofaciales congénitas en Bogotá D.C., exaltando su importancia y generando sensibilización sobre la exclusión que se genera por estas diferencias, disminuyendo así la discriminación y los prejuicios de la sociedad.

2. ANTECEDENTES

Esta iniciativa del concejal Armando Gutiérrez González no cuenta con antecedentes y es presentada por primera vez a la Corporación para su estudio y aprobación.

3. JUSTIFICACIÓN DEL AUTOR PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE ACUERDO

Se busca generar sensibilización hacia los niños y niñas que presentan malformaciones craneofaciales congénitas en Bogotá, las cuales generan un alto impacto en su calidad de vida, no sólo por el rechazo social sino también por el desconocimiento y falta de orientación a los padres y madres de familia sobre los tratamientos médicos disponibles, de acuerdo a la experiencia que han vivido algunas familias de la Fundación ONDEC (Organización de Niños con Defectos de Cara Congénitos en Colombia).

La palabra ‘craneofacial’ es un término médico que está ligado a los huesos del cráneo y de la cara. Las malformaciones craneofaciales son diferencias de nacimiento ya sea de la cara o de la cabeza. Algunas de las más comunes son el labio y paladar leporino, mientras que otras se registran rara vez; la mayoría de éstas afectan el aspecto físico de quien las

tiene. El tratamiento depende del tipo específico de problema. Generalmente la cirugía plástica y reconstructiva puede cambiar la apariencia de la persona²².

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las anomalías o malformaciones congénitas como alteraciones del desarrollo presentes al momento del nacimiento. Sus manifestaciones pueden ser detectadas posteriormente. Estas alteraciones no deben pasar desapercibidas, pues representan una causa importante de morbilidad y discapacidad en niños y niñas. Estudios muestran que en los últimos 20 años las malformaciones craneofaciales congénitas son la segunda causa de mortalidad infantil en menores de un año en Colombia, y que generan más del 30% de discapacidad en la población general. Además son enfermedades de alto costo para el sistema de salud²³.

Las malformaciones craneofaciales son algunas de las patologías más prevalentes en la edad pediátrica y se encuentran dentro del gran grupo de las enfermedades huérfanas, las cuales se definen en Colombia como aquellas crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia (la medida de todos los individuos afectados por una enfermedad dentro de un periodo particular de tiempo) menor a 1 por cada 5.000 personas. Dentro de las cuales se destacan las siguientes enfermedades:

- Síndrome de treacher Collins
- Síndrome de crouzon
- Síndrome de apert
- Síndrome de pfeiffer
- Displasia frontonasal
- Síndrome de moebius
- Síndrome de goldenhar

Desde el 18 de septiembre del 2017 la Fundación ONDEC decidió unir a las familias que conviven con niños con anomalías craneofaciales en el país, con el fin de apoyarse mutuamente desde las dimensiones social, psicológica, así como brindar orientaciones para el respectivo tratamiento médico. Su creación inicia desde hace 6 años ante la Cámara de Comercio de Bogotá y ha logrado una comunidad con más de 25 familias que conviven con niños con malformaciones craneofaciales en Colombia, más de 5 instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y más de 30 personas que hicieron alianza y trabajan bajo los mismos objetivos. Vela porque los padres y madres de familia cuenten con el conocimiento

²² Medline Plus (S.F.). Anomalías craneofaciales. <https://medlineplus.gov/spanish/craniofacialabnormalities.html#:~:text=Las%20anomal%C3%ADas%20craneofaciales%20son%20defectos,Otros%20son%20muy%20raros.>

²³ Beleño, V.; Borda, L. y Castillo, M. (2021). *Malformaciones congénitas craneofaciales en Colombia. Revisión narrativa.*

https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/5940/Bele%C3%B1o_Barroso_Vanessa_Sofia_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

acerca del tratamiento que deben recibir estos niños y niñas y finalmente busca que tantos ellos y ellas, así como sus familias, tengan una mejor calidad de vida.

En Bogotá el Hospital Meissen se ha convertido en un centro de referencia a nivel nacional e internacional en el servicio de cirugía craneomaxilofacial pediátrica. En el año 2020 salvaron la vida de un recién nacido de 10 días que tenía el síndrome Pierre-Robin, una enfermedad congénita que le impedía respirar y comer con normalidad. Todo gracias a una cirugía craneomaxilofacial pediátrica, a cargo de un equipo de profesionales liderado por el médico experto Andrés Duque. Equipo que también creó una guía para el manejo de malformaciones craneofaciales para Bogotá y que hace casi 15 años ha atendido alrededor de 50 casos similares, haciendo uso de la última tecnología para que estos niños y niñas tengan un buen desarrollo en todos los aspectos y una mejor calidad de vida²⁴.

El genetista Julián Ramírez Cheyne, director científico del Equipo de Enfermedades Huérfanas del Hospital Universitario del Valle, indica que uno de los grandes retos en esta materia es lograr que desde el médico general hasta los especialistas tengan presentes los signos y síntomas de alarma y que no desestimen las preocupaciones de padres, madres, cuidadores e incluso docentes que notan cambios en los niños y niñas que consultan²⁵.

Con el avance de la tecnología y de los conocimientos logrados a nivel mundial, el tratamiento oportuno mejora de forma significativa y casi completa el estado de salud de los niños y niñas con malformaciones craneofaciales en el país. Los trabajos de Ortiz-Monasterio en México sobre hendiduras nasales durante 20 años de experiencia con 154 pacientes (Ortiz Monasterio et al. 1987) reflejan el gran interés y avance en el manejo de estas malformaciones en Latinoamérica. Existen algunas publicaciones aisladas de grupos de investigadores en Latinoamérica que reflejan la preocupación y el interés por el problemas de las malformaciones craneofaciales de modo específico²⁶.

Sin embargo, ha sido difícil establecer la frecuencia de las malformaciones craneofaciales en Colombia, debido a los diferentes métodos de recolección de datos para obtener la información, a la falta de un protocolo homólogo, flexible y adaptable a las necesidades de la comunidad, y al hecho de que muchos niños son vistos a la hora del nacimiento por médicos sin experiencia o experticia en el tema. Los datos encontrados en el Informe final de ECLAMC (Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas), pese a ser de gran valor, tienen como debilidad el hacer un registro general de las malformaciones congénitas, sin especificar o agrupar los defectos del macizo craneofacial (Berrocal M. et al. 2000).

²⁴ Cabrera, D. (12 de noviembre de 2020). Salvan la vida de bebé con una enfermedad congénita en Bogotá. *RCN Radio*. <https://www.rcnradio.com/bogota/salvan-la-vida-de-bebe-con-una-enfermedad-congenita-en-bogota>

²⁵ RCN Radio (1 de marzo de 2023). Más de 80 mil colombianos conviven con una enfermedad huérfana que requiere una atención integral. <https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/mas-de-80-mil-colombianos-conviven-con-una-enfermedad-huerfana-que-requiere-una>

²⁶ Tales como: (Ortiz-Monasterio et al. 1981), en México; (Pinto et al. 1990), en Brasil; (Nazer et al. 1995), en Chile; (Berrocal et al. 1996), en Colombia, (Fuente Del Campo et al. 1998), en México; (Psillakis J.M. 1985), en Brasil; (Raposo do Amaral 1987) en Brasil, y (Dogliotti et al. 1998), en Argentina y otros.

Incluso el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas, hizo un llamado a las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (EPS) para brindar mayor apoyo a pacientes y cuidadores. Señaló que Colombia ha avanzado en esta materia, pues es el único país que tiene leyes específicas que protegen a quienes son diagnosticados con una patología de este tipo, pero se requiere seguir promoviendo los derechos fundamentales de estas personas²⁷.

Por último, el daño ecológico producido en la tierra a finales del presente siglo afecta el aire, el agua y el suelo, poniendo en riesgo la salud y el futuro genético de los seres humanos, lo cual ha despertado el interés de investigadores en el tema, a fin de prevenir un daño irreversible, como lo demuestran publicaciones recientes, que bien vale la pena tener presente. Problemas relacionados con: Micotoxinas en terrenos de cultivo y cereales almacenados (Wei X. et al. 1993); solventes orgánicos de polución industrial (Saavedra D. et al. 1996); exposición a pesticidas en el trabajo (García AM.1998); ingestión de drogas analgésicas durante el embarazo en Tailandia (Chuangsuwanich A. et al. 1998); abuso de drogas en las madres, (Thomas D.B. 1995) y mutación genética (Clifton-Dligh R.J. 1998). Estas son algunas de las evidencias encontradas al abordar el tema de las anomalías craneofaciales. Como muy bien lo describe y lo explica en su artículo, la Dra. Manuela Berrocal, cirujana plástica colombiana, es un tema de interés público que ha ido afectando a una minoría pero que tiene grandes consecuencias a nivel del sector salud, económico y social.

Al conmemorar el 19 de septiembre como el Día Distrital de la niñez con condiciones craneofaciales congénitas Bogotá D.C., se incentivaría la sensibilización de la sociedad hacia estas enfermedades junto con la prevención de las mismas, y sería una iniciativa para favorecer y mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que presentan estas condiciones. ¿Por qué septiembre? Porque este mes se considera el mes de la aceptación craneofacial en Dallas (Texas), donde se encuentra la asociación más grande en el mundo de malformaciones craneofaciales.

Bogotá al aprobar este acuerdo puede ser ejemplo de una ciudad incluyente y propiciar espacios donde se amplíe el radio de acción de otras fundaciones, entes privados y públicos para mejorar la calidad de vida de niños y niñas con malformaciones craneofaciales congénitas, así como la de sus padres, madres y cuidadores.

La iniciativa aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
- Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

²⁷ Defensoría del Pueblo (26 de febrero de 2023). *Defensor del pueblo hace llamado para brindar mayor apoyo a pacientes y cuidadores de enfermedades huérfanas*. <https://www.defensoria.gov.co/-/defensor-del-pueblo-hace-llamado-para-brindar-mayor-apoyo-a-pacientes-y-cuidadores-de-enfermedades-hu%C3%A9rfanas>

- Objetivo 10: Reducción de la desigualdad en y entre los países.

Finalmente, también se alinea con el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” con el Objetivo 2 Bogotá Confía en su Bienestar, que contiene dentro de sus metas por parte de Integración Social adaptar 15 servicios sociales para la atención diferencial y la inclusión de personas con discapacidad.

4. MARCO NORMATIVO

a. Marco Internacional

- **Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25).**

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

- **Declaración Universal de los Derechos del Niño (principio 2).**

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.

- **La Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño**

Reitera expresamente el derecho de los menores de edad al disfrute del más alto nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de las enfermedades que padezcan, así como la rehabilitación de su salud. De esta manera, prevé que *“Los Estados Partes aseguren la plena aplicación de este derecho, y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: (...) b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud”*. Del mismo modo, el artículo 3.1 de dicha Convención se refiere al principio de interés superior de los niños, al exigir que en *“todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”*.

- **Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (artículo 12)**

Contempla el derecho a la salud y exige a los estados partes su garantía y protección. Es decir, los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

- **63ª Asamblea Mundial de la Salud - Defectos congénitos.**

En el apartado de detección, tratamiento y atención señala que el examen sistemático a los recién nacidos facilita la detección precoz de trastornos congénitos, así como su tratamiento. También que la formación adecuada permite que el personal de asistencia

primaria pueda detectar los defectos congénitos, ofrecer un tratamiento médico básico y servicios de asesoramiento de acuerdo a las circunstancias familiares y el contexto comunitario. Cuando no es posible efectuar el diagnóstico en los servicios de atención primaria se puede derivar el caso a especialistas.

b. Constitución Política de la República de Colombia

La Constitución Política considera que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y debe ser protegida de manera integral por el Estado.

- **Artículo 5.** El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.
- **Artículo 13.** Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (negrilla fuera de texto).
- **Artículo 44.** Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
- **Artículo 47.** Impone al Estado el deber de adelantar *“una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”*.
- **Artículo 49.** Definición del derecho a la salud. La salud es un servicio público a cargo del Estado, en virtud del cual se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de *promoción, protección y recuperación* de la salud bajo los principios de *eficiencia, universalidad y solidaridad*.

c. Leyes

- **Ley Estatutaria 1751 de 2015**

El artículo 15 aclaró que los criterios de exclusión para la financiación de servicios y tecnologías en salud no podrán afectar "el acceso a tratamientos a las personas que sufren enfermedades raras o huérfanas".

El literal f) del artículo 6 establece que el Estado está en la obligación de implementar medidas concretas y específicas para garantizar la atención integral de los derechos consagrados en la Carta Política para las niñas, niños y adolescentes. Estas medidas deben encontrarse formuladas por ciclos vitales: *prenatal hasta seis (6) años, de los (7) a los catorce (14) años, y de los quince (15) a los dieciocho (18) años*. A su vez, el artículo 11 de la referida ley reconoce como sujetos de especial protección a los niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, desplazados, víctimas de violencia y conflicto armado, adultos mayores, personas que padecen enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, cuya atención no podrá ser limitada o restringida por razones de naturaleza administrativa o económica.

- **Ley 1392 de 2010, modificada por la Ley 1438 de 2011**

La presente Ley tiene como objetivo reconocer que las enfermedades huérfanas representan un problema de especial interés en salud dado que, por su baja prevalencia en la población pero su elevado costo de atención, requieren dentro del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud) un mecanismo de aseguramiento diferente al utilizado para las enfermedades generales, dentro de las que se incluyen las de alto costo; y unos procesos de atención altamente especializados y con un gran componente de seguimiento administrativo.

- **Ley 1966 de 2019**

La presente ley adopta medidas a fin de mejorar la transparencia, vigilancia, control y aplicación del uso de los recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Mejorar la eficiencia de operación y transparencia a través de la unificación de los sistemas de información de gestión financiera y asistencial, la publicación de información esencial para el control social y rendición de cuentas de los agentes del sector; así como introducir decisiones de operación de la prestación de servicios y mecanismos de asignación de recursos para el aseguramiento por desempeño, con el fin de promover la alineación entre agentes del sector, que logre resultados encaminados hacia el mejoramiento de la salud y de la experiencia de la población colombiana en los servicios de salud.

d. Decretos Nacionales

- **Decreto 780 de 2016**

Establece que los pacientes que sean diagnosticados con enfermedades huérfanas se reportarán al Ministerio a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública - SIVIGILA de acuerdo con las fichas y procedimientos que para tal fin estén definidos.

- **Decreto 1954 de 2012**

El presente decreto tiene por objeto establecer las condiciones y procedimientos para implementar el sistema de información de pacientes con enfermedades huérfanas, definidas en el artículo 2 de la Ley 1392 de 2010, modificado por el artículo 140 de la Ley 1438 de 2011, con el fin de disponer de la información periódica y sistemática que permita realizar el seguimiento de la gestión de las entidades responsables de su atención, evaluar el estado de implementación y desarrollo de la política de atención en salud de quienes las padecen y su impacto en el territorio nacional.

e. Resoluciones

- **Resolución 023 de 2023 Ministerio de Salud y Protección Social**

Actualiza el listado de enfermedades huérfanas - raras, cuyo ámbito de aplicación son las EPS, IPS, INS, ADRES y secretarías de salud del orden municipal y que será utilizado para generar y administrar los diagnósticos médicos de morbilidad o mortalidad, así como notificar los nuevos casos de enfermedades huérfanas al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA).

- **Resolución 3681 de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social**

La presente resolución tiene por objeto definir los contenidos y requerimientos técnicos de la información a reportar por una única vez a la Cuenta de Alto Costo, para la elaboración del censo de pacientes con enfermedades huérfanas.

Artículo 3. Reporte de la Información. La información de los pacientes diagnosticados con enfermedades huérfanas deberá reportarse a través de la Cuenta de Alto Costo (<http://www.cuentadealtocosto.org>)

- **Resolución 2048 de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social**

La presente resolución tiene por objeto actualizar el listado de enfermedades huérfanas y establecer el número con el cual se identifica cada enfermedad incluida en el Anexo Técnico que forma parte integral del presente acto.

Artículo 3. Asignación del número con el cual se identifica cada enfermedad huérfana. Una vez incluida una enfermedad huérfana en el listado de enfermedades huérfanas, se asignará el número de acuerdo con el orden de inclusión en forma consecutiva al último número establecido.

f. Acuerdos

- **Acuerdo 537 de 2013. “Por medio del cual se ordena implementar una estrategia para promover la detección temprana, seguimiento, rehabilitación y vigilancia a las personas afectadas por enfermedades huérfanas en el Distrito Capital”**

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto ordenar el diseño e implementación de una estrategia sobre la promoción de la detección temprana, seguimiento, rehabilitación y vigilancia a las personas afectadas por enfermedades huérfanas en el Distrito Capital, bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Salud, y

articulación intersectorial en materia de prevención, control, tratamiento, asistencia, educación, información, financiación e investigación científica, de esta problemática contemplada en la Ley 1392 de 2010.

Las empresas administradoras de planes de beneficios en salud (EAPB), de Riesgos Profesionales, las Secretarías de Integración Social, Educación y Cultura y demás entidades públicas del distrito que por su actividad tengan injerencia en el curso de estas enfermedades, coadyuvarán y tendrán corresponsabilidad en el desarrollo y aplicabilidad de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo.

g. Jurisprudencia

- **Sentencia 298 de 2021**

(...) el derecho a la salud en el caso de niños, niñas y adolescentes reviste una protección prevalente por parte del Estado que debe establecer medidas concretas y específicas para garantizar su atención integral. Asimismo, comporta una atención prioritaria que, en pacientes con enfermedades huérfanas, se dirige a brindar acceso oportuno a los servicios de salud, tratamiento y rehabilitación, sin limitaciones de tipo administrativo ni económico.

- **C-313 de 2014**

La corte precisó que *“la estimación del derecho fundamental ha de pasar necesariamente por el respeto al ya citado principio **de la dignidad humana**, entendida esta en su triple dimensión como principio fundante del ordenamiento, principio constitucional e incluso como derecho fundamental autónomo. Una concepción de derecho fundamental que no reconozca tales dimensiones, no puede ser de recibo en el ordenamiento jurídico colombiano”*

- **Sentencia T-196/18**

El Tribunal consideró que el propósito del constituyente en esta materia estuvo orientado a implementar y fortalecer la recuperación y la protección especial de quienes padecen de algún tipo de patología que produce una disminución **física, sensorial o psíquica**, incentivando así, el ejercicio real y efectivo de la igualdad.

- **Sentencia SU-225 de 1998. Véanse también las recientes sentencias T-402 de 2018, T-010 de 2019 y T-117 de 2019.**

Ahora bien, esta protección especial otorgada a los niños se justifica en que *“la comunidad política debe dar un trato preferencial a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y están impedidos para participar, en igualdad de condiciones, en la adopción de las políticas públicas que les resultan aplicables. Esto es así, pues el constituyente buscó promover un Estado Social de Derecho donde se atendieran especialmente las necesidades de las personas más vulnerables, entre las que se encuentran los niños.*

5. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el análisis del impacto fiscal en cualquier proyecto de acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios debe hacerse explícito y ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo, asimismo deberá estar incluido de manera expresa en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite. La presente iniciativa no genera impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, pues no se incrementará el presupuesto del Distrito ni generará una nueva fuente de financiación.

No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007 puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en óbice para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa.

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

En concordancia con las disposiciones legales vigentes, en la Constitución Política de Colombia en su Artículo 313 se establece que corresponde a los Concejos: “4. *Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio*”.

En las atribuciones conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993 – Estatuto Orgánico de Bogotá en su artículo 12, le corresponde al Cabildo Distrital: “1. *Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito (...)*”.

Es así como este Concejo tiene las competencias para presentar este proyecto de acuerdo como iniciativa propia de los concejales, para estudiarlo y aprobarlo, ya que no hace parte de las temáticas o propuestas que sólo pueden ser dictadas o reformadas a iniciativa de la alcaldesa mayor.

Bibliografía

- Berrocal M. (2000). Estudio de las Malformaciones Craneofaciales. Recuperado de <https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/cirugia-plastica/vol616/plastica61620estudio1/>
- Berrocal M. et al. (1996) Valoración Integral de pacientes operados de Fisura Labiopalatina. Análisis Auditivo, Foniátrico y Estético.” Cir. Plast. Iberlatinamer 12(4) 321- 326.
- Chuangsuwanich A. et al. (1998) Epidemiology of cleft lip and palate in Thailand. Ann. Plast. Surg. 41(1) 7-10.
- Clifton-Bligh RJ. Et al. (1998) Mutation of the gene encoding human TTF-2 associated with thyroid agenesis, cleft palate and choanal atresia. Nat. Genet. 19(4) 399-401.
- Constitución de Colombia. De los principios fundamentales. Recuperado de <http://www.constitucioncolombia.com/titulo-1>
- Constitución de Colombia. Derechos fundamentales de los niños. Recuperado de <http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-44>
- De la Plaza R. (1996) Corrección progresiva de deformidades craneofaciales por medio de expansores lineales. Cir. Plast. Iberlatinamer. 22(2) 119-132.

- Dogliotti P. et al. (1998) Distraccion ósea gradual craneofacial. Cir. Plast Iberlatinamer. 24(3) 243-250.
- Fuente del Campo A., Ortiz-Monasterio F. (1978) Hipertelorismo ó Teleorbitismo. Anales Médicos. (23), 153.
- García AM. (1998) Occupational Exposure to pesticides and congenital malformations: a review of mechanisms, methods and results. Am.J.Ind.Med. 33(3) 232-40.
- Nazer J. et al. (1995) Incidencia de Labio Leporino y Paladar Hendido en Latinoamérica. Pediatría (Santiago de Chile) 37 (1/2) 13-9.
- Ortiz-Monasterio F. et al. (1987) Nasal Clefts. Ann.Plast. Surg. (18), 377-397
- Ortiz- Monasterio F. et al. (1990) Geometrical planning for the correction of orbital hypertelorism. Plast. Reconstr. Surg. (86), 650.
- Ortiz- Monasterio et al. (1979) Hiperteleorbitismo. Cir. Plast. Iberlatinamer. Número especial dedicado a Cirugía Craneofacial.
- Pinto R.A. et al. (1990) Consideraes sobre fissuras labiopalatinas no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Rev. HCPA & Fac. Med. Univ. Fed. Rio Gd. Do Sul. 10(2) 78-82
- Psillakis J.M. Surgical treatment of hypertelorism. (1985) In Craniofacial Surgery. Boston.
- Saavedra-Ontiveros D. et al. (1196) Industrial Pollution due a Organic solvents as a cause of teratogenesis. Salud Publica Mex. 38(1) 3-12
- Thomas D.B. (1995) Cleft palate, mortality and morbidity in infants of substance abusing mothers". J. Pediatr. Child Health. 31(5) 457-60.
- Wei X. et al. (1993) Pathogenesis of craniofacial and body wall malformations induced by ochratoxin A in mice". Am. J. Med. Genet. 47(6) 862-71.

Con un atento saludo,

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Concejal de Bogotá

Partido Liberal

Anexos: N/A

Copia: N/A

Elaboró: Neried Echevery, asesora – Diana Riveros, asesora

Revisó: Diana Riveros, asesora H.C. AGG

PRIMER DEBATE**PROYECTO DE ACUERDO No. ____ DE 2025**

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL 19 DE SEPTIEMBRE COMO EL DÍA DISTRITAL DE LA NIÑEZ CON CONDICIONES CRANEOFACIALES CONGÉNITAS EN BOGOTÁ D.C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA SU INCLUSIÓN”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

Artículo 1°. Objeto. Declarar el 19 de septiembre como el Día Distrital de la niñez con malformaciones craneofaciales congénitas en Bogotá D.C. y definir medidas para enfrentar la discriminación y los prejuicios de la sociedad en pro de garantizar su inclusión real y efectiva en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Artículo 2°. Día Distrital de la niñez con condiciones craneofaciales congénitas en Bogotá D.C. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud y las demás entidades competentes, propenderá por realizar actividades de sensibilización, concientización y empoderamiento en favor de la inclusión de niños y niñas con malformaciones craneofaciales congénitas, dirigidas a la niñez con esta condición, sus familias y la ciudadanía en general, incluyendo la comunidad educativa de la ciudad.

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. El presente acuerdo está dirigido a la niñez con malformaciones craneofaciales congénitas y sus familias con domicilio en Bogotá D.C.

Parágrafo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las malformaciones congénitas como alteraciones del desarrollo presentes al momento del nacimiento. Se encuentran dentro del grupo de enfermedades huérfanas en el país y tienen un impacto importante en la morbilidad infantil.

Artículo 4°. Capacitación y sensibilización en el sector salud. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud y las Subredes Integradas de Servicios de Salud -SISS- en el ámbito de sus competencias, fomentará acciones de capacitación al personal de salud sobre los signos y síntomas de alarma de las malformaciones craneofaciales congénitas; así como de sensibilización y apoyo psicosocial para esta población y su núcleo familiar, garantizando en todo momento una atención en salud integral y de calidad.

Artículo 5°. Educación inclusiva. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de Integración Social, fomentará el respeto e inclusión de la niñez con malformaciones craneofaciales congénitas en los jardines infantiles y las instituciones educativas de la ciudad para generar una sana convivencia escolar y disminuir barreras de tipo actitudinal en la comunidad educativa.

Parágrafo 1. Para efectos de lo dispuesto en este artículo se propiciarán actividades que hagan uso de herramientas lúdicas y pedagógicas al interior de los jardines infantiles y colegios oficiales del Distrito.

Parágrafo 2. La Administración Distrital sensibilizará y capacitará periódicamente a la comunidad educativa de las instituciones de que trata el presente artículo, incluyendo al personal directivo, administrativos, docentes, padres y madres de familia y cuidadores.

Artículo 6. Inclusión deportiva, cultural y artística. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y en coordinación con las Alcaldías Locales, buscará la vinculación efectiva de la niñez con malformaciones craneofaciales congénitas en los planes, programas, proyectos, estrategias y actividades deportivas, culturales y artísticas que se implementen desde la entrada en vigencia del presente Acuerdo, garantizando los ajustes razonables para su accesibilidad.

Artículo 7°. Reglamentación e implementación. La Administración Distrital reglamentará y dará inicio a la implementación del presente Acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a su entrada en vigencia.

Artículo 8°. Informes. La Administración Distrital, en cabeza de las entidades competentes, presentará anualmente ante el Concejo de Bogotá cada 19 de septiembre un informe público sobre la implementación, resultados y efectividad del presente Acuerdo.

Artículo 9°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 218 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR EL CUAL SE PROMUEVE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE ATIENDAN A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN BOGOTÁ D.C.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBJETO DE LA INICIATIVA

Promover la prestación del servicio social estudiantil obligatorio por parte de estudiantes de grados 10° y 11 en establecimientos educativos públicos y privados que atiendan a niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva en la ciudad de Bogotá D.C.

2. ANTECEDENTES

Esta iniciativa del concejal Armando Gutiérrez González y los cabildantes estudiantiles Jean Paul Suárez Luna, Manuela Verastegui Correa, Gerónimo Martínez Maya y Jerónimo Francisco Vargas Tovar, no cuenta con antecedentes y es presentada por primera vez a la Corporación para su estudio y aprobación.

3. JUSTIFICACIÓN DEL AUTOR PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE ACUERDO

3.1 Servicio Social

Se entiende por Servicio Social, la práctica con la comunidad que deben realizar los Estudiantes de Educación Básica Secundaria y Media Técnica; como aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso educativo y en procura del desarrollo personal y comunitario, lo cual les permite adquirir experiencias de las características sociales de su comunidad. Esta actividad se hace siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las pautas que se establecen entre la institución educativa, los estudiantes y las instituciones beneficiarias del servicio.

Propósito

El servicio social estudiantil obligatorio tiene como **propósito fundamental, el integrar a la vida comunitaria al educando del nivel de educación media académica o técnica, con el fin de contribuir a su formación social y cultural, a través de actividades que tiendan al desarrollo de valores**, especialmente, la solidaridad, la participación, la

protección, conservación y mejoramiento del ambiente, la dignidad, sentido del trabajo y el adecuado uso del tiempo libre.

El servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo. Por lo anterior, es requisito indispensable para la obtención del título de bachiller.

De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 39 del Decreto 1860 de 1994, es obligación de los estudiantes de educación media durante los dos grados de estudio – 10º y 11º-, prestar el servicio social estudiantil; servicio que hace parte del currículo y por ende del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo y es requisito indispensable para obtener el título de bachiller – artículos 2 y 7 Resolución 4210 de 1996-.

Objetivos según la Resolución 4210 de 1996 del Ministerio de Educación

- 1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma.**
2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social.
3. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para el mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral de problemas socialmente relevantes.
4. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de las comunidades.
5. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como derechos que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel de vida.

Criterios a Tener en Cuenta Durante el Servicio Social

1. El servicio social estudiantil deberá permitir la relación y correlación del desempeño académico de los estudiantes en las distintas áreas del conocimiento y de la formación, con su desarrollo personal y social.
2. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil que se adopten en el plan de estudios, deberán ser integrales y continuos, esto es, que brinden una sistemática y efectiva atención a los grupos poblacionales, beneficiarios de este servicio.
3. Los proyectos pedagógicos del servicio deben constituir un medio para articular las acciones educativas del establecimiento con las expresiones culturales locales,

satisfacer necesidades de desarrollo comunitario e integrar acciones adelantadas por otras organizaciones sociales, en favor de la comunidad.

4. **El servicio social atenderá prioritariamente necesidades educativas, culturales, sociales y de aprovechamiento de tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de influencia del establecimiento educativo, tales como la alfabetización, la promoción y preservación de la salud, la educación ambiental, la educación ciudadana, la organización de grupos juveniles y de prevención de factores socialmente relevantes, la recreación dirigida y el fomento de actividades físicas, prácticas e intelectuales.**

Lineamientos

1. Se realiza durante el grado décimo de Educación Media y su intensidad mínima es de 80 horas de trabajo, este es en todos los casos.
2. La intensidad del Servicio Social Obligatorio se cumplirá de manera adicional al tiempo prescrito para las actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, culturales, deportivas, y sociales de contenido educativo (Resolución 4210).
3. La prestación del Servicio Social Obligatorio es requisito indispensable para la obtención del título de Bachiller.
4. El Servicio Social deberá presentarse en su totalidad en una sola de sus modalidades y/o institución. En caso de ser suspendido, deberá reiniciar nuevamente el proceso completo. En consecuencia, no se recibirán certificaciones de horas parciales provenientes de otras instituciones.
5. El Servicio Social se debe presentar y aprobar una sola vez, es decir, si el estudiante ya presentó y aprobó su Servicio Social, no debe hacerlo nuevamente, aún si tiene que repetir el año escolar.

Finalmente, cabe destacar que en el Distrito Capital ya se presta el servicio social estudiantil obligatorio en algunas instituciones de la Administración como es en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que reglamentó este servicio a través de la resolución 078 de 2019, la cual establece en su artículo cuarto que éste puede ser prestado en el ámbito comunitario, en el ámbito recreodeportivo o en el ámbito educativo, coadyuvando así con la formación integral de los estudiantes y su desarrollo proactivo en la sociedad.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, por medio de la Resolución 334 del 16 de junio de 2014, reglamentó de igual forma el servicio social estudiantil obligatorio, promoviendo la práctica de actividades deportivas y recreativas, el aprovechamiento del tiempo libre, así como el uso adecuado de parques, zonas verdes y espacios públicos. Lo anterior en el marco de los programas y/o proyectos del IDRD.

3.2 Situación de la población con discapacidad del país en relación con la oferta educativa

La Fundación Saldarriaga Concha, junto con el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, publicó un informe donde se analiza el acceso y trayectorias completas de la población con discapacidad. Si bien el país ha avanzado en el acceso de esta población al sistema educativo, persisten retos, pues muchas veces los entornos tienen barreras que limitan su participación y aprendizaje.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) 2020 del DANE, el 82,3% de las personas con discapacidad en el país sabían leer y escribir, es decir, aproximadamente 13 puntos porcentuales menos en comparación con la población general (94,9%).

La población con discapacidad tiende a registrar un menor nivel de escolaridad que la población sin discapacidad. La ENCV 2020 identifica que el 55% de las personas que tiene alguna discapacidad ha llegado hasta básica primaria, mientras que en la población general esta cifra es de 33%. De igual forma, solo 17 de cada 100 personas con discapacidad alcanzan la educación superior (técnica, tecnológica, universitaria o posgrado), mientras que 24 de cada 100 personas sin discapacidad logran llegar a estos niveles educativos.

Frente a esto, el país, en aras de lograr la garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad y la educación inclusiva, ha tenido una transformación gradual de diferentes actores, desde el Ministerio de Educación Nacional hasta gobiernos departamentales, municipales, así como instituciones educativas. Adicionalmente, se han transformado políticas nacionales, mecanismos de financiación, organización de sistemas de apoyo, articulación entre el sector salud y educación, lo que permite implementar una oferta educativa acorde a los compromisos que el país asumió al firmar y ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad.

De esta manera, el país también ha ido resignificando el concepto de inclusión en la educación, entendida no como una propuesta diferencial para un grupo específico de personas, sino una propuesta donde se eliminan las barreras que puedan limitar la participación de niños, niñas, adolescente, jóvenes o adultos. De manera que la flexibilidad y los ajustes razonables deben estar al alcance de todos y todas, entendiendo que no es posible una educación de calidad si no es inclusiva y equitativa.

En el mismo informe se concluye que la educación debe ser un pilar esencial para el cierre de brechas y para avanzar en las metas de inclusión y equidad social, puesto que las limitaciones, desde el acceso hasta la realización de trayectorias educativas completas de la población con discapacidad, tienen efectos negativos en su desarrollo integral,

oportunidades y calidad de vida. La exclusión del sistema educativo afecta desproporcionadamente a esta población y se convierte en un círculo vicioso para la pobreza. Se reconoce que el país ha avanzado en la dotación de infraestructura, programas y docentes formados en didácticas flexibles, sin embargo, el compromiso de toda la sociedad con estas iniciativas es clave para la verdadera inclusión educativa de las personas con discapacidad.

Dentro de las recomendaciones del informe se resaltan las siguientes:

- Dado que existe una brecha importante en la asistencia escolar de las personas con y sin discapacidad (cerca de 19.7 puntos porcentuales según la ECV de 2020), y esta se relaciona con condiciones de salud y económicas, es importante adecuar los entornos escolares para que estos cuenten con los apoyos requeridos y sean accesibles, para que de esa manera se genere una verdadera inclusión educativa.
- En aras de reducir las barreras relacionadas con las estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas que impiden trayectorias educativas exitosas de la población con discapacidad, se requiere una formación docente para que los maestros brinden una educación inclusiva y de calidad.
- Es importante que se apoye a los maestros en la labor de avanzar hacia una educación inclusiva y de garanticen las condiciones que se requieren para el cierre de brechas, reconociendo además las experiencias y prácticas significativas.

3.3 Situación de la población con discapacidad auditiva en el sistema educativo de Bogotá

En Bogotá se han certificado un total de 63.055 personas con discapacidad de acuerdo con el Portal Salud Data. De estas, el 29,4% presenta discapacidad física, el 11,5% discapacidad intelectual, el 6,3% discapacidad psicosocial, el 5,5% discapacidad visual, un 5,4% discapacidad auditiva (3.422 personas) y el 0,02% sordoceguera; cabe señalar que el 41,8% de la población certificada presenta discapacidad múltiple.

En relación con el origen de la discapacidad, en su mayoría se dio por: enfermedad general (49%), alteración genética o hereditaria (17,9%), complicaciones durante el parto (7,8%), entre otras. Esta población se concentra especialmente en las localidades de Kennedy y Suba (13% cada una), Bosa (11,2%), Ciudad Bolívar y Engativá (9,5% cada una) y San Cristóbal (7,4%). La discapacidad se registra en mayor porcentaje en el género masculino (46.2%), que en el femenino (35.7%); el 5.3% no se identificó con ningún género. Según el curso de vida, las personas adultas representan el 42,4%, las personas en la etapa de la

vejez 20,3%, jóvenes con 17,8%, adolescentes el 8,3%, infancia el 7,5% y primera infancia el 3,8%²⁸.

Por otro lado, en el ámbito escolar en la ciudad de Bogotá, con corte al 31 de octubre de 2023, se reportaron un total de 731.366 estudiantes matriculados en el sector oficial de los cuales el 2,90% tienen alguna discapacidad (21.214 estudiantes). Las localidades con mayor cantidad de estudiantes son Bosa con 104.733 (14,23%); Kennedy con 102.243 (14,0%); Ciudad Bolívar con 90.391 (12,4%); Suba con 71.662 (9,8%) y Usme con 65.400 (8,9%). Estas cinco localidades concentran el 59,4% del total de la población escolar matriculada en el sector oficial del Distrito. Mientras que las localidades como Chapinero, Teusaquillo, la Candelaria y Sumapaz tienen menor proporción de población escolar, que oscila entre 812 y 3.092 estudiantes. De todos los estudiantes matriculados, el 38,7% pertenece a básica primaria, el 32,6% a básica secundaria, el 13,2% a educación media (grado décimo y once) y el 11,1% a educación preescolar. Por otro lado, el 3,1% de los estudiantes pertenece a población de jóvenes extra-edad y a adultos²⁹.

De los 731.366 estudiantes matriculados en el sector oficial, el 2,90% corresponde a población con discapacidad, es decir 21.214. De ellos, la mayoría tiene discapacidad intelectual (12.557), 1.157 tienen discapacidad auditiva y 200 sordoceguera. Ahora bien, conforme a cifras del Observatorio de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación del Distrito, se evidencia una disminución en la matrícula de estudiantes con discapacidad entre el año 2020 y 2022 como se observa en la siguiente figura:

Figura 1. Total de estudiantes con discapacidad matriculados 2019-2022

²⁸ Salud Data (s.f.). *Personas certificadas con discapacidad en Bogotá D.C.*

<https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/personas-certificadas-con-discapacidad/>

²⁹ Observatorio de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación del Distrito (2023). *Comportamiento de la matrícula oficial octubre 2023*.



Fuente: Secretaría de Educación

Adicionalmente, al revisar la tasa de deserción escolar en el Distrito, se observa que esta ha aumentado a partir del año 2017, cifra que se ubicó en 1,62%. En el año 2022 esta cifra aumentó a 3,48%. Sin embargo, no se cuenta con cifras de deserción en población con discapacidad.

Figura 2. Tasa de deserción escolar Distrito

Tipo de institución				
Año	Distrital	Administración	Contratada	Total
2022	3,59 %	1,71 %	2,06 %	3,48 %
2021	1,34 %	0,52 %	0,77 %	1,29 %
2020	0,47 %	0,33 %	0,34 %	0,46 %
2019	1,66 %	0,57 %	0,66 %	1,60 %
2018	1,74 %	0,27 %	0,51 %	1,65 %
2017	1,69 %	0,69 %	0,62 %	1,62 %

Aunque no se conoce en detalle cuánta población en edad escolar con discapacidad deserta del sistema educativo, es evidente que enfrentan distintas dificultades. Una de ellas es que existe una escasez de intérpretes de lengua de señas cualificados, lo que dificulta la atención educativa de los estudiantes sordos en algunos colegios. También existen barreras en la comunicación, debido a la falta de comprensión de la lengua de señas por parte de algunos docentes y compañeros de clase, que puede generar dificultades en el proceso de aprendizaje y la interacción social.

El hecho de presentar una discapacidad auditiva o un impedimento para oír afecta también el desarrollo lingüístico y comunicativo, lo que genera dificultad para que la persona se integre en el ámbito escolar, laboral y social. No obstante, es importante desmentir un mito asociado a la discapacidad auditiva y es que se suele pensar que las personas sordas son sordomudas. De hecho, las personas con discapacidad auditiva no son mudas, ya que tienen la capacidad para articular y emitir sonidos y no tienen problema en su aparato fonador. Con una intervención adecuada, pueden conseguir hablar de forma oral. El hecho de que no usen la lengua oral o prefieran comunicarse a través de lengua de señas no implica que sean mudas³⁰.

Dado que las dificultades en la comunicación son uno de los principales problemas entre los alumnos sordos, es clave el uso de la lengua de señas. La atención educativa de los alumnos y alumnas sordos en el aula ordinaria necesita de un código de comunicación adecuado. De esa manera, la lengua de señas es fundamental en la educación de niños y niñas sordos, en las familias y la comunidad en su conjunto. El servicio de intérpretes al interior de los establecimientos educativos es clave para facilitar la comunicación al interior del aula.

También en la escuela se deberían asumir modelos o enfoques que consideren a la población sorda no desde una mirada clínica por lo que les falta (la audición), sino por sus propias capacidades, lengua propia, su historia y cultura, que deben ser reconocidos y aceptados en una sociedad diversa. En esa misma línea, algunos autores proponen medidas educativas para eliminar las barreras de comunicación de los alumnos con discapacidad auditiva en el ámbito escolar:

- La organización de apoyos.
- El uso de ayudas técnicas para la audición y la comunicación.
- La intervención de profesionales especializados.
- La adaptación del currículo cuando se requiera.

³⁰ Gutiérrez, Agüero, A. (2021). *Barreras en el ámbito escolar del alumnado con discapacidad auditiva: propuesta de sensibilización*.

<https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/22327/GutierrezAg%C3%BCeroAngela.pdf?sequence=1>

- El uso de estrategias didácticas pertinentes.

3.4 Origen e historia de la lengua de señas

Según la Federación Mundial de Sordos, más del 80% de personas sordas viven en países en desarrollo y se utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. Según la ONU "las lenguas de señas son idiomas naturales a todos los efectos, estructuralmente distintos de las lenguas habladas. Existe también un lenguaje de señas internacional, utilizado por las personas sordas en reuniones internacionales y, de manera informal, cuando viajan y socializan. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce y promueve el uso de las lenguas de señas, y **establece que tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a los estados parte a que faciliten el aprendizaje de la lengua de señas**".

En los niños, casi el 60% de la pérdida de audición se debe a causas evitables. Según la Organización Mundial de la Salud "muchas de las causas que conducen a una pérdida de la audición pueden evitarse mediante estrategias de salud pública e intervenciones clínicas que se realicen a lo largo del curso de la vida". **Para reducir la pérdida de audición a cualquier edad pueden aplicarse estrategias eficaces como: la vacunación, unas buenas prácticas de atención materna y la detección y el tratamiento de afecciones comunes del oído.**

La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Una lengua que, como cualquier otra, posee y cumple todas las leyes lingüísticas y se aprende dentro de la comunidad de usuarios a quienes facilita resolver todas las necesidades comunicativas y no comunicativas propias del ser humano, a nivel social y cultural. Existen muchos y excelentes trabajos publicados por diferentes especialistas sobre la lengua de señas que demuestran científicamente estas realidades.

La historia de las lenguas de señas se remonta a siglos atrás, con un origen fascinante. Se cree que estas lenguas surgieron de manera natural en comunidades de personas sordas en todo el mundo. Sin embargo, la verdadera evolución y formalización de las lenguas de señas comenzó en el siglo XVIII con la creación de la primera escuela para sordos en París por parte de Charles-Michel de l'Épée, un clérigo francés, quien desarrolló un método visual de enseñanza que revolucionó los paradigmas de la educación para personas sordas.

El uso de la lengua de señas se dio a conocer desde 1960 cuando William Stokoe, demostró que se pueden expresar pensamientos complejos e ideas abstractas. Sin embargo, en la antigüedad se consideraba una dificultad nacer sordo, pues estas personas eran tratadas de manera despectiva cuando trataban de comunicarse por señas.

Actualmente existen numerosas lenguas de señas en todo el mundo, el Lenguaje de Señas Internacional (LSI) o la Lengua de Señas Americana (ASL) que son algunas de las más conocidas o ampliamente utilizadas.

Lengua de Señas en Colombia

La lengua de señas colombiana es la lengua utilizada por la comunidad sorda de nuestro país. Fue reconocida oficialmente en el año 1996, durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, mediante la Ley 324. El artículo 2 reza así: **"El Estado colombiano reconoce la lengua de señas como propia de la comunidad sorda del país"**. Esta lengua se caracteriza por ser visual y corporal, es decir la comunicación se establece con el cuerpo en un espacio determinado.

Pero antes de su reconocimiento oficial, desde la década de los ochenta existieron iniciativas que promovieron su visibilización. "Desde 1984 la comunidad sorda colombiana empezó a preocuparse por el estudio, divulgación y enseñanza de la lengua, al igual que de la situación de las personas sordas en el medio. Con el tiempo se fue configurando un grupo de investigación en torno a lo que inicialmente se llamó, desde la perspectiva de la comunidad sorda, el lenguaje manual colombiano, denominación que privilegiaba el papel de las manos en la comunicación", como lo señala el Instituto Caro y Cuervo.

Antes de la promulgación de la ley se divulgaron cartillas de la Federación Nacional de Sordos de Colombia (Fenascol).

La Lengua de Señas colombiana hace parte de las lenguas nativas del país

Fue declarada patrimonio inmaterial, cultural y lingüístico nacional desde febrero de 2019 de acuerdo con la página del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

En nuestro país, de acuerdo con el Instituto Caro y Cuervo, existen actualmente alrededor de 70 lenguas: el español, 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, la lengua romaní y la lengua de señas colombiana (LSC). Esta declaratoria garantiza su preservación y divulgación a través de políticas públicas.

3.5 Instituciones educativas del Distrito que atienden población con discapacidad y algunos casos exitosos a nivel distrital

En Bogotá existen algunas instituciones que destacan por su enfoque en la atención a estudiantes con discapacidades, tanto a nivel público como privado. Un ejemplo es el *Colegio Rodrigo Lara Bonilla*, que ofrece servicios educativos especializados para estudiantes con discapacidades intelectuales y visuales, adaptando su oferta a las

necesidades particulares de estos niños y niñas³¹. De manera similar, el *Instituto El Rosalito*, una institución privada, proporciona formación técnica y certificación en desarrollo humano y trabajo para personas con discapacidad cognitiva, lo que fomenta su inclusión en el ámbito laboral ³². Estas instituciones evidencian que, aunque limitadas en número, existen modelos educativos enfocados en ofrecer una educación más inclusiva.

Sin embargo, la oferta educativa especializada no siempre responde a las necesidades de todos los tipos de discapacidad. Solo un puñado de colegios en la ciudad, como el *Colegio San Francisco* en Ciudad Bolívar, proporcionan atención integral a estudiantes con discapacidades auditivas. Este colegio es reconocido por su trabajo en la enseñanza bilingüe, utilizando la Lengua de Señas Colombiana junto con intérpretes y mediadores pedagógicos, demostrando que es posible adaptar la educación pública para atender estas necesidades ³³.

A pesar de estos esfuerzos, es evidente que la infraestructura educativa de la ciudad aún es insuficiente para cubrir la diversidad de discapacidades y necesidades que presentan estos estudiantes. Tanto las instituciones públicas como las privadas deben seguir colaborando y expandiendo sus ofertas para garantizar que todos los niños y niñas, independientemente de su situación, puedan acceder a una educación inclusiva y de calidad.

De otro lado, en Bogotá, algunos casos de éxito en la inclusión educativa destacan ejemplos de cómo se pueden superar barreras para garantizar el acceso a una educación de calidad para los niños y niñas con discapacidad. Uno de estos casos es el *Colegio Rodrigo Lara Bonilla*, reconocido por su enfoque en la atención de estudiantes con discapacidades visuales e intelectuales. Este colegio ha logrado adaptar su currículum para responder a las necesidades de estos estudiantes, utilizando material didáctico accesible, docentes especializados y un enfoque pedagógico inclusivo. Los logros de este colegio demuestran cómo la formación adecuada del personal y la adaptación curricular son claves para mejorar los resultados académicos y sociales de los estudiantes.

Otro ejemplo destacado es el *Colegio San Francisco en Ciudad Bolívar*, que ha sido pionero en la enseñanza bilingüe para niños sordos. Este colegio utiliza la lengua de señas colombiana junto con el español, facilitando la comunicación y el aprendizaje de los estudiantes sordos. Además, cuentan con intérpretes y mediadores pedagógicos para garantizar que los alumnos reciban una educación en igualdad de condiciones. El modelo de este colegio ha sido reconocido por su capacidad para integrar a estudiantes sordos en

³¹ Educación Inclusiva - <https://www.colegiorodrigolarabonilla.edu.co/crlb/servicio-educativo/neep/>

³² Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano - Educación especial <https://educacionespecialerosalito.edu.co/>

³³ El mejor Colegio de Bogotá para niños con discapacidad auditiva - Alcaldía Mayor de Bogotá

el sistema educativo regular, sin que su discapacidad sea una barrera para su desarrollo académico.

En el ámbito privado, el *Instituto El Rosalito* ha sido un referente en la formación técnica de personas con discapacidad cognitiva. Este centro ha desarrollado programas que no solo capacitan a los estudiantes en habilidades técnicas, sino que también los preparan para integrarse al mercado laboral, brindándoles oportunidades de trabajo y autonomía. El éxito de esta institución radica en su capacidad para formar a sus estudiantes en entornos reales de trabajo, lo que les permite enfrentar los desafíos del mundo laboral con mayor seguridad y preparación.

Por otro lado, La Universidad Nacional de Colombia en el año 2023 desarrolló un prototipo virtual de aprendizaje para personas con discapacidad auditiva, con el objetivo de definir un modelo de diseño instruccional para sistemas e-learning que permita a las personas con discapacidad auditiva, tener acceso a los datos, la información y el conocimiento, presentados para navegar por entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje ³⁴.

Estos casos reflejan que, aunque los desafíos persisten, es posible lograr una educación inclusiva efectiva a través de enfoques innovadores, la adaptación de currículos y el compromiso de instituciones tanto públicas como privadas. Estas experiencias demuestran que el esfuerzo conjunto entre la sociedad civil, las instituciones educativas y el gobierno puede abrir puertas a un futuro más inclusivo para todos los niños y niñas sin importar su condición.

3.6 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta iniciativa se alinea con el **Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 denominado Educación de Calidad**. Este objetivo busca no solo garantizar la educación primaria y secundaria gratuita para todos los niños y niñas al 2030, sino también proporcionar la igualdad de acceso a una formación profesional asequible, eliminar las disparidades de género y riqueza y lograr un acceso universal a una educación superior de calidad. La educación de calidad permite reducir las desigualdades, romper el ciclo de pobreza y fomentar sociedades más pacíficas³⁵.

Meta 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

³⁴ Universidad Nacional de Colombia - Desarrollan prototipo virtual de aprendizaje para personas con discapacidad auditiva

³⁵ ONU (S.F.) *Objetivos y metas de desarrollo sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>

Meta 4.7 Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

También aporta al cumplimiento del **ODS 10 Reducción de las desigualdades**. Para reducir estas desigualdades es necesario distribuir de manera equitativa los recursos, invertir en la enseñanza y el desarrollo de capacidades, implementar medidas de protección social, luchar contra la discriminación, entre otros.

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

3.7 Plan Distrital de Desarrollo

Con el presente proyecto de acuerdo, se busca aportar al cumplimiento de la siguiente meta del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, que hace parte del objetivo 3 Bogotá Confía en su Bienestar y el Programa 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano:

“Garantizar que el 100% de los estudiantes de básica y media reciben el servicio educativo oportunamente, incluyendo los estudiantes sujetos de especial protección constitucional, como la población con necesidades educativas especiales, estudiantes víctimas del conflicto armado o de violencia intrafamiliar, migrantes, entre otros”.

4. MARCO JURÍDICO

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 26.

- 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser*

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Artículo 24. Educación

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:

- a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad(...);*
- b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;*
- c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;*
- d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;*
- e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.*

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

MARCO NORMATIVO NACIONAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Citando a la Constitución Política de la República de Colombia 1991 en los artículos 13, 47 y 67 se promulga que:

ARTÍCULO 13. *Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.*

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

ARTÍCULO 47. *El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.*

ARTÍCULO 67. *La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.*

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

(...)

LEYES

LEY 115 DE 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”.

Artículo 46. Integración con el servicio educativo. *La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo.*

Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos.

(...)

Artículo 97. *Servicio social obligatorio. Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio durante los dos (2) grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.*

LEY 319 DE 1996 “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988

Artículo 18.

Protección de los minusválidos

Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a:

(...)

c) Incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo;

LEY 324 DE 1996 “Por el cual se crean algunas normas a favor de la población sorda”

Artículo 6. *El Estado garantizará que en forma progresiva en instituciones educativas y formales y no formales, se creen diferentes instancias de estudio, acción y seguimiento que ofrezcan apoyo técnico-pedagógico, para esta población, con el fin de asegurar la atención especializada para la integración de estos alumnos en igualdad de condiciones.*

De igual manera el Estado creará Centros de habilitación laboral y profesional para la población sorda.

LEY 361 DE 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”

Artículo 10. *El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación Pública garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional*

y técnico para las personas con limitación, quienes para ellos dispondrán de una formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales.

Artículo 11. *En concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 1994, nadie podrá ser discriminado por razón de su limitación, para acceder al servicio de educación ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier nivel de formación.*

Para estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, el Gobierno Nacional promoverá la integración de la población con limitación a las aulas regulares en establecimiento educativos que se organicen directamente o por convenio con entidades gubernamentales y no gubernamentales, para lo cual se adoptarán las acciones pedagógicas necesarias para integrar académica y socialmente a los limitados, en el marco de un Proyecto Educativo Institucional.

(...)

LEY 982 DE 2005 “Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones”

Artículo 3°. *El Estado apoyará las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la Lengua de Señas en Colombia al igual que otras formas de comunicación de la población sorda y sordociega, para tal efecto promoverá la creación de escuelas de formación de intérpretes para sordos y sordociegos y la incorporación de la enseñanza de la Lengua de Señas en Colombia en los programas de formación docente especializada en sordos y sordociegos.*

Artículo 4°. *El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes y guías intérprete idóneos para que sea este un medio a través del cual las personas sordas y sordociegas puedan acceder a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución. Para ello el Estado organizará a través de entidades oficiales y a través de convenios con asociaciones de intérpretes y asociaciones de sordos la presencia de intérpretes y guías intérpretes, para el acceso a los servicios mencionados.*

(...)

LEY 1346 DE 2009 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”

Artículo 24. Educación.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

(...)

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

(...)

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que

estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

LEY 1618 DE 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”

Artículo 11. Derecho a la educación.

2. Las entidades territoriales certificadas en educación deberán:

b) Fomentar en sus establecimientos educativos una cultura inclusiva de respeto al derecho a una educación de calidad para las personas con discapacidad que desarrolle sus competencias básicas y ciudadanas.

d) Orientar y acompañar a sus establecimientos educativos para identificar recursos en su entorno y ajustar su organización escolar y su proyecto pedagógico para superar las barreras que impiden el acceso y la permanencia con calidad para las personas con discapacidad, en el marco de la inclusión.

j) Proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad. Estos servicios incluyen, entre otros: intérpretes, guías-intérpretes, modelos lingüísticos, personal de apoyo, personal en el aula y en la institución.

DECRETOS NACIONALES

DECRETO 1860 DE 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales”

Artículo 39. Servicio social estudiantil. *El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media tiene el propósito principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social.*

Los temas y objetivos del servicio social estudiantil serán definidos en el proyecto educativo institucional.

Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por el establecimiento en forma conjunta con entidades gubernamentales y no gubernamentales, especializadas en la atención a las familias y comunidades.

(...)

DECRETO 366 DE 2009 “Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva”

Artículo 2°. Principios generales. *En el marco de los derechos fundamentales, la población que presenta barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y la que posee capacidad o talento excepcional tiene derecho a recibir una educación pertinente y sin ningún tipo de discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera para que sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen plenamente.*

(...)

Artículo 3°. Responsabilidades de las entidades territoriales certificadas. *Cada entidad territorial certificada, a través de la Secretaría de Educación, organizará la oferta para la población con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales, para lo cual debe:*

(...)

5. Prestar asistencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos que reportan matrícula de población con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales en lo relacionado con el ajuste de las diversas áreas de la gestión escolar, para garantizar una adecuada atención a los estudiantes allí matriculados y ofrecerles los apoyos requeridos.

(...)

8. Coordinar y concertar con otros sectores, entidades, instituciones o programas especializados la prestación de los servicios, con el fin de garantizar a los estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales, los apoyos y recursos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, terapéuticos, administrativos y financieros.

(...)

DECRETO 1075 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”

ARTÍCULO 2.3.3.1.6.4. Servicio social estudiantil. *El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media tiene el propósito principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social.*

Los temas y objetivos del servicio social estudiantil serán definidos en el proyecto educativo institucional.

Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por el establecimiento en forma conjunta con entidades gubernamentales y no gubernamentales, especializadas en la atención a las familias y comunidades,

El Ministerio de Educación Nacional reglamentará los demás aspectos del servicio social estudiantil que faciliten su eficiente organización y funcionamiento.

DECRETO 1421 DE 2017 “Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”

Artículo 2.3.3.5.2.3.3 Oferta educativa pertinente para personas con discapacidad. *Para garantizar una educación pertinente y de calidad, las entidades territoriales certificadas organizarán la oferta educativa que responda a las características de las personas con discapacidad identificadas en su territorio, siguiendo las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, así:*

1. Oferta General: *esta oferta corresponde a la ofrecida para todos los estudiantes del país, dentro de la cual tendrán acceso todos los estudiantes con discapacidad, quienes, de igual manera que opera en el sistema general, deberán ser remitidos al establecimiento educativo oficial o contratado más cercano a su lugar de re-sidencia, y al grado acorde a su edad cronológica. Para cada uno de los casos y conforme a las características del estudiante, contará con los ajustes razonables definidos en el PIAR, dentro de los espacios, ambientes y actividades escolares, con los demás estudiantes. En el evento que no sea posible cerca al lugar de resi-dencia, por algún motivo justificado, se garantizarán los servicios de transporte y alimentación, si es el caso.*

2. Oferta bilingüe bicultural para población con discapacidad auditiva: *la Modalidad Bilingüe - Bicultural es aquella cuyo proceso de enseñanza - aprendizaje será en la Lengua de Señas Colombiana - Español como segunda lengua y consiste en la destinación de establecimientos educativos regulares, en los que se contarán con aulas paralelas y docentes bilingües que impartan la formación en lengua de señas, y otros apoyos tecnológicos, didácticos y lingüísticos requeridos, entre los que están los intérpretes de Lengua de Señas Colombiana y modelos lingüísticos. Para tal efecto, las entidades podrán*

centralizar esta oferta educativa en uno o va-rios establecimientos educativos y garantizar el transporte para aquellos a quienes les implique desplazarse lejos de su lugar de residencia.

(...)

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 4210 DE SEPTIEMBRE 12 DE 1996 del MEN “Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio”

Esta resolución del Ministerio de Educación Nacional establece los aspectos del servicio social estudiantil que deben ser tenidos en cuenta por parte de los establecimientos educativos estatales y privados.

Artículo 3°. El propósito principal del servicio social estudiantil obligatorio establecido en el artículo 39° del Decreto 1860 de 1994, se desarrollará dentro del proyecto educativo institucional, de tal manera que se atiendan debidamente los siguientes objetivos generales:

- 1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la comunidad, para que, adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma.*
- 2. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de las comunidades.*

(...)

Artículo 4°. Con el fin de facilitar la determinación de los objetivos específicos, los temas, las actividades y los procedimientos que estructuren y organicen la prestación del servicio social estudiantil obligatorio, los establecimientos educativos, al adoptar o modificar su proyecto educativo institucional, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

4. El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, sociales y de aprovechamiento de tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de influencia del establecimiento educativo, tales como la alfabetización, la promoción y preservación de la salud, la educación ambiental, la educación ciudadana, la organización de grupos juveniles y de prevención de factores socialmente relevantes, la recreación dirigida y el fomento de actividades físicas, prácticas e intelectuales.

(...)

Artículo 5°. Los establecimientos educativos podrán establecer convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que adelanten o pretendan adelantar actividades de carácter familiar y comunitario, cuyo objeto sea afin con los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil obligatorio, definidos en el respectivo proyecto educativo institucional.

Deberán además, brindar los soportes técnico-pedagógicos y administrativos necesarios que requieran los educandos para prestar el servicio social estudiantil obligatorio, en las condiciones y requerimientos determinados en cada uno de los proyectos pedagógicos que defina el mismo establecimiento educativo, de acuerdo con lo dispuesto en esta resolución.

Establecerán igualmente, mecanismos administrativos y pedagógicos para que los docentes del respectivo establecimiento educativo, puedan atender las tareas y funciones de asesoría, orientación y asistencia a los educandos, en el desarrollo de dichos proyectos.

Artículo 8°. El Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación departamentales y distritales, darán las orientaciones e instrucciones que sean necesarias, mediante circulares, documentos, textos y materiales de orientación y difusión, a nivel nacional y en sus respectivos territorios, para el cabal desarrollo del servicio social estudiantil, sin detrimento de la autonomía escolar.

Las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales o los organismos que hagan sus veces, a través de la dependencia que atienda los aspectos pedagógicos del servicio público educativo en la respectiva jurisdicción, prestarán asesoría a los establecimientos educativos en la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución.

DECRETOS DISTRITALES

DECRETO 089 DE 2023 “Por medio del cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para Bogotá D.C. 2023-2024”

Artículo 10. Eje Uno. Garantía de Derecho para la inclusión.

Componente 2: Inclusión y equidad en educación

El componente de inclusión y equidad en educación se fundamenta en que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, en la zona urbana, rural y dispersa de Bogotá, en cumplimiento de las trayectorias educativas completas, teniendo en cuenta el enfoque diferencial e interseccional, en condiciones de acceso, accesibilidad, permanencia, participación, progreso, calidad, pertinencia y oportunidad; en línea con el proyecto de vida de la persona con discapacidad, en observancia del principio de autonomía.

Para el goce efectivo del derecho a la educación se deberá garantizar:

c) El sistema de apoyos (docentes de apoyo pedagógico, intérpretes de lengua de señas, modelos lingüísticos, guías intérpretes, mediadores pedagógicos y comunicativos, y, auxiliares de enfermería, entre otros) para posibilitar el acceso, accesibilidad, permanencia, participación y progreso de los y las estudiantes con discapacidad.

(...)

ACUERDOS DISTRITALES

ACUERDO 55 DE 2002 “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio social estudiantil obligatorio en el Distrito Capital”

Artículo 1°. *En cada uno de los Establecimientos Educativos de Bogotá, D.C. que cuenten con grados 10° y 11° se implementará un Plan de Trabajo en el Servicio Social Estudiantil Obligatorio, orientado a ofrecer a la ciudadanía acciones culturales recreativas, lúdicas, deportivas, educativas, de acuerdo a los parámetros definidos en el artículo 39 de Decreto 1860 de 1994 y en la Resolución 4210 de 1996.*

Parágrafo. *El Servicio Social Estudiantil Obligatorio en el Distrito, tendrá como beneficiarios principales a las comunidades de escasos recursos, particularmente de estratos 1 y 2.*

Artículo 2°. *Las Entidades Distritales de nivel central y descentralizado prestarán la asesoría y el acompañamiento requeridos para la buena prestación del servicio.*

ACUERDO 282 DEL 2007 “Por medio del cual se dictan disposiciones para la prestación del Servicio Social Estudiantil en el Distrito Capital”

Artículo 1. *Desarrollense en los programas y proyectos de las entidades que forman parte de la Administración Distrital, un espacio para que los estudiantes de los grados décimo y once de las instituciones educativas estatales y privadas del Distrito, presten el servicio social estudiantil obligatorio, en los términos establecidos en la Resolución 4210 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional o la norma que la modifique, sustituya o adicione, respetando la autonomía institucional.*

Parágrafo. *Los estudiantes de los grados décimo y once, apoyarán los diferentes espacios de participación ciudadana existentes en las localidades, para fortalecer las prácticas democráticas en la ciudad desde el entorno distrital y local. Adicionalmente, en desarrollo del servicio social de que se trata, se prestará apoyo a poblaciones en condiciones de discapacidad.*

ACUERDO 927 DEL 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

OBJETIVO 3 BOGOTÁ CONFÍA EN SU POTENCIAL

Programa 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano.

(...)

Bajo el mismo principio de inclusión, se fortalecerá la oferta educativa para población con discapacidades, de manera que se garantice una educación de calidad en el momento oportuno. Como una forma de fortalecer ambientes inclusivos se abrirán espacios de formación en lengua de señas y braille que podrán beneficiar a la comunidad educativa en general posibilitando una mejor comunicación. Con este fin, se requieren los correspondientes análisis de la implementación del Decreto 1421 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, así como, el fortalecimiento de los procesos de educación inclusiva a partir de estrategias pedagógicas como el Diseño Universal para el Aprendizaje, para garantizar las trayectorias educativas completas de todas las personas con discapacidad que se encuentran en el sistema educativo oficial.

(...)

JURISPRUDENCIA

Sentencia T-051 de 2011 de la Corte Constitucional de Colombia

En este pronunciamiento, la Corte Constitucional subraya la necesidad de garantizar el derecho a la educación inclusiva para las personas sordas, quienes gozan de especial protección constitucional por su situación de discapacidad.

Allí se evidenció que la oferta de un profesor itinerante, que sólo podría asistir a los estudiantes sordos durante unas pocas horas a la semana, resulta insuficiente para garantizar su acceso equitativo a la educación, por lo que la Corte ordena adoptar medidas concretas de planificación que aseguren el acceso continuo y efectivo a los apoyos educativos necesarios, como los intérpretes de lengua de señas, previstos en el Decreto 366 de 2009.

En este contexto, el Servicio Social Estudiantil Obligatorio cobra especial relevancia como una herramienta fundamental para apoyar pedagógicamente a los docentes en la atención a esta población, ofreciendo un recurso adicional que permite una atención más personalizada y continua de manera gratuita. Este servicio no solo contribuye a cubrir las deficiencias del sistema educativo en materia de inclusión, sino que fortalece el derecho a

la educación de las personas con discapacidad auditiva, promoviendo una verdadera integración y equidad en el entorno escolar, conforme a los mandatos constitucionales.

Sentencia T-463 de 2022 Corte Constitucional de Colombia

Se señala que el derecho a la educación debe ser asegurado por el estado, la sociedad y la familia, considerando la inclusión como principio y regla general. Ello exige al sistema de educación asegurar el acceso, la permanencia y el egreso de todos los alumnos cualquiera que sea su diversidad funcional o situación de discapacidad. Lo anterior implica adoptar medidas necesarias y razonables para que el estudiante, independientemente de la discapacidad o la dificultad de aprendizaje, acceda y permanezca en el Sistema Educativo Convencional. Es obligatoria la realización de ajustes razonables y su negación es inconstitucional.

5. IMPACTO FISCAL

De conformidad con el Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el análisis del impacto fiscal en cualquier proyecto de acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios debe hacerse explícito y ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo, asimismo deberá estar incluido de manera expresa en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite. La presente iniciativa no genera impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, pues no se incrementará el presupuesto del Distrito ni generará una nueva fuente de financiación.

No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007 puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en óbice para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa.

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

En concordancia con las disposiciones legales vigentes, en la Constitución Política de Colombia en su Artículo 313 se establece que corresponde a los Concejos: *“4. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio”*.

En las atribuciones conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993 – Estatuto Orgánico de Bogotá en su artículo 12, le corresponde al Cabildo Distrital: *“1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito (...)”*.

Es así como este Concejo tiene las competencias para presentar este proyecto de acuerdo como iniciativa propia de los concejales, para estudiarlo y aprobarlo, ya que no hace parte de las temáticas o propuestas que sólo pueden ser dictadas o reformadas a iniciativa de la alcaldesa mayor.

Bibliografía

- Caro y Cuervo, A. (n.d.). *Lenguas de señas colombiana: Introducción*. Recuperado de <https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/contenido/Lenguas-de-senas-colombiana/introduccion>
- Colegio Francisco. (1996). *Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996: Servicio social estudiantil*. Recuperado de <https://colfrancisco.edu.co/web/wp-content/uploads/2020/02/Resoluci%C3%B3n-4210-12-sept-1996-Servicio-Social-Estud.pdf>
- Colegio Francisco. (n.d.). *Servicio social estudiantil obligatorio*. Recuperado de <https://colfrancisco.edu.co/web/servicio-social-estudiantil-obligatorio/>
- Colegio Nicolás Esguerra. (2018). *Reglamento de servicio social*. Recuperado de <https://colegionicolasesguerra.edu.co/images/documentos/ReglamentoSS18.pdf>
- Cultura Sorda. (n.d.). *Lengua de señas*. Recuperado de <https://cultura-sorda.org/lengua-de-senas/>
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). *Servicio social*. Recuperado de https://www.mineduacion.gov.co/1621/articles-127852_archivo_pdf_Servicio_Social.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (1996). *Resolución 4210 de septiembre 12 de 1996*. Recuperado de <https://www.mineduacion.gov.co/portal/normativa/Resoluciones/96032:Resolucion-4210-de-Septiembre-12-de-1996#:~:text=Por%20la%20cual%20se%20establece,del%20servicio%20social%20estudiantil%20obligatorio>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (n.d.). *TIC sin barreras: Lengua de señas colombiana*. Recuperado de <https://ticsinbarreras.mintic.gov.co/791/w3-article-280683.html>
- Saldarriaga Concha. (2023). *Educación inclusiva para personas con discapacidad: Realidades y retos*. https://www.saldarriagaconcha.org/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-Marzo-EducacionCOParaPersonasConDiscapacidad_RealidadesyRetos-2.pdf
- Señal Colombia. (n.d.). *Lengua de señas: Datos*. Recuperado de <https://www.senalcolombia.tv/general/lengua-senas-datos>
- Universidad Francisco de Paula Santander. (n.d.). *¿Conoces sobre la lengua de señas?* Recuperado de <https://fup.edu.co/conoces-sobre-el-lengua-de-senas/>

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Concejal de Bogotá

Partido Liberal

Anexos: N/A

Copia: N/A

Elaboró: Diana Riveros, asesora; Kevin Jiménez, pasante; Andrea Camelo, judicante

Revisó: Diana Riveros, asesora

PROYECTO DE ACUERDO NO 218 DE 2025

PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO No. ____ DE 2025

“POR EL CUAL SE PROMUEVE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE ATIENDAN A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN BOGOTÁ D.C.”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 313 de la Constitución Política y los numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º. OBJETO. Promover la prestación del servicio social estudiantil obligatorio para estudiantes de grados décimo y once en los establecimientos educativos públicos y privados de la ciudad de Bogotá que atiendan a niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva en la ciudad de Bogotá D.C.

Parágrafo. Entiéndase población con discapacidad auditiva aquella que presenta, de manera permanente, deficiencias en las funciones sensoriales para la percepción de sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad; y que como consecuencia, tiene diferentes grados de dificultad para la comunicación oral. Dentro de esta categoría están incluidas las personas con sordera e hipoacusia.

ARTÍCULO 2º. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO. La Secretaría Distrital de Educación, en el marco de sus competencias, definirá los establecimientos educativos propuestos para el desarrollo del servicio social y los roles a desarrollar por parte de los estudiantes de grado décimo y once que podrán ser de apoyo pedagógico o administrativo.

ARTÍCULO 3º. CONVENIOS. Para efectos de lo dispuesto en el presente acuerdo, la Secretaría Distrital de Educación del Distrito podrá efectuar convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que brinden asistencia técnica a los colegios públicos y privados de la ciudad de Bogotá en temas atinentes al abordaje de población estudiantil con discapacidad auditiva y/o sobre la lengua de señas para la prestación del servicio social estudiantil obligatorio.

ARTÍCULO 4º. CAPACITACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS. La Secretaría de Educación del Distrito establecerá alianzas estratégicas para brindar capacitación al interior de los establecimientos educativos públicos y privados en Lengua de Señas Colombiana a estudiantes interesados en prestar el servicio social estudiantil obligatorio con población con discapacidad auditiva.

ARTÍCULO 5. PUBLICIDAD. La Secretaría de Educación del Distrito publicará por medios físicos y virtuales la información sobre la oferta del servicio social obligatorio que pueden desarrollar los estudiantes de grado décimo y once en establecimientos educativos públicos o privados que atiendan a niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva.

ARTÍCULO 6º. REGLAMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. Las actividades a desarrollar a través del servicio social estudiantil obligatorio, serán reglamentadas mediante los procedimientos administrativos a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito dentro de los seis (6) meses siguientes de la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8. VIGENCIA. Este Acuerdo rige desde el momento de su publicación y deroga cualquier Acuerdo que le sea contrario.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 219 DE 2025**PRIMER DEBATE*****"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA REGLAMENTAR LA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO Y AEROSOLAS EN BOGOTÁ DE ACUERDO CON LA LEY 2354 DE 2024"*****1. OBJETO DEL PROYECTO**

El objeto del presente Acuerdo es adoptar las disposiciones de la Ley 2354 de 2024 en cuanto a la reglamentación de los espacios 100% libres de humo y aerosoles, para la adecuada inspección y vigilancia de la normatividad por parte de la Administración Distrital, en aras de proteger la salud pública de la población general.

2. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa no cuenta con antecedentes y es presentada por primera vez para su estudio y aprobación a la Corporación, teniendo en cuenta que el 9 de mayo del 2024 fue publicada y entró en vigencia la Ley 2354 de 2024 *"Por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Ley 1335 de 2009 y se dictan otras disposiciones"*.

En el Concejo de Bogotá se han radicado iniciativas relacionadas con los vapeadores así:

- Proyecto de Acuerdo 026 de 2024 *"Por el cual se dictan lineamientos para crear "zonas 100% libre de vapor" como una estrategia para desestimular el uso de vapeadores y/o cigarrillos electrónicos y similares en Bogotá D.C.*

De igual forma, se cuenta con un Acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá D.C. y sancionado por la Alcaldía de Bogotá:

- Acuerdo 817 de 2021 *"Por el cual se adoptan medidas de protección de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y población no fumadora a través de la prevención del consumo de cigarrillo, productos de tabaco, derivados, sucedáneos o imitadores como sistemas electrónicos de administración de nicotina - SEAN, sistemas similares sin nicotina- SSSN y productos de tabaco calentado - PTC y la exposición al humo de tabaco y vapor en el distrito capital y se dictan otras disposiciones"*.

Si bien dichas iniciativas buscan adoptar medidas para los espacios 100% libres de humo y aerosoles, estas no contemplan de forma integral las disposiciones de la Ley 2354 de 2024 ni reglamentan lo allí dispuesto.

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**1. Caracterización del consumo de vapeadores en Bogotá D.C.**

El tercer estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C. realizado por la Secretaría Distrital de Salud, en convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito - UNODC, arrojó que, para la prevalencia

de vida, el consumo de solo cigarrillo fue de 43.14%; el consumo de solo vapeadores o dispositivos de calentamiento de tabaco de 1.11% y la prevalencia de quienes realizan ambos consumos fue de 7.25%. Por lo general, el consumo de estas sustancias en cualquiera de sus presentaciones fue más común en los hombres que en las mujeres (ver tabla 11)³⁶.

Tabla 11 Consumo de tabaco por sexo - prevalencia de vida (%)

Método de consumo de tabaco	Prevalencia de Vida		
	Hombre	Mujer	Total
Sólo cigarrillo	50.27	36.40	43.14
Sólo dispositivo de calentamiento de tabaco o vapeador	1.13	1.09	1.11
Ambos	10.00	4.63	7.25
Nunca	38.57	57.85	48.47
No responde	0.03	0.03	0.03

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2022).

Respecto a la prevalencia de vida, la diferencia por sexo es de 19.25 puntos porcentuales; para la prevalencia por año, la diferencia es de 13 puntos porcentuales; y en el mes de 11.27 puntos porcentuales, como se observa en la tabla 12.

Tabla 12 Indicadores de consumo de tabaco* según sexo

Sexo	Prevalencia (%)			Incidencia (%)	
	Vida	Año	Mes	Año	Mes
Hombres	60.27	25.53	21.39	1.11	0.40
Mujeres	41.02	12.53	10.12	0.38	0.09
Total	50.39	18.87	15.62	0.67	0.23

*Incluye cigarrillo y vapeadores o dispositivos de calentamiento.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2022).

El consumo de tabaco en el último mes se estima en 1.014.708 casos en Bogotá D.C., siendo más alta la prevalencia en los hombres (674.812), la cual casi duplica a la de las mujeres (337.608). Por grupo etario, los jóvenes entre 18 y 24 años son quienes presentan la tasa más alta de consumo de cigarrillo en el último mes (22.75%), seguido por las personas entre 25 y 34 años (19.48%). El consumo más bajo se da en la población de 12 a 17 años (2.72%) (ver tabla 16).

³⁶ Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2022). *Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá D.C., 2022*.

https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/septiembre-9/ESTUDIO_DE_CONSUMO_DE_SUSTANCIAS_PSICOACTIVAS_BOGOTA_2022.pdf

Tabla 16 Estimaciones e intervalos de confianza (I. de C.) del 95% para prevalencia último mes y número de casos de consumo de cigarrillo, según grupos de edad (años)

Grupos de edad	Prevalencia (%)			Número de casos		
	Estimación	I. de C.		Estimación	I. de C.	
12 - 17 años	2.72	1.36	4.08	10.352	5.162	15.542
18 - 24 años	22.75	16.24	29.26	212.810	151.954	273.666
25 - 34 años	19.48	16.53	22.43	241.289	204.732	277.846
35 - 44 años	15.33	12.32	18.34	185.228	148.887	221.569
45 - 65 años	13.34	10.85	15.83	365.031	296.991	433.071
Total	15.62	13.87	17.37	1.014.708	901.146	1.128.270

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2022).

En síntesis, y específicamente respecto a los vapeadores, el 7.76% de las personas encuestadas declara haber usado estos dispositivos alguna vez en la vida (10.35% de los hombres y 5.29% de las mujeres); el 4.68% durante los últimos 12 meses y el 2.14% una vez en los últimos 30 días, y se considera consumidor actual. Esta cifra equivale a 139.026 consumidores de vapeadores, vaporizadores o dispositivos de calentamiento de tabaco en Bogotá. La mayor tasa de consumo se presenta entre los jóvenes de 18 a 24 años con el 7%, seguido del grupo de 25 a 34 años con el 3.64%. La mayor prevalencia en el consumo en el último mes se da en los estratos 4, 5 y 6. Finalmente, las personas que usaron alguna vez en su vida un vapeador o dispositivo de calentamiento de tabaco, lo hicieron en promedio a la edad de 23.7 años.

De este estudio también vale la pena señalar la percepción de riesgo (que se abordará en el siguiente apartado), ya que existe una asociación entre este y el consumo. Quienes piensan que no existe riesgo, presentan mayor probabilidad de usar una determinada sustancia; mientras que una percepción de gran riesgo está asociada a un menor consumo. **El 82% de las personas piensa que fumar frecuentemente implica un gran riesgo (80.14% en los hombres y 83.94% en las mujeres)**, el 11.35% considera que el riesgo es moderado, el 2.35% que el riesgo es leve y el 0.83% que no hay ningún riesgo. **En todos los grupos etarios y todos los estratos socioeconómicos la opinión más recurrente es que fumar de forma frecuente implica un gran riesgo.**

Por último, a modo de recomendación, el citado estudio señala que es necesario darle continuidad a la política pública para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la reducción de riesgos y daños en Bogotá. **Si bien el consumo del tabaco vía cigarrillo descende año tras año, el uso de dispositivos de calentamiento de tabaco y vapeadores aumenta, lo que requiere de una política de reducción del consumo de tabaco que no se centre solamente en la sustancia, sino también en el medio y el modo de uso.**

2. Sobre el consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores en contextos universitarios

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) llevó a cabo el Tercer Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria. El objetivo del estudio fue conocer la magnitud del consumo de sustancias lícitas e ilícitas en estudiantes universitarios de pregrado de las distintas universidades públicas y privadas de Colombia.

Según este estudio, la prevalencia del uso de los vapeadores alguna vez en la vida en jóvenes universitarios en Colombia es de 16,6% (19,7% entre los hombres y 13,9% en las mujeres). Quienes más consumen los cigarrillos electrónicos son los universitarios más jóvenes. El estudio también encontró que el 69,6% de los estudiantes señaló haber recibido información o talleres para prevenir el uso de drogas durante la enseñanza secundaria; mientras que, en la etapa universitaria, solo el 29,9% de los estudiantes recibió este tipo de información. El 60,2% considera que debería existir una política universitaria específica para la prevención del consumo de drogas entre los estudiantes³⁷.

Por otro lado, de acuerdo a la Encuesta Institucional de Salud y Bienestar del 2022 aplicada al interior de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, el 25% de sus estudiantes de pregrado, el 4% de los de posgrado y el 4% de los colaboradores, hacen uso de estos dispositivos. El consumo de los mismos se relaciona con problemas de salud mental, especialmente se usa frente a estados de depresión, ansiedad, estrés y soledad.

El 14 de octubre de 2019 la Universidad Javeriana de Cali emitió una circular sobre el uso de estos dispositivos. En esta se detalla que a pesar de no estar regulados expresamente por la ley, el Ministerio de Salud sí considera que su uso debe ser prohibido en entornos educativos, en consonancia del principio de precaución en salud y las recomendaciones que sobre la materia ha entregado la Organización Mundial de la Salud³⁸.

En esta misma línea, el Ministerio de Educación Nacional, en su Concepto 118804 de 2022, señala que las normas legales y reglamentarias del sector educación otorgaron a las instituciones educativas públicas y privadas la competencia de adoptar su propio manual de convivencia, en el que se establecen los derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, faltas y sanciones de los miembros de la comunidad educativa³⁹.

Es así que el artículo 2.3.3.1.4.4 del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (Decreto Nacional 1075 de 2015), en relación con el contenido del manual de convivencia, estipula que el mismo debe incluir, entre otros aspectos, reglas de prevención de consumo de sustancias psicotrópicas. En particular el manual de convivencia debe contemplar, entre otros aspectos, reglas de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud, así como la prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas.

También es menester precisar que la autonomía universitaria se encuentra determinada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia T-123 de 1993, considera que estos establecimientos de educación superior pueden autorregularse, pero nunca en contradicción con la legalidad y conveniencia generales. En ese sentido, el presente Proyecto de Acuerdo, al determinar prescripciones de salud pública, se aleja de los preceptos entendidos de la autonomía universitaria (no invade dicha competencia).

³⁷ Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia (2017). *III Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población universitaria de Colombia, 2016*. https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/Octubre/Informe_Universitarios_Colombia.pdf

³⁸ Pontificia Universidad Javeriana Cali (2019). *Circular N° 3/2019. Asunto: Medidas pedagógicas y disciplinarias para el uso de cigarrillos electrónicos dentro del campus de la Pontificia Universidad Javeriana - Cali*. <https://www.javerianacali.edu.co/sites/default/files/2024-02/Circular%20Uso%20de%20Cigarrillos%20Electronicos%202019.pdf>

³⁹ Ministerio de Educación Nacional (1 de junio de 2022). *Concepto 118804 de 2022. Concepto sobre uso vapeadores y/o cigarrillos electrónicos en instituciones educativas*. <https://www.ambitojuridico.com/sites/default/files/2022-07/Cpto-118804-22.pdf>

3. Riesgos asociados a la salud por el uso de vapeadores

El Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la Circular 032 de 2019, señaló que los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) son dispositivos que calientan una solución para crear vapor, que es inhalado por los consumidores. Estos contienen saborizantes, por lo general disueltos en propilenglicol o glicerina y nicotina, como también pueden contener otras sustancias químicas tóxicas. **También existen los Sistemas Electrónicos sin Suministro de Nicotina (SSSN), dispositivos de similar funcionamiento que no contienen nicotina pero sí otras sustancias químicas**⁴⁰.

Dichos productos son conocidos como cigarrillos electrónicos (e-cigarrillo), vapeadores, vaporizadores, etc., e imitan el uso convencional de productos de tabaco (cigarrillos, puros y pipas). **Varios estudios han demostrado que los jóvenes que prueban los vapeadores tienen un riesgo tres veces mayor de consumir cigarrillos convencionales, lo que sugiere que los vapeadores pueden ser la puerta de entrada a otros productos de tabaco e incluso a otras sustancias.**

El Ministerio de Salud y Protección Social, en la circular citada, señala los siguientes riesgos para la salud:

- a. **La nicotina genera adicción y puede afectar el desarrollo neuronal en adolescentes.**
- b. **El uso de vapeadores, durante al menos un año, se asocia a un mayor riesgo cardiovascular; y el uso diario duplica el riesgo de presentar infarto agudo de miocardio,** probabilidad que aumenta si hay antecedentes de hipertensión, colesterol alto y diabetes.
- c. **Los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos tienen mayor probabilidad de consumir cannabis,** no solo en su forma tradicionalmente quemada sino también a través del vapeo, ya que estos dispositivos pueden fomentar la experimentación y la personalización del consumo.
- d. **Los productos químicos presentes en el vapor del cigarrillo electrónico pueden causar daño celular y mutagénesis,** con la posibilidad de que la exposición a largo plazo aumente el riesgo de desarrollar cáncer.
- e. **La ingesta de la nicotina contenida en estos productos causa intoxicación aguda,** la cual es grave en niños.

4. Imaginarios y mitos alrededor de los vapeadores

A pesar de la evidencia científica y el pronunciamiento de la autoridad sanitaria nacional frente al consumo de los vapeadores, es posible afirmar que aún existe cierto nivel de desinformación y mitos alrededor del tema, que muy posiblemente fomentan su consumo.

Figura 1.

Mitos y realidades de los vapeadores

⁴⁰ Ministerio de Salud y Protección Social (2019). *Circular Externa No. 032 del 21 de octubre de 2019*. <https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Nuevo/Circular%20No.%2032%20de%202019.pdf>

MITOS	REALIDADES
Vapear es una alternativa sana a fumar cigarrillos.	El jugo electrónico del vapeo podría contener nicotina y sustancias químicas cancerígenas. Se sabe que puede causar problemas de salud, como respirar con silbido, toser y tener sinusitis, sangrado en la nariz, falta de aliento y asma. ¹
Vapear no tiene nada que ver con fumar cigarrillos tradicionales.	Según un estudio, es cuatro veces más probable que la gente joven que empieza a vapear esté fumando cigarrillos tradicionales un año después. ²
Solo es vapor de agua inofensivo.	No es inofensivo. No es solamente vapor de agua. Contiene muchas toxinas, agentes potencialmente cancerígenos y sustancias químicas peligrosas, como diacetilo, que se sabe causa una enfermedad mortal en los pulmones: la enfermedad pulmonar de “palomitas de maíz”. Con mayor frecuencia contiene una combinación de glicol de propileno, glicerina vegetal, saborizantes y nicotina. ^{3 4}
Los dispositivos para vapear no contienen nicotina.	Un estudio publicado en 2015 encontró que el 99 por ciento de los cigarrillos electrónicos vendidos en almacenes, supermercados y tiendas similares en EE. UU. contenían nicotina, la misma sustancia altamente adictiva que contienen los cigarrillos tradicionales. ⁵ Vale la pena mencionar que el 100 por ciento de los productos JUUL, el dispositivo más popular para vapear entre los adolescentes, contienen nicotina. Y cada cartucho de un JUUL contiene la misma cantidad de nicotina que una cajetilla entera de cigarrillos.

Fuente: Colorado sin tabaco (s.f.)

¿Es cierto que los cigarrillos electrónicos o vapeadores pueden ayudar a dejar de fumar?⁴¹

No es cierto que estos dispositivos ayuden a dejar de fumar. Organizaciones como la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA) no los tienen aprobados como alternativa para la cesación del tabaquismo.

En Colombia estos dispositivos no tienen el registro INVIMA para su uso como medicamento ni como dispositivo médico. Por tal razón no pueden ser recomendados por el personal de salud. Tampoco es cierta la afirmación de que los cigarrillos electrónicos son 95% más seguros que los cigarrillos convencionales.

⁴¹ Ministerio de Salud y Protección Social (S.F.) *ABECÉ. Lo que debes conocer sobre los cigarrillos electrónicos*. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-general-cigarrillos-electronicos.pdf>

Algunas sociedades científicas de la Región de las Américas, de Europa y del país han declarado que no se cuenta con suficientes pruebas científicas que determinen que el cigarrillo electrónico ayude a dejar de fumar. No recomiendan el uso de productos que afecten los pulmones y la salud, como los cigarrillos electrónicos.

5. Los vapeadores generan riesgos para la salud de los no fumadores y se deben regular en todos los espacios cerrados de trabajo y lugares públicos

La creciente evidencia sobre los efectos perjudiciales de la exposición pasiva al aerosol de los cigarrillos electrónicos, destaca la incompatibilidad entre la creación de zonas para fumadores y la protección de la salud pública. Deutsche Welle (DW) destaca que estudios recientes en Corea del Sur han encontrado que **durante la combustión de líquidos de vapeo se emiten sustancias nocivas como propilenglicol, partículas PM2.5, nicotina y varios compuestos cancerígenos. Estos contaminantes contribuyen significativamente a la degradación de la calidad del aire en espacios cerrados, lo que plantea un grave riesgo de carcinogénesis para aquellos expuestos al aerosol**⁴². Este hallazgo genera serias preocupaciones sobre la salud pública, especialmente en ambientes donde no se restringe el uso de estos dispositivos de vapeo.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina son perjudiciales para la salud y presentan un alto potencial adictivo. **A pesar de que los efectos a largo plazo de estos dispositivos aún no están completamente entendidos, la evidencia científica disponible indica un aumento significativo en el riesgo de desarrollar trastornos cardíacos y pulmonares. Este riesgo se extiende no solo a los usuarios activos de estos dispositivos, sino también a las personas que se encuentran en sus proximidades**⁴³.

Es así como en su análisis sobre los riesgos asociados a los cigarrillos electrónicos, **la OMS recomienda de manera urgente la implementación de regulaciones en aquellos lugares donde su uso no ha sido prohibido. Las medidas deben enfocarse en crear ambientes libres de humo y aerosol**, minimizando así la exposición a sustancias nocivas que pueden comprometer la salud de individuos no consumidores, y contribuir a la prevención de enfermedades relacionadas.

En este contexto, la Ley 2354 de 2024 “Por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la ley 1335 de 2009 y se dictan otras disposiciones” establece un marco normativo integral que regula el consumo, la venta, la publicidad y la promoción de cigarrillos, productos de tabaco y sus derivados, abarcando también los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y aquellos sin suministros de nicotina (SSSN)⁴⁴. Esta legislación se erige como una extensión de las

⁴² Deutsche Welle. (2024). *El vapeo puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón*. <https://www.dw.com/es/el-vapeo-puede-aumentar-el-riesgo-de-c%C3%A1ncer-de-pulm%C3%B3n/a-69141530>

⁴³ Organización Mundial de la Salud. (2023). *Los cigarrillos electrónicos perjudican la salud y son muy adictivos, es urgente regular su comercialización*. <https://news.un.org/es/story/2023/12/1526457#:~:text=La%20OMS%20afirm%C3%B3%20que%20los,sufrir%20trastornos%20cardiacos%20y%20pulmonares>.

⁴⁴ Ley 2354 de 2024 [Congreso de la República]. Por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Ley 1335 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 09 de mayo de 2024.

implicaciones y limitaciones de la Ley 1335 de 2009⁴⁵, conocida popularmente como la Ley Antitabaco, destacando la creciente preocupación por la salud pública en relación con el uso de estos productos.

Uno de los aspectos más relevantes de dicha normatividad es la prohibición del consumo de cigarrillos y productos relacionados, como los dispositivos de vapeo, en áreas cerradas de trabajo y en espacios públicos, tales como bares, restaurantes, centros comerciales y eventos masivos, incluyendo lugares de gran afluencia como estadios y parques. Esta regulación tiene como objetivo proteger a la población de los riesgos asociados a la exposición del humo de tabaco y aerosol de vapeadores.

A pesar de la expedición de estas normas, se ha evidenciado una preocupante normalización del uso de vapeadores en espacios públicos, lo que representa un desafío significativo para la salud pública. Este reto va más allá de la simple vigilancia del cumplimiento normativo, pues implica combatir la percepción social errónea de que los productos de vapeo son inofensivos y pueden ser consumidos sin restricciones en espacios compartidos.

En conclusión, en estos espacios no existen áreas autorizadas para fumadores, siendo una medida basada en un sólido respaldo científico y jurídico que enfatiza la importancia de salvaguardar la salud colectiva.

6. Desafíos en la regulación y la necesidad de robustecer la normatividad sobre los espacios libres de humo y aerosoles

La Ley 2354 de 2024 se alinea con los principios rectores de la Ley Antitabaco, extendiendo las restricciones del tabaco convencional a los dispositivos emergentes de vapeo. Esta extensión responde a la urgencia de proteger la salud pública mediante medidas clave como:

- **Espacios libres de humo y aerosoles:** La prohibición del uso de estos dispositivos en espacios cerrados y públicos garantiza entornos saludables, alineados con estándares internacionales de protección del bienestar colectivo.

De conformidad con respuesta dada a un derecho de petición, la Secretaría Distrital de Salud indicó que el Ministerio de Salud y Protección Social está actualmente inmerso en el proceso de rediseño y reglamentación de la señalización de espacios libres de humo y aerosoles, en cumplimiento de la Ley 2354 de 2024⁴⁶. Sin embargo, esta transición hacia espacios 100% libres de humo y aerosoles implica afrontar desafíos significativos que demandan una respuesta normativa robusta. Por lo tanto, es imprescindible establecer medidas integrales que no solo frenen la expansión del uso de productos de vapeo en lugares públicos y áreas cerradas de trabajo, sino que también promuevan una protección efectiva de la salud pública desde un enfoque preventivo.

⁴⁵ Ley 1335 de 2009 [Congreso de la República]. Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana. 21 de julio de 2009.

⁴⁶ Secretaría Distrital de salud. (2024). *Respuesta solicitud de información sobre la implementación de la Ley 2354 de 2024 en Bogotá D.C.* Radicado Concejo 2024EE12669, Radicado SDS 2024ER28788, 2024ER29843, 2024ER29927 y 2024ER30095.

En este contexto, es fundamental que el Distrito Capital actúe con celeridad para establecer lineamientos claros y efectivos que resguarden la salud pública para complementar los esfuerzos del Ministerio de Salud, proporcionando directrices concretas que regulen los espacios 100% libres de humo y aerosoles, considerando que el sector salud de Bogotá tiene como misión primordial formular, adoptar, ejecutar y evaluar políticas orientadas al mejoramiento de la situación de salud de los ciudadanos.

Para ello, es esencial referirse al Acuerdo 257 de 2006, que dictó normas sobre la estructura, organización y funcionamiento de las entidades y organismos del Distrito. Este Acuerdo establece a la Secretaría Distrital de Salud (SDS) como un organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera⁴⁷. Tal autonomía otorga a la SDS la capacidad de orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, siempre en aras de garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la ciudad.

Asimismo, el artículo 287 de la Constitución Política⁴⁸ y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia C-284/97⁴⁹ refuerzan esta capacidad normativa, donde la autonomía territorial se traduce en la atribución de competencias propias y el reconocimiento de derechos y poderes exigibles incluso ante autoridades nacionales, siempre dentro del marco constitucional y legal. Por ello, la SDS está facultada para tomar la iniciativa en el desarrollo de normativas específicas que, al anticiparse a las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, promuevan un entorno más saludable y coherente con los principios fundamentales de la salud pública.

Finalmente, la aplicación del principio de precaución⁵⁰ refuerza la necesidad de una intervención oportuna por parte de la Administración Distrital. Dado que la creciente normalización del uso de vapeadores en espacios públicos representa un riesgo potencial para la salud colectiva, la SDS tiene la facultad y responsabilidad de actuar de manera anticipada, evitando la exposición de la ciudadanía a aerosoles y sustancias nocivas. Esta actuación preventiva no solo es jurídicamente viable sino también necesaria para proteger eficazmente el bienestar de la población, consolidando al Distrito Capital como un referente en la promoción de ambientes saludables.

4. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INICIATIVA

El presente Proyecto de Acuerdo se encuentra sustentado en normas jurídicas del bloque de convencionalidad, así como de rango constitucional, legal y reglamentario relacionadas con el derecho a la salud, así como las obligaciones del Estado en materia de precaución, tal y como se sintetiza a continuación:

4.1 MARCO INTERNACIONAL

4.1.1 Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) - Adoptado por la Ley 1109 de 2006

⁴⁷ Acuerdo 257 de 2006 [Concejo de Bogotá]. Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones. 30 de noviembre de 2006.

⁴⁸ Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 287. 6 de julio de 1991 (Colombia).

⁴⁹ Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, Sentencia del 5 de junio de 1997, exp. D-1486.

⁵⁰ Corte Constitucional de Colombia, Sala Tercera de Revisión, Sentencia del 3 de abril de 2008, exp. T-1.759.107

La Conferencia de las Partes (COP) del CMCT de la OMS, desde el año 2008 ha venido alertando acerca de la aparición de nuevos productos de tabaco, así como de derivados, sucedáneos e imitadores. En la octava sesión (COP8) se determinó que los Productos de Tabaco Calentado eran auténticos productos de tabaco y por ende deben ser objeto de las disposiciones del CMCT y de la legislación y los controles establecidos en cada jurisdicción, incluyéndose en las regulaciones a los dispositivos que se utilizan para su calentamiento⁵¹.

Teniendo en cuenta que Colombia es parte de dicho Convenio y con el propósito de extender las medidas de control aplicables a los productos de tabaco, también a los productos de tabaco calentado (PTC), sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y sistemas sin suministro de nicotina (SSSN), el presente Proyecto de Acuerdo guarda conformidad con las recomendaciones impartidas por la COP.

Dicho esto, el Convenio Marco para el Control de Tabaco determina que:

Artículo 8. Protección contra la exposición al humo de tabaco.

“(…)

2. Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional existente y conforme determine la legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales.”

4.1.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 3. Salud y Bienestar

Meta 3.4. *“De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar”*

En la citada meta, se busca reducir la tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas. En ese sentido, regular los espacios 100% libres de humo y aerosoles busca prevenir la exposición a los compuestos cancerígenos que se generan durante la combustión de líquidos de vapeo, lo que además de reducir el cáncer, también reduce el riesgo de desarrollar trastornos cardíacos y pulmonares.

Por otro lado, la **Meta 3.5.** busca *“Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol”*. Teniendo en cuenta que los cigarrillos electrónicos y demás dispositivos electrónicos de vapeo cuentan con un alto potencial adictivo, esta meta se ajusta al marco jurídico que rige el presente Proyecto de Acuerdo.

Meta 3.a. *“Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda”*

4.2 MARCO NACIONAL

⁵¹ FCTC/COP8(22) Novel and Emerging Tobacco Products, October 6, 2018

4.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

En aras de abordar consecuencias adversas y comportamientos de riesgo para la salud de la población, la norma superior establece el derecho a la salud como un derecho fundamental que implica la garantía real a gozar de un estado físico, mental, emocional y social que permita al ser humano desarrollar en forma digna y al máximo sus potencialidades. En ese sentido, los siguientes artículos establecen disposiciones que brindan la posibilidad de informar sobre los potenciales efectos adversos del uso de los SEAN, los SSSN y similares, y prevenir la exposición de las partículas tóxicas que se liberan por el uso de estos productos.

Artículo 78. *“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización (...)”*

Artículo 95. *“La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.*

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

(...)

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
(...)”

Artículo 366. *“El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. (...)”*

Por otro lado, la autonomía de las entidades territoriales se ejerce dentro de los límites de la Constitución y la Ley, donde es importante señalar que la presente iniciativa normativa se sujeta a la existencia de la Ley 2354 de 2024, permitiendo que Bogotá D.C. adopte medidas regulatorias respecto a los espacios 100% libres de humo y aerosoles en aras de proteger el derecho fundamental a la salud, siempre que no contravenga la mencionada Ley. Esto, de acuerdo con los siguientes preceptos constitucionales:

Artículo 287. *“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:*

1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que les correspondan.

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

4. Participar en las rentas nacionales.”

Artículo 288. *“La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.*

Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.”

Artículo 313. *“Corresponde a los concejos:*

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. (...)”

4.2.2 LEYES:

Ley 9 de 1979

“Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”

Establece la responsabilidad estatal y ciudadana de proteger la salud individual y colectiva, mediante la minimización de riesgos, daños e impactos negativos para la salud humana por el uso de consumo de bienes y servicios, en establecimientos de interés en salud pública, a través de verificación, asesoría y asistencia técnica del cumplimiento normativo, en aspectos relacionados con condiciones sanitarias: infraestructura, agua y saneamiento básico, control de calidad, procesos y procedimientos, cualificación del talento humano, monitoreo de efectos en salud.

Artículo 135. *“El Ministerio de Salud deberá efectuar, promover y coordinar las acciones educativas, de investigación y de control que sean necesarias para una adecuada protección de la salud individual y colectiva contra los efectos de sustancias peligrosas”.*

Ley 715 de 2001

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”

La gestión en salud pública es función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales concurrirán en su ejecución en los términos señalados en la presente Ley. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a la población de su jurisdicción.

Artículo 43. Competencias de los departamentos en salud. *“Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones:*

(...)

43.1.1. Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en armonía con las disposiciones del orden nacional.

43.1.2. Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación o en armonía con éstas.

43.1.3. Prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas que prestan servicios de salud, en su jurisdicción.

(...)

43.1.9. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud para su inclusión en los planes y programas nacionales.

Artículo 44. Competencias de los municipios. “Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones:

(...)

44.1.1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental.

(...)

44.1.6. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad social en salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y nacionales.

(...)”

Artículo 45. Competencias en salud por parte de los Distritos. “Los distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos, excepto aquellas que correspondan a la función de intermediación entre los municipios y la Nación.

(...)”

Ley 1335 de 2009

“Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana”

Esta Ley tiene por objeto contribuir a garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio nacional, especialmente la de los menores de 18 años de edad y la población no fumadora, regulando el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, tabaco y sus derivados, así como la creación de programas de salud y educación tendientes a contribuir a la disminución de su consumo y abandono de la dependencia del tabaco del fumador. Entre dichas estrategias se encuentra:

Artículo 11. Campañas de prevención para la población en riesgo por consumo de tabaco de este. “Será responsabilidad del Gobierno Nacional implementar campañas generales de información y educación a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco o la exposición al humo de tabaco ambiental y brindar asesoría y desarrollar programas para desestimular el hábito de fumar”.

Asimismo, prohíbe el consumo de productos de tabaco en ciertas áreas cerradas, siendo esta una disposición que, en vía análoga, y de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2354 de 2024, puede aplicarse respecto de los vapeadores, por cuanto constituyen un riesgo para la salud y el cuidado de la misma.

Artículo 19. Prohibición al consumo de tabaco y sus derivados. *“Prohíbase el consumo de Productos de Tabaco, en los lugares señalados en el presente artículo.*

En las áreas cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos, tales como: Bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias, festivales, parques, estadios, cafeterías, discotecas, cibercafés, hoteles, ferias, pubs, casinos, zonas comunales y áreas de espera, donde se realicen eventos de manera masiva, entre otras.

- a) Las entidades de salud.*
- b) Las instituciones de educación formal y no formal, en todos sus niveles.*
- c) Museos y bibliotecas.*
- d) Los establecimientos donde se atienden a menores de edad.*
- e) Los medios de transporte de servicio público, oficial, escolar, mixto y privado.*
- f) Entidades públicas y privadas destinadas para cualquier tipo de actividad industrial, comercial o de servicios, incluidas sus áreas de atención al público y salas de espera.*
- g) Áreas en donde el consumo de productos de tabaco generen un alto riesgo de combustión por la presencia de materiales inflamables, tal como estaciones de gasolina, sitios de almacenamiento de combustibles o materiales explosivos o similares.*
- h) Espacios deportivos y culturales.*

PARÁGRAFO. *Las autoridades sanitarias vigilarán el cumplimiento de este artículo, en coordinación con las autoridades de policía y demás autoridades de control”.*

Artículo 20. Obligaciones. *“Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares a los que hace referencia el artículo 19 tienen las siguientes obligaciones:*

- (...)*
- b) Fijar en un lugar visible al público avisos que contengan mensajes alusivos a los ambientes libres de humo, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social;*
- (...)”*

Ley 1566 de 2012

“Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias” psicoactivas”

Esta Ley reconoce que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos, por lo tanto, este asunto requiere atención integral por parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y las Políticas Públicas Nacionales, para lo que propone las siguientes acciones:

Artículo 6. Promoción de la salud y prevención del consumo. *“El Gobierno Nacional en el marco de la Política Pública Nacional de Prevención y Atención a la adicción de sustancias psicoactivas formulará líneas de política, estrategias, programas, acciones y procedimientos integrales para prevenir el consumo, abuso y adicción a las sustancias mencionadas en el artículo 1° de la presente ley, que asegure un ambiente y un estilo*

de vida saludable, impulsando y fomentando el desarrollo de programas de prevención, tratamiento y control del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas al interior del lugar de trabajo, las cuales serán implementadas por las Administradoras de Riesgos Profesionales.
(...)

Tales acciones de promoción y prevención requerirán para su construcción e implementación la participación activa de todos los sectores productivos, educativos y comunitarios en las respectivas entidades territoriales”.
(subrayado fuera de texto original)

Ley 1751 de 2015

“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”

Es deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de los determinantes que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud. Bajo este fin, la Ley busca promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida a través de las siguientes disposiciones:

Artículo 5. Obligaciones del Estado. *“El Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud; para ello deberá:*

a) Abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas;

(...)

c) Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales;

d) Establecer mecanismos para evitar la violación del derecho fundamental a la salud y determinar su régimen sancionatorio;

e) Ejercer una adecuada inspección, vigilancia y control mediante un órgano y/o las entidades especializadas que se determinen para el efecto;

f) Velar por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional, según las necesidades de salud de la población; (subrayado fuera de texto original)

(...)”

Artículo 20. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. *“El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.*

(...) El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado”.

Ley 1801 de 2016

“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”

Establece disposiciones de carácter preventivo para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

Respecto a los espacios libres de consumo de sustancias y en consonancia con lo estipulado en la Ley 2354 de 2024, el uso de vapeadores se restringe en las disposiciones de este Código, en razón a que atentan contra la salud pública; para lo cual establece lo siguiente:

Artículo 2. Objetivos específicos: *“Con el fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, los objetivos específicos de este Código son los siguientes:*

*1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público.
(...)”*

Artículo 34. Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias. *“Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto no deben efectuarse:*

*1. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o centro educativo.
(...)”*

Artículo 38. Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. *“Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no deben realizarse. Su incumplimiento da lugar a medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente sobre la materia y de la responsabilidad penal a que haya lugar:
(...)”*

*5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes:
(...)b) Bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y sus derivados, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;(...)”*

Artículo 73. Comportamientos de los organizadores que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas en las actividades que involucren aglomeraciones de público complejas y su correcto desarrollo. *“Los siguientes comportamientos por parte de los organizadores ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y el correcto desarrollo y realización de las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y por tanto no deben efectuarse:
(...)”*

*6. Permitir el ingreso o consumo de sustancias, bebidas o elementos prohibidos por la normatividad vigente o por la reglamentación expedida de conformidad con el artículo 47 del presente Código.
(...)”*

Artículo 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que afectan la actividad económica. *“Los siguientes comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse:*

(...)

9. Permitir o facilitar el consumo de drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes.

(...)

Artículo 94. Comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica. *“Los siguientes comportamientos relacionados con la salud pública afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse:*

(...)

3. Permitir el consumo de tabaco y/o sus derivados en lugares no autorizados por la ley y la normatividad vigente.

(...)”

Ley 2354 de 2024

“Por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Ley 1335 de 2009 y se dictan otras disposiciones”

En respuesta a la creciente preocupación por los efectos adversos para la salud asociados con los cigarrillos electrónicos y productos de vapeo, esta norma busca regular su uso, comercialización y publicidad, haciendo extensible a estos dispositivos las implicaciones y limitaciones de la Ley 1335 de 2009.

Artículo 1. *“Modifíquese el artículo 1 de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará así:*

Artículo 1. Objeto. *El objeto de la presente ley es contribuir a garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio nacional, especialmente la de los menores de 18 años de edad y la población no fumadora, regulando el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento; entre los que se encuentran los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), los Productos de Tabaco Calentado (PTC) y Productos de Nicotina Oral (PNO), entre otros; así como la creación de programas de salud y educación tendientes a contribuir a la disminución de su consumo, abandono de la dependencia del tabaco y nicotina, sucedáneos o imitadores y se establecen las sanciones correspondientes a quienes contravengan las disposiciones de esta ley.*

PARÁGRAFO 1°. *Para los efectos de la presente ley, cuando se utilice la expresión “libre de humo” se entenderá como “libre de humo y aerosoles”.*

(...)”

4.2.3 DECRETOS NACIONALES

Decreto 3518 de 2006

“Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones”

Artículo 1. Objeto. “El objeto del presente decreto es crear y reglamentar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva (...).”

Decreto 4107 de 2011

“Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social.”

Artículo 2. Funciones. “El Ministerio de Salud y Protección Social, además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 cumplirá las siguientes:
(...)”

4. Formular, adoptar, coordinar la ejecución y evaluar estrategias de promoción de la salud y la calidad de vida, y de prevención y control de enfermedades transmisibles y de las enfermedades crónicas no transmisibles.
(...)”

Artículo 6. Funciones del Despacho del Ministro de Salud y Protección Social. “Además de las señaladas por la Constitución Política y el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el Despacho del Ministro de Salud y Protección Social tendrá las siguientes funciones:
(...)”

15. Coordinar la actividad del Ministerio en lo relacionado con sus objetivos y funciones con las entidades públicas del orden nacional, del sector central y del descentralizado, los entes territoriales y sus entidades.
(...)”

4.2.4 RESOLUCIONES NACIONALES

Resolución 1956 de 2008

“Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco”

Prohíbe fumar en espacios cerrados de lugares de trabajo y públicos, así como también establece medidas para disuadir a las personas de no fumar en dichos lugares.

Artículo 2. “Prohíbese fumar en áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos.
(...)”

Artículo 3. “Prohíbese fumar en:

- a) Las entidades de salud.
- b) Las instituciones de educación formal, en sus niveles de educación preescolar, básica y media y no formal que atiendan menores de edad;
- c) Los establecimientos en donde se atienden menores de edad;

d) Los medios de transporte de servicio público, oficial y escolar”.

Artículo 4. *“Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares a los que hacen referencia los artículos 2º y 3º tienen las siguientes obligaciones:*

a) Velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente resolución con el fin de proteger a las personas de la exposición del humo de tabaco ambiental;

b) Fijar en un lugar visible al público un aviso que contenga uno de los siguientes textos:

“Por el bien de su salud, este espacio está libre de humo de cigarrillo o de tabaco”;

“Respire con tranquilidad, este es un espacio libre de humo de tabaco,”

“Bienvenido, este es un establecimiento libre de humo de tabaco”.

Los avisos no deben incluir figuras alusivas al cigarrillo ni ningún recordatorio de marca;

c) Adoptar medidas específicas razonables a fin de disuadir a las personas de que fumen en el lugar tales como pedir a la persona que no fume, interrumpir el servicio, pedirle que abandone el local o ponerse en contacto con la autoridad competente”.

Resolución 1229 de 2013

“Por la cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario para los productos de uso y consumo humano”

Comprende el modelo de vigilancia para la reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la salud de la población eliminando o reduciendo el consumo de productos nocivos para la salud, donde el uso de los SEAN, SSSN y similares, ha despertado interés por el control o restricción de estos dispositivos electrónicos.

Artículo 2. Campo de Aplicación. *“Las disposiciones contenidas en la presente resolución se aplicarán a todos los bienes y servicios de uso y consumo humano y serán de obligatorio cumplimiento por parte de los sujetos responsables de desarrollar el modelo a que se refiere esta resolución, cuyas actividades productivas influyan directa o indirectamente en la salud de la población”.*

Artículo 5. Finalidades. *“Las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario de que trata la presente resolución, tendrán los siguientes fines:*

1. Promover la calidad de vida de la ciudadanía, involucrándola en los procesos de autocuidado, prevención y control de riesgos para la salud, asociados a los bienes y servicios de uso y consumo humano.

Resolución 518 de 2015

“Por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PIC”

La presente Resolución establece las intervenciones, procedimientos, actividades e insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, donde se dispone que concurren el nivel nacional con el distrital para la gestión de la salud pública de la siguiente manera:

Artículo 5. Procesos para la Gestión de la Salud Pública. *“Para el logro de los resultados en salud, las entidades a cargo de la Gestión de la Salud Pública, implementarán y fortalecerán los siguientes procesos y aquellos adicionales que defina cada actor para garantizar la ejecución de sus funciones:*

(...)

5.12. Vigilancia en salud pública para generar información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población de forma sistemática y oportuna, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones: racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva”.

Artículo 11. Responsabilidades. *“Además de las competencias asignadas a los actores involucrados en la planeación, formulación, ejecución, monitoreo y evaluación del PIC, estos tendrán las siguientes responsabilidades:*

(...)

11.1.4. Concurrir con las entidades territoriales departamentales y distritales en la implementación de proyectos, estrategias e intervenciones colectivas para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en el marco de las dimensiones del PDSP.

Resolución 1035 de 2022

“Por el cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 con sus capítulos diferenciales: indígena para los pueblos y comunidades indígenas de Colombia, población víctima de conflicto armado, el Pueblo Rrom y la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera”

Dicha norma contempla esta nueva tendencia de dispositivos de la siguiente manera:

2.9. Sucedáneos e imitadores (Cigarrillos electrónicos)

“No se calcularon tendencias por quintiles según estratificación social, ni se realizó el análisis de desigualdad porque al tratarse de productos nuevos, no fueron abordados hasta la última medición en 2019.

Estos productos emergentes, sucedáneos e imitadores de tabaco se vienen masificando en los últimos años en el país, los datos de prevalencia de consumo solo se midieron según la Encuesta de consumo de sustancias psicoactivas de 2019, con una prevalencia de 0,67% para población entre 12 y 64 años. Encontrando cifras importantes de consumo en población entre 12 y 24 años. Se cuenta con datos importantes sobre la experiencia en el uso de cigarrillos electrónicos donde el 15,4% de los escolares entre 13 y 15 años reportó haberlos probado, según la Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes de 2017.”

Ante estas cifras, la misma norma propone la siguiente estrategia para abordar el fenómeno de los dispositivos electrónicos de vapeo:

Artículo 4. Armonización de políticas públicas. *“Las entidades territoriales de acuerdo con sus competencias y necesidades, condiciones y características de su territorio, deberán adaptar los contenidos del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, en cada cuatrienio, tanto en los planes territoriales de salud como en el Plan de Desarrollo Territorial y coordinar la implementación en su área de influencia, de conformidad con los lineamientos que para el efecto defina este Ministerio. (...)”*

4.2.5 NORMAS DISTRITALES

4.2.5.1 DECRETOS

Decreto 691 2011

“Por medio del cual se adopta la Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C.”

Artículo 2. Objetivo General. *“La Política Pública tiene como objetivo general establecer las directrices para el abordaje integral, articulado y continuo del fenómeno del consumo y la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas, reconociendo las múltiples manifestaciones del fenómeno y la diversidad poblacional y cultural que caracteriza al Distrito Capital.*

Parágrafo 1°. La implementación de la Política Pública, tiene presente que el fenómeno del consumo está mediado por los efectos contingentes en la salud física, mental, social, y por los factores históricos, políticos, económicos y culturales que influyen en las dinámicas y relaciones que se establecen con las sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales.

Parágrafo 2°. Para el logro de este objetivo corresponde a las entidades del Distrito Capital ubicar en un lugar de preferencia de la agenda social temas como la atención, la prevención del consumo y la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas, y promover acciones de intervención con base en un enfoque de derechos”.

Decreto 507 de 2013

“Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.”

Existen diferentes opciones para suplir los vacíos en la regulación de los sistemas electrónicos con o sin liberación de nicotina en Bogotá. Para promover estrategias de salud pública, la Secretaría Distrital de Salud tiene la capacidad de orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias en aras de garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la ciudad.

Artículo 1. *“(…) La Secretaría Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital.*

Como organismo rector de la salud ejerce su función de dirección, coordinación, vigilancia y control de la salud pública en general del Sistema General de Seguridad Social y del régimen de excepción, en particular.

Además de las atribuciones generales establecidas en el presente Acuerdo para las secretarías, la Secretaría Distrital de Salud tiene las siguientes funciones básicas: (...)

n. Implementar programas de prevención del consumo del alcohol, del tabaco y otras drogas y de rehabilitación y desintoxicación”.

4.2.5.2 ACUERDOS

Acuerdo 079 de 2003

“Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá, D.C.”

A través de procedimientos policivos y administrativos, esta norma permite garantizar la implementación de las medidas de control para espacios libres de humo y aerosoles.

Artículo 26. Comportamientos en relación con el tabaco y sus derivados. *“Los siguientes comportamientos favorecen la salud propia y la ajena:*

(...)

5. No fumar o consumir tabaco o sus derivados, en cualquiera de sus formas, en los siguientes sitios:

5.1 Los destinados a actividades culturales, recreativas, deportivas o religiosas que funcionen como recintos cerrados;

5.2 Vehículos de servicio público individual o colectivo, aviones, trenes y del sistema de transporte masivo;

5.3 Vehículos destinados a transporte de gas o materiales inflamables;

5.4 Escuelas, colegios, universidades, salones de conferencias, bibliotecas, museos, laboratorios, institutos, y demás centros de enseñanza;

5.5 En restaurantes y salas de cine;

5.6 Hospitales, clínicas, centros de salud, instituciones prestadoras de salud y puestos de socorro;

5.7 Oficinas estatales o públicas;

5.8 Recintos cerrados públicos y abiertos al público;

5.9 Lugares donde se fabriquen, almacenen o vendan combustibles, explosivos, pólvora o materiales peligrosos, en los cuales se debe siempre fijar aviso en lugar visible que advierta sobre la prohibición.

Parágrafo Primero. *“En todo caso, en los sitios enunciados en los numerales 5.1, 5.4 y 5.5 los propietarios, administradores y dependientes deben habilitar zonas al aire libre para los fumadores y señalar con un símbolo o mensaje los lugares donde se prohíbe fumar (...).”*

Acuerdo 257 de 2006

“Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”

Artículo 85. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Salud. *La Secretaría Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital (negrilla fuera de texto original).*

Como organismo rector de la salud ejerce su función de dirección, coordinación, vigilancia y control de la salud pública en general del Sistema General de Seguridad Social y del régimen de excepción, en particular.

Además de las atribuciones generales establecidas en el presente Acuerdo para las secretarías, la Secretaría Distrital de Salud tiene las siguientes funciones básicas:

a. Formular, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud de conformidad con las disposiciones legales.

(...)

c. Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas que expida el Ministerio de la Protección Social, para garantizar el logro de las metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección, vigilancia y control atribuidas a las demás autoridades competentes.

(...)

f. Realizar las funciones de inspección, vigilancia y control en salud pública, aseguramiento y prestación del servicio de salud.

(...)

n. Implementar programas de prevención del consumo del alcohol, del tabaco y otras drogas y de rehabilitación y desintoxicación.

Acuerdo 376 de 2009

"Mediante el cual se establecen lineamientos para la Política Pública Distrital para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá, D.C."

Artículo 1. Objeto y Definición. *"Establecer directrices para la elaboración de la Política Pública Distrital de prevención integral del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes en Bogotá, D.C.*

Se entiende por prevención integral del consumo de sustancias psicoactivas, el diseño, implementación y evaluación de procesos que permitan promover una vida saludable y de calidad en la población, así como caracterizar, comprender, neutralizar, transformar e intervenir las causas que se asocian al uso indebido de estas drogas".

Artículo 2. Principios y Lineamientos.

“1. Orientar recursos importantes para el diseño e implementación de programas de promoción de la vida sana y digna, y de prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas orientados específicamente a niños, niñas y adolescentes.

(...)

3. Implementar proyectos de comunicación educativa para promover una vida sana y digna que implique nuevas formas de relacionarse que prevengan el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas.

(...)”

Acuerdo 641 de 2016

“Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones”

Artículo 25. Red integrada de servicios de salud. *La oferta pública de prestación de servicios de salud, del Distrito Capital, se organizará en una Red Integrada de Servicios de Salud, que se estructura a través de cuatro subredes que correspondan a cada una de las ESE resultantes de la fusión ordenada en el presente Acuerdo.*

Las subredes se organizarán en servicios ambulatorios y hospitalarios en todos los niveles de complejidad.

(...)

Acuerdo 751 de 2019

“Por medio del cual se fortalece la difusión de estrategias de información y comunicación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas”

La falta de información sobre los efectos y riesgos de los dispositivos electrónicos de vapeo, y el aumento en el uso de estos, ha generado la necesidad de reglamentar su uso y brindar información sobre el producto y sus consecuencias para la salud, tal y como lo indican los siguientes artículos:

Artículo 1. *“El presente Acuerdo tiene por objeto fortalecer la difusión de estrategias de información y comunicación definidas por el Consejo Distrital de Estupefacentes para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en armonía con la política pública vigente de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá”.*

Artículo 2. *“La Administración Distrital definirá los espacios y elementos de publicidad institucional para la difusión de las estrategias definidas en el artículo 1.*

Parágrafo. Se priorizarán los espacios distritales de mayor afluencia de público tales como la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público, el espacio público, entre otros.

Acuerdo 927 de 2024

“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

8.5. Programa 5. Espacio público seguro e inclusivo. *“Se realizarán intervenciones artísticas y culturales en el espacio público que busquen promover la convivencia ciudadana para fortalecer el papel del arte, la cultura y el patrimonio como derecho en la ciudad, así como también se desarrollarán programas de prevención de violencias y prevención de consumo de sustancias psicoactivas”.* (subrayado fuera de texto original)

Artículo 265. Metas de producto del Plan Distrital de Desarrollo. *Las metas de producto del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 se encuentran en el documento anexo “Metas de producto” el cual hace parte integral del presente plan y corresponden con la siguiente numeración:*

Objetivo 2. Bogotá confía en su bienestar.

Programa 10. Salud Pública Integrada e Integral.

Meta 89. Vincular el 100% de las personas identificadas por el sector salud, con enfoque poblacional, diferencial, de curso de vida, de acuerdo a los distintos grupos: etnia, género, orientaciones e identidades diversas y por condiciones o situaciones, a las acciones individuales, colectivas y poblacionales de la oferta de salud.

4.2.6 JURISPRUDENCIA

Sentencia C-284/97 Corte Constitucional

Para dictar los lineamientos que permitan reglamentar los espacios 100% libres de humo y aerosoles, el presente pronunciamiento de la Corte Constitucional, hace un robusto análisis en donde las entidades territoriales pueden reglamentar los servicios en salud tal y como se describe a continuación:

"Ahora bien, no debe perderse de vista que por disposición de la propia Constitución la función que la Carta confiere en los artículos 300-1 y 298 a las asambleas departamentales y en los artículos 311 y 313-1 a los concejos municipales para "reglamentar... la prestación de los servicios" que la ley confiere a la respectiva entidad territorial debe entenderse circunscrita a lo que ella misma determine. En efecto, sobre este aspecto deben recordarse los siguientes parámetros que la Carta consagra:

a) La autonomía de que gozan las entidades territoriales para la gestión de sus intereses se enmarca dentro de los contornos que a ella fijan la Constitución y la ley. (artículo 287)".

"b) Conforme lo dispone el artículo 288 ibídem, corresponde a la ley establecer los términos en los que, de acuerdo a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, los distintos niveles territoriales ejercerán las competencias que les son atribuidas por la Constitución".

"Una interpretación teleológica y sistemática de los anteriores principios constitucionales conduce a esta Corte a afirmar que en el campo de los servicios públicos el Constituyente instituyó una competencia concurrente de regulación normativa en cabeza de los niveles central, regional y local, que por su alcance y radio de acción puede caracterizarse así:

(...)

"b) Es propio de los departamentos y municipios desarrollar por la vía del reglamento la preceptiva legal y adecuarla a las particulares peculiaridades propias de su ámbito territorial. En otros términos, corresponde a las autoridades de esos niveles ejercer la potestad reglamentaria para dar concreción y especificidad a la

normación legal de modo que con sujeción a sus parámetros, dispongan lo conducente a la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos según sean las características de las necesidades locales".

"Tal competencia concurrente constituye nítida expresión de la articulación de los dos niveles a partir de los cuales se organiza el Estado. En efecto, de una parte la ley a través de su capacidad reguladora realiza la unidad jurídico-política de la República al fijar las condiciones aplicables por igual en todo el territorio nacional, sin que al hacerlo, desde luego, le sea dable cercenar o desconocer la facultad decisoria de que gozan las instancias regional y local, vale decir, la autonomía para la gestión de sus propios intereses. Por la otra, las autoridades de los niveles departamental y municipal, al ejercer por la vía reglamentaria una facultad normativa complementaria y de desarrollo de la ley, singularizan y adaptan ese contenido normativo a las particulares condiciones de la unidad territorial, con lo cual expresan la diversidad, que de otro lado, se busca satisfacer con esta estructura institucional".

5. COMPETENCIA

El Concejo de Bogotá D.C. tiene la competencia para dictar normas relacionadas con la naturaleza y el alcance del presente Proyecto de Acuerdo, según las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En primer lugar, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que:

Artículo 313. *"Corresponde a los Concejos:*

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (...)".

En segundo lugar, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico de Bogotá - estipula que:

Artículo 12. Atribuciones. *"Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:*

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito (...)

23. Ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del presente estatuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a las asambleas departamentales. (...)".

6. IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones" en su artículo 7 establece:

Artículo 7. Análisis del impacto fiscal de las normas. *"En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.*

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.

En este sentido, el presente Proyecto de Acuerdo se podrá efectuar en el marco del Plan Distrital de Desarrollo al interior de los programas “Programa 10. Salud Pública Integrada e Integral” y “Programa 11. Salud con calidad y en el territorio”, que consisten en lo siguiente:

“Artículo 10. Programas del objetivo estratégico “Bogotá confía en su Bien-Estar”. Adóptense los siguientes programas del objetivo:
(...)

10.4. Programa 10. Salud Pública Integrada e Integral. (...) Para el Bien-Estar de las personas, con el desarrollo de este programa, se busca la articulación intersectorial y transectorial mediante los mecanismos de coordinación y cooperación para favorecer el desarrollo de alianzas y potenciar acciones de gobernanza y Atención Primaria Social para la afectación positiva de los determinantes sociales de las inequidades en salud dadas por condiciones socioeconómicas y ambientales; y del acceso a servicios básicos y características personales sobre hábitos aprendidos y estilos de vida (...).

10.5. Programa 11. Salud con calidad y en el territorio. (...) En el marco de la atención prioritaria en salud, se abordarán de manera intersectorial y transectorial la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad, para garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, con enfoque de salud familiar y comunitaria, el cuidado, la gestión integral del riesgo en salud y el enfoque diferencial de territorios y poblaciones (...).”

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El día 29 de octubre de 2024, se realizó vía Google meet la mesa de trabajo “Efectos en la salud pública generados por la exposición al aerosol de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), y los Productos de Tabaco Calentado (PTC) en Bogotá: propuestas para reglamentar los espacios 100% libres de humo y aerosoles”, en la cual se contó con la intervención de los siguientes expertos y organizaciones, quienes brindaron sus aportes y recomendaciones para la construcción de este Proyecto de Acuerdo:

Institución	Personas expertas que contribuyeron en la construcción de la iniciativa
Plataforma de Salud Mental SAM	Marlon Leonardo Lizarazo Rodriguez - Investigador
Universidad Nacional de Colombia	Jorge Ariel Martinez - Docente investigador

Es importante destacar que en este encuentro los invitados expertos resaltaron la relevancia de implementar el Modelo Preventivo y de Promoción de la Salud en la señalización de los espacios 100% libres de humo y aerosoles, de manera tal que la reglamentación de dicho asunto trascienda más allá del Modelo Prohibicionista, en donde se brinde información clara, oportuna y con respaldo científico acerca de los efectos del consumo de estos dispositivos de vapeo para fumadores y no fumadores y se promuevan hábitos saludables. Por último, resaltaron la necesidad de que Bogotá cuente con estudios e investigaciones propias que arrojen evidencia empírica sobre el consumo de estos dispositivos de vapeo, para de esa manera orientar mejor las políticas

públicas. A continuación, se relacionan evidencias fotográficas de este evento de co-construcción de la presente iniciativa:



Cordialmente,

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Concejale de Bogotá D. C.
Partido Liberal Colombiano

Proyectó: Diana Riveros, asesora; Andrea Camelo, judicante
Revisó: Diana Riveros, asesora.

9. ARTICULADO

PROYECTO DE ACUERDO NO 219 DE 2025

PRIMER DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO No. _____ DE 2025

"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA REGLAMENTAR LA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO Y AEROSOL EN BOGOTÁ DE ACUERDO CON LA LEY 2354 DE 2024"

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y los numerales 1 y 23 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA:

Artículo 1. Objeto. Establecer los lineamientos para reglamentar la señalización de espacios 100% libres de humo de tabaco y aerosoles en el Distrito Capital, en cumplimiento de la Ley 2354 de 2024 y las demás normas que la modifiquen o sustituyan, promoviendo así entornos saludables que prevengan la exposición a sustancias nocivas derivadas del uso de productos de tabaco calentado (PTC), sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sistemas sin suministro de nicotina (SSSN) y productos sucedáneos o imitadores de cigarrillos y tabaco.

Artículo 2. Definiciones. Para efectos del presente Acuerdo se entiende por:

Aerosol: En el contexto de productos como los cigarrillos electrónicos o vapeadores, el término se refiere a las pequeñas partículas que se generan y dispersan en el aire cuando un usuario inhala de estos dispositivos, emitiendo una “nube” de partículas que contienen sustancias como nicotina, saborizantes y otros compuestos químicos nocivos para la salud.

Producto de Tabaco Calentado (PTC): Son productos que generan aerosoles mediante el calentamiento del tabaco o la activación de un dispositivo que contiene tabaco; estos aerosoles contienen nicotina y otras sustancias químicas tóxicas.

Sistema Electrónico de Administración de Nicotina (SEAN): Son dispositivos que calientan un líquido para crear un aerosol que es inhalado por el usuario. El líquido contiene nicotina (pero no tabaco) y otras sustancias químicas que son tóxicas para la salud humana.

Sistema Sin Suministro de Nicotina (SSSN): Son dispositivos similares a los SEAN, pero la solución calentada que se suministra en forma de aerosol a través del dispositivo no suele contener nicotina.

Sucedáneo: Todo producto comercializado o de otro modo presentado como sustitutivo parcial o total de productos de tabaco, sea o no adecuado para ese fin.

Imitador: Cualquier producto que pretende reemplazar o sustituir un producto aprovechando sus propiedades físicas o características de consumo.

Espacios 100% libres de humo y aerosoles: Áreas cerradas de trabajo y espacios públicos, incluyendo lugares de gran afluencia, en las cuales está prohibido el consumo de PTC, SEAN, SSSN y productos sucedáneos o imitadores de cigarrillos y tabaco, garantizando la ausencia total de emisiones de humo de tabaco o aerosoles de estos productos.

Señalización: Instalación de dispositivos visuales o simbólicos que informen, de manera clara y visible, la prohibición y los efectos para la salud del consumo de PTC, SEAN, SSSN y productos sucedáneos o imitadores de cigarrillos y tabaco, facilitando el cumplimiento de la normativa de los espacios 100% libres de humo y aerosoles en espacios públicos y privados del Distrito Capital.

Modelo Preventivo y Predictivo: Es un enfoque de salud pública que se centra en anticipar y reducir los factores de riesgo que pueden afectar la salud, al mismo tiempo que promueve hábitos y condiciones que favorecen el bienestar, es así que proporciona a la población los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la creación de ambientes favorables para la salud y el desarrollo de actitudes personales saludables.

Artículo 3. Competencia. En virtud del Acuerdo 257 de 2006, la Secretaría Distrital de Salud (SDS), asumirá la dirección técnica y operativa de las acciones derivadas del presente Acuerdo en el marco de su función de Vigilancia en Salud Pública (VSP) y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), a través de las siguientes acciones:

1. Establecer los lineamientos técnicos para la señalización estandarizada de los espacios 100% libres de humo y aerosoles.
2. Implementar acciones individuales y colectivas para afectar positivamente los determinantes sociales de la salud asociados con el consumo de PTC, SEAN, SSN y productos sucedáneos o imitadores de cigarrillos y tabaco en Bogotá.
3. Se propenderá por contar con cifras actualizadas en el Portal Salud Data sobre los determinantes sociales, riesgos y otros factores asociados al consumo de dispositivos y productos objeto del presente Acuerdo, con el fin de orientar políticas públicas y estrategias de intervención.

Parágrafo 1. De conformidad con el Acuerdo 641 de 2016, las Subredes Integradas de Servicios de Salud, en el marco de este Acuerdo y en el marco de sus competencias, brindarán apoyo operativo en las acciones concernientes al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas.

Parágrafo 2. Las acciones dispuestas en el numeral 2 del presente artículo se priorizarán al interior de las instituciones de educación superior públicas y privadas del Distrito Capital.

Artículo 4. Lineamientos para la señalización. La señalización de espacios 100% libres de humo de tabaco y aerosoles en el Distrito Capital se formulará a partir de los lineamientos que a continuación se establecen:

1. Las señales deben incluir expresiones como: “Espacio 100% libre de humo y aerosoles” o similares, de manera que no permitan el consumo de PTC, SEAN, SSN y productos sucedáneos o imitadores de cigarrillos y tabaco generadores de humo o aerosoles.
2. La señalización debe ser clara, legible y estar ubicada en puntos estratégicos y visibles desde cualquier punto de acceso al respectivo espacio.
3. Se priorizará la instalación en entradas principales, zonas de circulación, espacios comunes, zonas de espera y lugares de alto tránsito de personas.
4. La señalización deberá incluir un código QR que enlace a la página web de la Secretaría Distrital de Salud, en donde se encuentre información clara, accesible y continuamente actualizada sobre los riesgos asociados al consumo de PTC, SEAN, SSN y productos sucedáneos o imitadores de cigarrillos y tabaco. Adicionalmente, se propenderá por garantizar:
 - a. Que la información sea accesible a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
 - b. Que se promueva la salud mental a través de hábitos saludables y de autocuidado.
 - c. Que se brinde información de las rutas de atención en salud a nivel distrital para casos de consumos problemáticos o de adicción.

Artículo 5. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la reglamentación dispuesta en este Acuerdo serán de carácter obligatorio en todo el Distrito Capital, y se aplicarán en los lugares mencionados en el artículo 19 de la Ley 1335 de 2009.

Artículo 6. Inspección, Vigilancia y Control. La Secretaría Distrital de Salud, en coordinación con la Secretaría Distrital de Gobierno y la Policía Metropolitana de Bogotá serán las entidades encargadas de supervisar la implementación y cumplimiento de la señalización en los espacios públicos y privados sujetos a este Acuerdo.

Parágrafo. El incumplimiento de esta disposición será objeto de sanciones conforme a la normativa vigente.

Artículo 7. Reglamentación y Verificación. La Secretaría Distrital de Salud, reglamentará la señalización de los espacios 100% libres de humo y aerosoles en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente Acuerdo.

Artículo 8. Vigencia. El presente Acuerdo empezará a regir a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PROYECTO DE ACUERDO NO 220 DE 2025

PRIMER DEBATE

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DIGITALES Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN MAYOR DE 50 AÑOS EN BOGOTÁ D.C.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBJETO

Este Proyecto de Acuerdo tiene como propósito promover la inclusión digital de la población mayor de 50 años en el Distrito, facilitando el acceso y uso de herramientas tecnológicas así como el desarrollo de capacidades digitales, permitiéndoles una participación activa en la sociedad ofreciendo oportunidades significativas para generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

A través de estos lineamientos, esta corporación pretende reducir las brechas digitales, y así mejorar las oportunidades laborales, económicas y sociales de este grupo poblacional, fortaleciendo su participación activa en la sociedad mediante el uso efectivo de estas tecnologías de la información.

2. JUSTIFICACIÓN

Introducción

Es innegable que la sociedad ha experimentado un cambio significativo en sus hábitos en las últimas tres décadas, impulsado por la llegada de los dispositivos móviles y los constantes avances tecnológicos. Estos cambios han traído enormes beneficios a la humanidad, permitiendo la adaptación a un mundo virtual donde se facilita el acceso a servicios como la banca, trámites aeroportuarios, servicios públicos, compras en línea y comercio en general a través de dispositivos móviles.

La tecnología se presenta como una herramienta valiosa y una oportunidad para la inclusión social y productiva de las personas mayores, además de ofrecerles nuevas alternativas para mantenerse informados. Sin embargo, aún hay un número considerable de personas mayores que no saben cómo acceder a internet, utilizar un computador o manejar un teléfono inteligente.

En este escenario, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá ha implementado estrategias para aumentar la productividad como “Bogotá Trabaja” y “Bogotá Productiva” con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, las personas mayores de 50 años aún enfrentan desafíos importantes, ya que su acceso a estas oportunidades es limitado. Ante esta situación, se proponen unos lineamientos de Fortalecimiento de Competencias Digitales y Emprendimiento dirigida a esta población, que busca capacitar y empoderar a las personas mayores de 50 años para que puedan generar ingresos sostenibles y adaptarse al mercado laboral actual.

2.1. Algunas reflexiones en torno a la pobreza en la región de América Latina

El Parlamento Andino, institución de carácter plural y democrático que integra la representación de los Congresos de más de 20 países de la región, llevó a cabo el Seminario “Las políticas actuales en América Latina: ¿acabarán con la pobreza?”

en Sao Paulo, Brasil en el año 2001. Allí surgieron algunas reflexiones importantes y reiteradas sobre el tema de la pobreza y el crecimiento económico de los países⁵².

Entre ellas, la importancia de que el **Estado debe generar acciones que no sólo redistribuyan el ingreso para superar la pobreza, sino que también se invierta en el capital humano**. Las condiciones de la población pobre y vulnerable como la marginación geográfica (con los altos costos de transporte y de tiempo), la incertidumbre jurídica y la imposibilidad de mitigar riesgos o aprovechar oportunidades son factores que no permiten que esta población se inserte en el mercado. **Por ello resulta tan importante trabajar simultáneamente para reducir la pobreza y para mantener el crecimiento económico**.

Dado que los choques económicos afectan el ingreso de los hogares, también afectan la inversión en nutrición, educación y salud, reduciendo de manera drástica el capital humano de la población pobre puede obstaculizar seriamente que esta salga de la pobreza.

El acceso equitativo a los recursos es clave para una igualdad de oportunidades, no sólo a nivel económico, sino también social, cultural y político. La protección de la población es indispensable para afrontar riesgos negativos como la enfermedad, la vejez, el desempleo y el hambre. Por ello se cuestiona constantemente qué tanta correspondencia existe entre las competencias que los estudiantes adquieren en la educación y las que se exigen y recompensan al interior del mercado laboral.

2.2. Competencias digitales

De acuerdo con la UNESCO, las innovaciones tecnológicas (desde el ordenador personal, Internet, los motores de búsqueda hasta los teléfonos inteligentes y las redes sociales) están transformando la forma de vivir y trabajar de las personas, como individuos y como ciudadanos. Las personas requieren nuevas competencias para poder desenvolverse en sociedades cambiantes, aprovechar al máximo las oportunidades, como también protegerse de los riesgos, como las amenazas a la seguridad⁵³.

En un principio, se consideraban las competencias digitales como la capacidad de utilizar dispositivos digitales y aplicaciones en línea. Sin embargo, esta definición es limitada, dado que las personas deben capacitarse no solo para utilizar los dispositivos, sino especialmente para añadir valor a su vida personal y profesional, poder tratar los contenidos de forma crítica, protegerse de los riesgos en línea, así como actuar de forma responsable para no perjudicar a los demás en el mundo virtual.

Las competencias digitales pueden definirse como: “... una serie de capacidades para utilizar dispositivos digitales, aplicaciones de comunicación y redes para acceder a la información y gestionarla. Permiten a las personas crear y compartir contenidos digitales, comunicarse, colaborar y resolver problemas, para una autorrealización eficaz y creativa en la vida, el aprendizaje, el trabajo y las actividades sociales en general”.

La UNESCO señala que el desarrollo de la tecnología digital ha causado una demanda urgente de competencias digitales. Dado los bajos niveles de competencias digitales de la población mundial, y la creciente complejidad del mundo digital, los países deben definir cuáles son las competencias digitales que se deben impartir y decidir cómo aumentarlas en los

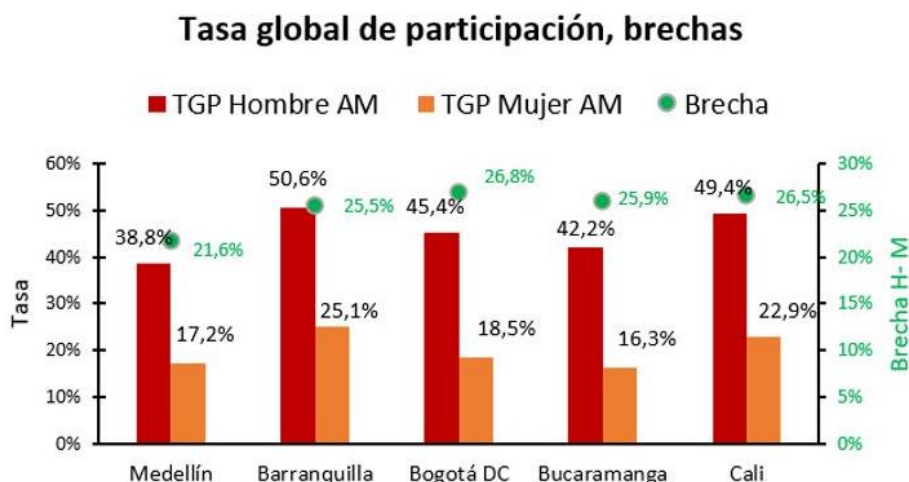
⁵² Solana, F. (2002). *América Latina XXI: ¿avanzará o retrocederá la pobreza?*. Fondo de Cultura Económica.

⁵³ UNESCO (2024). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo. 2023. Tecnología en la educación: ¿una herramienta en los términos de quién?* https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000388894&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_cd40dcb0-5588-4bf3-8745-1f49f72b849d%3F_%3D388894spa.pdf

ciudadanos en general, pues su aprendizaje se da no sólo en contextos académicos formales, sino también de manera informal.

2.3. Caracterización: problemas en la realidad laboral de la población mayor de 50 años

La actual tendencia de las empresas de priorizar la contratación de personas jóvenes, resulta en una subutilización de la vasta experiencia, conocimiento y habilidades que poseen los adultos. Es fundamental reconocer que el envejecimiento es un proceso natural que todos enfrentan, y que aquellos que han acumulado años de trabajo aportan un valor incalculable al mercado laboral. Un informe de la Universidad del Rosario evidencia las razones detrás de la exclusión de la población de persona mayor en el ámbito laboral, lo que ha llevado a una creciente necesidad de abordar esta problemática, como se puede observar en la siguiente gráfica:



Fuente: informe *Desafíos y oportunidades de empleo y emprendimiento en los adultos mayores* del Observatorio para el Emprendimiento y Empleabilidad del Adulto Mayor de la Universidad y Porvenir.

Allí se muestra la tasa global de participación (TGP) de hombres y mujeres mayores en cinco ciudades de Colombia: Medellín, Barranquilla, Bogotá D.C., Bucaramanga y Cali, así como las brechas de participación entre ambos géneros, arrojando los datos que se relacionan a continuación:

- **Tasas de Participación:** En general, los hombres mayores tienen tasas de participación más altas que las mujeres en todas las ciudades.

Bogotá D.C. presenta una TGP de hombres del 45,4%, y de mujeres del 18,5%, evidenciando una significativa discrepancia entre ambos géneros.
- **Brechas de Género:** Las brechas entre la participación masculina y femenina son notables en todas las ciudades, siendo Bucaramanga la que presenta la mayor brecha (49,4% - 16,3%).

Los datos indican que las mujeres con una edad superior a los 50 años en Colombia, enfrentan mayores obstáculos para participar en actividades laborales y de emprendimiento, lo que sugiere la necesidad de intervenciones específicas que fomenten la inclusión de las mujeres en este grupo etario. Las políticas de desarrollo deben enfocarse en cerrar estas brechas de género, especialmente en el contexto del emprendimiento y la inserción laboral de personas mayores.

Se evidencia que las empresas en Bogotá por diversas razones limitan la contratación de población mayor de 50 años. Entre estas se encuentran:

- **Prejuicios culturales:** Existe una percepción errónea de que los trabajadores mayores de 50 años no están actualizados o no desean adaptarse a las nuevas tecnologías, lo que crea una resistencia a su contratación.
- **Burocracia y costos laborales:** Las empresas mencionan la burocracia asociada al proceso de contratación y los altos costos laborales como obstáculos significativos para la inclusión de este grupo etario.
- **Falta de políticas inclusivas:** A pesar de que existen leyes que prohíben la discriminación por edad, su aplicación es limitada, lo que deja a discreción de los empleadores decidir sobre las oportunidades laborales para personas mayores.

Estas razones subrayan la necesidad de políticas que promuevan la inclusión laboral de este grupo, facilitando su acceso al mercado de trabajo y reconociendo el valor que aportan a las organizaciones ⁵⁴.

Frente a esta realidad, el Servicio Público de Empleo ha implementado una estrategia de inclusión laboral dirigida a personas mayores, buscando promover su autonomía y autosuficiencia económica. Esta estrategia se alinea con la Política Colombiana de Envejecimiento y Vejez 2015-2024 y su actualización 2022-2031, que busca garantizar un envejecimiento activo y satisfactorio para la población colombiana. Actualmente, en Colombia hay 5,8 millones de personas mayores de 60 años, y se prevé que esta cifra aumente a 15,2 millones para 2050.

Además, es importante señalar que un estudio revela que la mayoría de los trabajadores independientes en Colombia son personas mayores de 60 años. Este dato refleja la creciente tendencia de este sector poblacional a optar por el emprendimiento como alternativa ante la falta de oportunidades laborales. Sin embargo, se debe considerar que este grupo enfrenta desafíos significativos, como la brecha tecnológica y la adaptación al cambio.

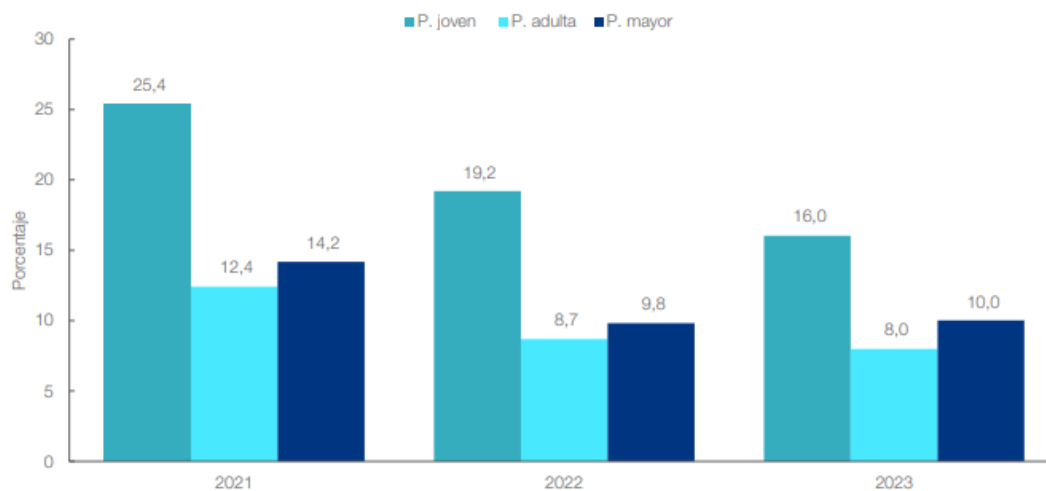
Según el libro “*Bogotá en Cifras 2023*” ⁵⁵, las dinámicas del mercado laboral varían significativamente según el grupo etario, con diferencias marcadas entre jóvenes (15-28 años), adultos (29-49 años) y mayores (50 años en adelante). El análisis de indicadores clave, como la tasa de participación, empleo y desempleo, muestra que las personas mayores presentaron la menor participación debido a su salida temprana del mercado laboral antes de alcanzar la edad de jubilación. Aunque su tasa de desempleo (TD) en 2023 fue del 10,0 %, esta cifra aumentó en 0,2 puntos porcentuales respecto al año anterior, lo que refleja una vulnerabilidad creciente en este grupo.

⁵⁴ Profesional. (2023). *Obstáculos para contratar personas mayores de 50 años*.

<https://www.iprofesional.com/management/381394-obstaculos-para-contratar-personas-mayores-de-50-anos>

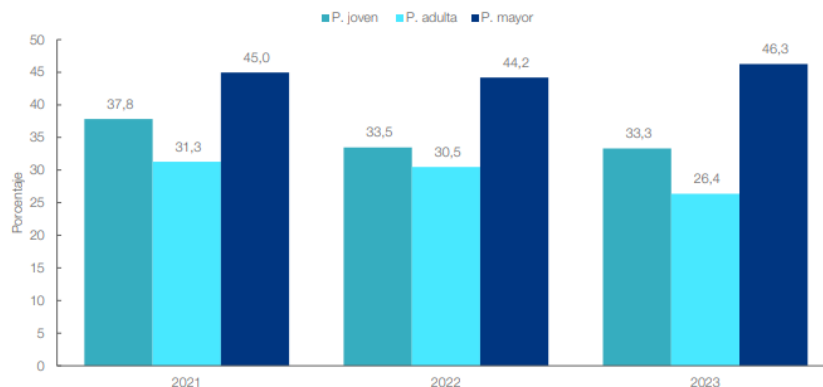
⁵⁵ Bogotá en Cifras 2023 -

https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/files_articles/bec_2023_vfinal.pdf

Gráfica 7.4 Tasa de desempleo por grupo etario en Bogotá, 2021–2023

Fuente: DANE-GEIH. Elaboración SDDE-ODEB.

Así mismo, la tasa de informalidad laboral de las personas mayores aumentó significativamente, alcanzando un 46,3 % en 2023, lo que representa un incremento de 2,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este aumento contrasta con la disminución de la informalidad en otros grupos etarios y refleja una mayor precarización en las condiciones laborales de la población mayor, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a empleos formales.

Gráfica 7.5 Tasa de informalidad por grupo etario en Bogotá, 2021–2023

Nota: Debido al cambio metodológico de la GEIH, los datos no son comparables con años anteriores al 2021. Se usa la informalidad según la definición del DANE.

Fuente: DANE-GEIH. Elaboración SDDE-ODEB.

Por otro lado, los ingresos laborales mensuales promedio de las personas mayores mostraron una disminución significativa, con una variación negativa del 6,8 %, afectando su calidad de vida y capacidad de gasto. A esto se suma una caída del 8,5 % en los ingresos de quienes trabajan en la informalidad y del 3,9 % en la formalidad, lo que agrava las desigualdades económicas entre los grupos etarios.

Tabla 7.2 Promedio de ingreso laboral mensual bruto de los empleos formales e informales por grupo etario en Bogotá, 2021-2023

Año	Grupo etario	Ingresos en miles de pesos		
		Ingresos laborales	Informales	Formales
2021	P. joven	1.389.221	1.082.066	1.576.206
	P. adulta	2.313.683	1.364.658	2.745.435
	P. mayor	2.109.740	1.133.675	2.907.203
2022	P. joven	1.591.325	1.045.384	1.865.948
	P. adulta	2.699.180	1.603.311	3.179.875
	P. mayor	2.581.321	1.342.491	3.562.325
2023	P. joven	1.684.097	1.126.947	1.962.625
	P. adulta	2.801.293	1.270.060	3.349.426
	P. mayor	2.407.082	1.228.086	3.421.826
Variación anual (%)	P. joven	5,8	7,8	5,2
	P. adulta	3,8	-20,8	5,3
	P. mayor	-6,8	-8,5	-3,9

Nota: Ingresos en pesos constantes base 2023.
Fuente: DANE- GEIH. Elaboración SDDE-ODEB.

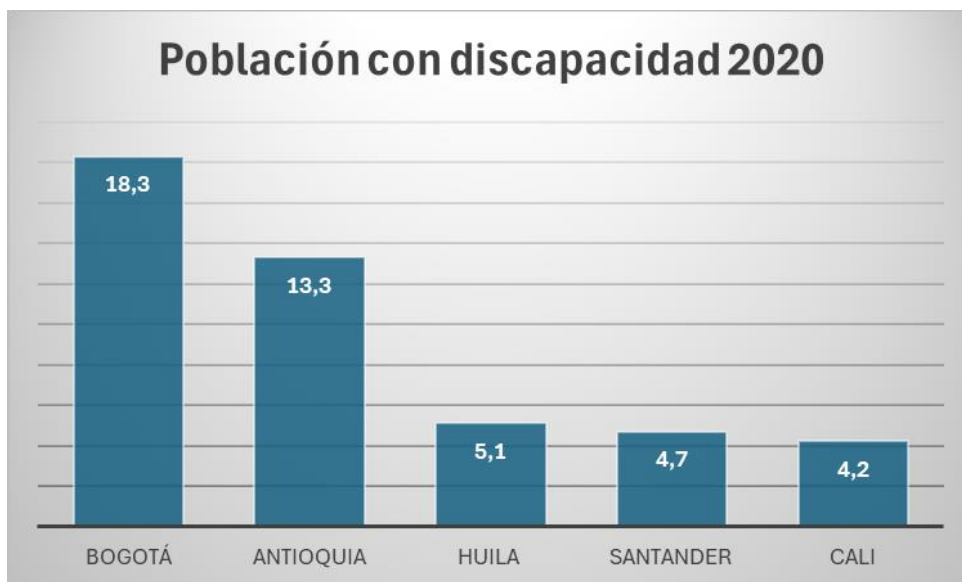
El análisis de las condiciones laborales de las personas mayores según los datos proporcionados por “*Bogotá en Cifras 2023*” revela preocupantes desigualdades en su acceso a empleos de calidad, pues su tasa de informalidad ha aumentado significativamente, alcanzando el 46,3 % en 2023, mientras que sus ingresos laborales, tanto en la formalidad como en la informalidad, han disminuido de forma considerable, afectando su calidad de vida y capacidad de gasto. En contraste, los jóvenes y adultos han visto mejoras en sus ingresos.

Estas cifras reflejan la falta de oportunidades laborales para las personas mayores, quienes enfrentan mayores barreras para mantenerse en el mercado laboral formal. Esta situación plantea la urgente necesidad de implementar políticas que promuevan la empleabilidad y mejoren las condiciones laborales de este grupo, garantizando su inclusión y dignidad en el ámbito laboral.

2.4 Población mayor de 50 años con discapacidad

Es importante tener en cuenta que existen personas mayores a 50 años que tienen alguna condición de discapacidad los cuales tienen un nivel alto de vulnerabilidad. El informe de Ministerio de Salud y protección social registra las siguientes cifras en el año 2020⁵⁶:

⁵⁶ MinSalud, Boletines Poblacionales: Personas con Discapacidad -PCD1 Oficina de Promoción Social I-2020.
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/boletines-poblacionales-personas-discapacidadI-2020.pdf>



“Las Personas con discapacidad registradas en Colombia, se concentran principalmente en Bogotá (18,3%), Antioquia (13,8%), Huila (5,1%) Santander (4,7%), y Cali (4,2%).” Esto demuestra que la capital tiene mayor porcentaje de personas, además la mayoría de las personas con discapacidad son personas mayores.

Por tanto, en la gestión de políticas activas de empleo en la capital, las entidades responsables deberán tomar en cuenta la promoción del empleo digno y capacitación digital como parte de la formación y equidad con las personas que tienen alguna discapacidad, facilitando herramientas para el emprendimiento y empleabilidad.

2.5 Brechas digitales

La revolución digital ha transformado significativamente la forma en que las personas viven, trabajan y se relacionan. Sin embargo, existe una brecha digital generacional que afecta particularmente a los adultos mayores de 50 años. En Bogotá, esta situación se refleja en las siguientes cifras:

- Según el DANE, aproximadamente el 30% de la población de Bogotá es mayor de 50 años, lo que representa cerca de 2.5 millones de personas.
- La Encuesta de Calidad de Vida del DANE (2022) revela que solo el 45% de las personas mayores de 50 años en Bogotá utilizan internet regularmente, en comparación con el 85% de la población entre 18 y 49 años.
- **Datos del MinTIC indican que menos del 20% de los emprendimientos digitales en Colombia son liderados por personas mayores de 50 años. Esta brecha digital no solo limita el acceso a información y servicios, sino que también restringe las oportunidades laborales y de emprendimiento para este grupo poblacional.**

Dichas cifras resultan preocupantes para esta población en específico, ya que las habilidades digitales son cada vez más comunes en el mundo laboral y se han configurado como uno de los intereses principales para el mercado laboral, donde se convierten en un conjunto de conocimientos y actitudes necesarias para utilizar la información, relacionarse con otras personas o con la administración y para gestionar la ejecución eficiente de tareas; contribuyendo significativamente a una mayor eficiencia y productividad.

Son, por tanto, competencias del siglo XXI que resultan imprescindibles para insertarse en el mercado laboral actual. El fortalecimiento de las competencias digitales en la población mayor a 50 años está relacionado con la **alfabetización digital o tecnológica** que se puede definir como la capacidad para manejar y adaptarse a las nuevas tecnologías, conocer en general el funcionamiento de un celular, un computador, una cámara digital, el internet o cualquier otra herramienta informática, para resolver problemas y realizar acciones significativas en la vida cotidiana.

Esta población busca en el emprendimiento una forma de sostenibilidad económica teniendo en cuenta que se les dificulta la adaptabilidad a una nueva forma de comercialización como lo son las diferentes plataformas. Brindar capacitaciones del uso de plataformas generará la apropiación de la tecnología y potenciará las habilidades digitales de los ciudadanos de la capital.

Actualmente se puede evidenciar la relación entre la calidad de vida y las nuevas tecnologías, formando nuevas formas de relaciones sociales, oportunidades culturales y de aprendizaje que permiten a las personas mayores aumentar y mejorar su desarrollo individual y social. Como consecuencia, ofrecer programas de capacitación en competencias digitales básicas y avanzadas para población mayor de 50 años influye en las estructuras institucionales y la disponibilidad de recursos que permitan a las personas acceder a la información y los servicios y de comprenderlos, evaluarlos y utilizarlos de maneras que promuevan y mantengan una buena salud y bienestar para sí mismos.

2.6 Iniciativas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

La Administración Distrital implementó las rutas “Bogotá Trabaja” y “Bogotá Productiva”, que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo, busca conectar a los ciudadanos con oportunidades laborales. No obstante, hasta la fecha, esta estrategia ha tenido una cobertura limitada en relación con las necesidades de la población mayor de 50 años, y no ofrece facilidades específicas para ellos. Aunque se considera a este grupo etario, los programas disponibles son insuficientes y no responden adecuadamente a la necesidad de actualización en competencias digitales ni a la promoción del emprendimiento para esta franja de la población.

Aunque la ruta “Bogotá Productiva” contribuye a la consolidación de microempresas y negocios de alto impacto, no se adapta adecuadamente a las necesidades específicas de las personas mayores. Por ello, es crucial implementar medidas que fortalezcan las competencias digitales y el emprendimiento para personas mayores de 50 años. Esto asegurará que este grupo poblacional cuente con las herramientas y conocimientos necesarios para participar activamente en el desarrollo económico de la ciudad.

Por otro lado, el **programa “Impulso al Empleo”** perteneciente a la estrategia “**Bogotá Trabaja**” se ejecuta junto con la Ley Empleo Joven; implementada para eliminar las barreras de empleabilidad de los jóvenes entre los 18 y 28 años, con el fin de ampliar la oferta de empleos en las entidades públicas a nivel nacional. Favoreciendo de esta manera la generación de empleo a través de las cajas de compensación familiar (Colsubsidio, Cafam y Compensar) en Bogotá. Que está dirigido a personas no afiliadas al FOSFEC, facilitando su reinserción laboral mediante la gestión de empleo y procesos de capacitación ⁵⁷.

Este programa está alineado con las políticas nacionales contra el desempleo y, junto con Empleo Incluyente y Empleo Joven, ampliando la oferta laboral, la formación especializada, adaptada por cada caja, para mejorar las competencias de los candidatos antes de su vinculación laboral, afrontando de esta manera desafíos del desempleo señalados en el Plan Distrital de Desarrollo.

Según la Tabla 13 del documento *Evaluación Ejecutiva de la Ruta Bogotá Trabaja – Producto 4 Informe Final de Evaluación*, el programa “**Impulso al Empleo**” es fundamental, ya que incluye a personas mayores de 50 años, como se detalla a continuación:

⁵⁷ Bogotá Trabaja - Evaluación ejecutiva de la ruta Bogotá Trabaja (Febrero 15 de 2024)

Tabla 13 Tipos de beneficiarios e información utilizada para los beneficios en el ACB de cada uno de los programas.

Programa	Descripción	Obs.	Tipo de Beneficiarios
Empleo Incluyente	La información que contiene el grupo poblacional, los respectivos datos sobre beneficiarios individuales, los beneficios monetarios expresados en pesos colombianos.	7605	<ul style="list-style-type: none"> • Personas Trans. • Beneficiario joven (18-28). • Beneficiario Individual para personas > 50. • Personas con discapacidad certificada. • Mujeres. • Personas en proceso de reincorporación, reintegración y/o desmovilizado. • Personas víctimas del conflicto armado. • Personas en pobreza SISBEN grupos A, B y C hasta C5. • Personas con pertenencia étnica: población negra, afrocolombiana, indígena. • Personas migrantes.
Empleo Joven	La información que contiene el grupo poblacional, los respectivos datos sobre beneficiarios individuales, los beneficios monetarios expresados en pesos colombianos.	20.880	<ul style="list-style-type: none"> • Personas mayores de 18 años y menores de 28 años. • Residentes en Bogotá D.C. • Sin otro beneficio económico.
Impulso al Empleo	La información que contiene el grupo poblacional, los respectivos datos sobre beneficiarios individuales, los beneficios monetarios expresados en pesos colombianos.	37.732 para 2022. 9.516 para 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Personas jóvenes (18-28). • Personas > 50. • Personas con experiencia de vida trans. • Personas del colectivo LGTBIQ+. • Mujeres. • Personas en proceso de reincorporación, reintegración y/o desmovilizado. • Personas en situación de pobreza SISBEN grupos A, B y C hasta C5. • Personas con pertenencia a grupo étnico.

El proceso de cálculo de los beneficios totales se describe en la Tabla 22 del documento mencionado anteriormente. En la primera etapa, se determina el beneficio total para cada categoría multiplicando el beneficio unitario por el número promedio de meses de contratación a través del programa. Aunque los beneficios se mantuvieron constantes entre 2022 y 2023 —\$1.298.741 COP para quienes recibieron el paquete integral y \$106.310 COP para aquellos asignados al paquete básico— se logró una segmentación diferenciada de la población en ambos años. En 2022, la segmentación se basa en el rango de edad de los participantes, mientras que en 2023 se ha segmentado por tipo de orientación sexual.

Tabla 22 Beneficiarios y beneficios individuales del programa Impulso al empleo.

Tipo de beneficiario	Beneficio Programa	Meses Promedio	Beneficio total 2022	Beneficio Total 2023
Beneficio individual de joven (18-28) integral	\$ 1.298.741	6	\$ 25.239.732.594	\$ -
Beneficio individual de joven (18-28) básico	\$ 106.310	6	\$ 6.921.418.860	\$ -
Beneficio individual de persona entre 29 y 49 años. Integral	\$ 1.298.741	6	\$ 42.406.491.132	\$ -
Beneficio individual de persona entre 29 y 49 años. Básico	\$ 106.310	6	\$ 9.379.731.300	\$ -
Beneficio individual de persona > 50. Integral	\$ 1.298.741	6	\$ 8.034.011.826	\$ -
Beneficio individual de persona > 50. Básico	\$ 106.310	6	\$ 1.571.687.040	\$ -

El programa “**Impulso al Empleo**” demuestra ser una iniciativa eficaz y valiosa en la promoción del empleo, especialmente para personas mayores de 50 años. La segmentación diferenciada de la población atendida y la sólida relación beneficio-costeo (RBC) de 5,07 evidencian su eficiencia en el uso de recursos. Además, la extraordinaria Tasa Interna de Retorno (TIR) del 407% resalta su rentabilidad social y su capacidad para generar bienestar económico, superando significativamente la Tasa de Descuento Social (TSD) del 9%. Estas características no solo validan la sostenibilidad del programa, sino que también refuerzan su papel como una herramienta fundamental para la inclusión laboral y la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios en Bogotá. En conjunto, estos elementos subrayan la efectividad del programa en la mitigación del desempleo y la promoción de oportunidades laborales para sectores vulnerables de la población.

2.7 Plan de Ordenamiento Territorial

De acuerdo con los datos de la Secretaría Distrital de Planeación, publicados el 15 de diciembre de 2023, durante los primeros 20 meses de implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) “**Bogotá Verdece**”, se han recuperado 440.000 empleos formales perdidos durante la pandemia. Además, en el tercer trimestre de 2023, la ciudad registró 4.130.000 personas ocupadas, un incremento del 6 % respecto a 2019, lo que evidencia la reactivación económica.

Una de las estrategias clave del POT ha sido permitir el uso de viviendas como unidades productivas, especialmente en áreas populares, promoviendo la industria, el comercio y la creación de espacios adaptados a las necesidades empresariales. Estas medidas fomentan el emprendimiento y la creación de empleo, fortaleciendo la economía local y contribuyendo al crecimiento inclusivo de la ciudad. El presente proyecto de acuerdo busca consolidar este modelo de desarrollo, garantizando el uso eficiente del suelo y la generación de empleo formal⁵⁸.

En resumen, este proyecto busca complementar y potenciar las iniciativas existentes de la Secretaría de Desarrollo Económico, enfocándose en el apoyo a una población que, por su edad, enfrenta barreras significativas en el acceso a nuevas tecnologías y oportunidades de emprendimiento. Al incluirlos de manera efectiva en las dinámicas económicas de Bogotá, no solo se promueve la inclusión digital, sino que se contribuye al bienestar integral de esta población, asegurando su participación activa, sostenible y productiva en la sociedad.

2.8 Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027

En el marco del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2024-2027 “**Bogotá Camina Segura**”, uno de los ejes estratégicos más relevantes, es la reducción del desempleo y el fortalecimiento del emprendimiento productivo, reconociendo la diversidad y las diferencias de la población. Esta estrategia busca fomentar la inclusión económica y social mediante un enfoque integral que promueve la creación de nuevas oportunidades de negocio y empleo para sectores tradicionalmente marginados.

Es así que, el **Objetivo 5** del PDD, promueve el dinamismo, la reactivación económica y la creación de empleos, para lo cual se diseñaron programas orientados a impulsar un emprendimiento equitativo e incluyente en Bogotá. Estos programas tienen como finalidad fortalecer las capacidades productivas y generar nuevas oportunidades para diversos sectores de la población, con un enfoque en la formalización y la inclusión social.

Al interior del objetivo 3 “Bogotá Confía en su Bienestar” la promoción de la inclusión en el emprendimiento formal de la ciudad que propone el programa 3.20, se alinea con el objeto del presente Proyecto de Acuerdo, materializándose dicho programa en las siguientes metas de producto:

⁵⁸ Secretaría de Planeación - Con el POT Bogotá Verdece se generan más de un millón de empleos formales, llevando la tasa de desempleo a un histórico 7 %

“206. Apoyar financieramente a 36.000 negocios locales con el fin de contribuir a su fortalecimiento, sostenibilidad y crecimiento, priorizando mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años.”

“208. Beneficiar 3.500 personas en acciones de convergencia digital mediante procesos de formación y alfabetización digital, creación de contenidos, recorridos virtuales, experiencias interactivas, fomento de ciudadanías digitales, crecimiento económico, acceso a empleo digno e internacionalización en Bogotá.”

Dicho esto, el Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración del Cabildo Distrital se alinea directamente con esta estrategia, al proponer el fortalecimiento de competencias digitales y emprendimiento para población mayor de 50 años en Bogotá; enfocándose en la inclusión digital de esta población, promoviendo la capacitación en habilidades tecnológicas y el fomento del emprendimiento como mecanismos para su inserción en el mercado laboral y productivo de la ciudad, al proporcionar una oferta de educación y formación corta y pertinente, articulada con las demandas de las cadenas productivas locales y regionales.

Asimismo, con la consolidación del Sistema Distrital de Apoyo al Emprendimiento, que ofrece asistencia técnica, tecnológica y financiera, esta propuesta permitirá que este grupo etario acceda a herramientas y conocimientos clave para el desarrollo de emprendimientos sostenibles y adaptados a las nuevas demandas del mercado.

Finalmente, el fomento a la transferencia tecnológica para mejorar la productividad de las pequeñas empresas y la comercialización de bienes y servicios, son lineamientos que complementan el Proyecto de Acuerdo, pues se busca que los adultos mayores de 50 años puedan beneficiarse de estas iniciativas para participar e incidir en el ecosistema económico de la ciudad, generando valor y oportunidades tanto para ellos como para sus comunidades.

3. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa, no ha sido presentada en la Corporación por parte de ningún concejal o grupo poblacional, por lo que esta es una primera versión que merece ser estudiada y ser objeto de toda retroalimentación y mejoramiento en beneficio de la población objeto del presente Proyecto de Acuerdo. Sin embargo, en el Concejo de Bogotá se han aprobado iniciativas relacionadas con el acceso a la información y la empleabilidad de personas mayores de 50 años así:

- Acuerdo 564 de 2014 *“Por el cual se institucionaliza la celebración del mes del Envejecimiento y Vejez en Bogotá D.C.”*

En el marco de este Acuerdo Distrital, se han desarrollado iniciativas como la *Feria Plateada de Emprendimiento*, la cual es un espacio para compartir e impulsar las acciones de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez, con el propósito de promover la autonomía y la independencia económica de las personas mayores, fortaleciendo así iniciativas económicas y productivas de esta población.

- Acuerdo 710 de 2018 *“Por el cual se determinan los lineamientos para el fomento, la generación de empleo, y el Teletrabajo para personas con discapacidad y Adultos Mayores que requieren cuidado permanente y sus Cuidadores y Cuidadoras en el Distrito Capital, se establece una estrategia para la atención integral de cuidadores y cuidadoras y se dictan otras disposiciones”*

Esta norma promueve la inclusión laboral con un enfoque diferencial hacia las personas con discapacidad y adultos mayores en los procesos de selección, con el fin de garantizar la inclusión de forma progresiva del 3% a los empleos del Distrito de esta población, de conformidad con las normas del empleo público.

- Acuerdo 919 de 2023 “*Por el cual se crea el Sistema de Información y Orientación Especial para personas con discapacidad y las personas mayores en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones*”.

Este Acuerdo busca impulsar acciones que aporten a la disminución de las barreras para el acceso a la información y la prevención de todas las formas de discriminación. En particular, la discriminación por motivos de discapacidad o edad.

4. MARCO JURÍDICO

4.1 MARCO INTERNACIONAL

4.1.1 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) C111 de la Organización Mundial del Trabajo - Adoptado por la Ley 22 de 1967

Prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación por motivos como la edad. Este convenio obliga a los países a implementar políticas de igualdad de oportunidades y trato, permitiendo a las personas mayores participar en el mercado laboral sin discriminación.

Artículo

1.

“1. A los efectos de este Convenio, el término “discriminación”, comprende:

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;

b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el Miembro interesado, previa consulta con las organizaciones representativas, de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.
(...)

3. A los efectos de este Convenio, los términos “empleo y ocupación”, incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional, y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también las condiciones de trabajo”.

4.1.2 Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores - Adoptada por la Ley 2055 de 2020

Artículo 18. Derecho al Trabajo.

“(...

Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconocimiento del trabajo no remunerado.

(...)

Los Estados Parte alentarán el diseño de programas para la capacitación y certificación de conocimiento y saberes para promover el acceso de la persona mayor a mercados laborales más inclusivos.”

Artículo 20. Derecho a la Educación. *“La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, en las modalidades definidas por cada uno*

de los Estados Parte, y a participar en los programas educativos existentes en todos los niveles, y a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones.

Los Estados Parte garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la educación de la persona mayor y se comprometen a:

(...)

d) Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria.

4.1.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 1. Fin de la Pobreza

digital

Meta 1.4 “Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.”

ODS 4. Educación de Calidad

Meta 4.4. “De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”

ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Meta 8.3. “Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros”

ODS 10. Reducción de las Desigualdades

Con el fin de enfrentar los problemas económicos de la proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, por haber sido discriminadas en acceso a oportunidades laborales con ocasión de su sexo, edad o discapacidad, la ODS 10 presenta la siguiente meta:

Meta 10.2. “De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”

Adicionalmente, y bajo el mismo fin se proponen las siguientes metas:

Meta 10.4. “Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”.

4.2 MARCO NACIONAL

4.2.1 Constitución Política de Colombia

Artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
(...)”

Artículo 25. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”

Artículo 46. “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.
(...)”

Artículo 54. “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.”

Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social (...)”

4.2.2 Leyes

Ley 115 de 1994
“Por la cual se expide la ley general de educación”

Artículo 51. Objetivos específicos. “Son objetivos específicos de la educación de adultos:
(...)”

d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria.”

Artículo 53. Programas semipresenciales para adultos. “Los establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional, podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal o de educación no formal de carácter especial, en jornada nocturna, dirigidos a personas adultas, con propósitos laborales (...)”

Ley 1251 de 2008
“Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores”

Artículo 6. Deberes. “El Estado, la sociedad civil, la familia, el adulto mayor y los medios de comunicación deberán para con los adultos mayores:

w) Realizar acciones, programas y proyectos que dignifiquen el envejecimiento a través de la promoción de la autonomía económica del adulto mayor con empleos formales, acorde con sus capacidades y la normatividad y acuerdos internacionales vigentes”.

Artículo 7. Objetivos. “El Estado, en cumplimiento de los fines sociales es responsable de la planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones encaminadas al desarrollo integral del adulto mayor, para lo cual

deberá elaborar la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez teniendo en cuenta los siguientes objetivos: (...)

4. Alcanzar la plena integración y participación de los adultos mayores en el desarrollo económico, social, político y cultural de la Nación reconociendo el trabajo intergeneracional que cumplen en la sociedad. (...)

6. Transversalizar la política haciendo del adulto mayor parte integral en los planes, programas, proyectos y mecanismos de trabajo de la Administración Pública. (...)"

Artículo 17. Áreas de intervención. "En la elaboración del Plan Nacional se tendrán en cuenta las siguientes áreas de intervención:

(...)

4. Productividad. El Estado a través de sus entidades del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal de conformidad con el ámbito de sus competencias, las instituciones públicas y privadas, la sociedad y la familia deberán generar acciones tendientes a involucrar al adulto mayor en el desarrollo económico y productivo de nuestro país, para esto deberán:

a. Facilitar y promover la obtención de ingresos mediante el empleo, el desarrollo de proyectos productivos, y la formación de empresas sociales para el adulto mayor;

b. Desarrollar mecanismos para el acceso al crédito con propósitos productivos para el adulto mayor;

c. Promover el acceso del adulto mayor al empleo formal;

d. Capacitar, promover y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y al teletrabajo como mecanismo para la generación de ingresos y de empleo."

Ley 1341 de 2009

"Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones"

La Ley 1341 de 2009, dispone que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio nacional. Así mismo, dispone que el fin último de intervención del Estado en el Sector TIC es propender por el servicio universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 2. Principios orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social. (...)

1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la competitividad. (...)

7. El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC. En desarrollo de los artículos 16, 20 y 67 de la Constitución Política el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, el libre desarrollo de la personalidad, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente, el Estado establecerá programas para que la población pobre y vulnerable incluyendo a la población de 45 años en adelante, que no tengan ingresos fijos, así como la población rural, tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet, así como la promoción de servicios TIC comunitarios, que permitan la contribución desde la ciudadanía y las comunidades al cierre de la brecha digital, la remoción de barreras a los usos innovadores y la promoción de contenidos de interés público y de educación integral (...).

Artículo 6. Definición de TIC. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes.

Ley 2040 de 2020
“Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones”

Esta Ley tiene por objeto impulsar el empleo de las personas mayores que no gozan de pensión, promoviendo su autonomía y autosuficiencia económica, garantizando así el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la población colombiana. Entre sus principales características se encuentran:

- Deducir en el impuesto sobre la renta el 120% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estas personas durante los años gravables en los que el empleado permanezca contratado. Para efectos de acceder a esta deducción, el empleador deberá vincular a la persona mayor por lo menos durante un (1) año y con posterioridad a la vigencia de la Ley.
- En caso de despido con justa causa, el término mínimo de un año de contratación se puede completar con el tiempo de trabajo de otro adulto mayor que cumpla los mismos requisitos.
- El requisito de vinculación del 2.5% de la planta de personal se incrementa en un 0.5% por cada 100 empleados adicionales, sin pasar del 5%.

4.2.3 Decretos de orden nacional

Decreto 1075 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”

Artículo 2.3.3.5.1.4. Definiciones. “Para efectos de la presente sección, deberá entenderse como: (...)

7. Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo”.

Artículo 2.3.3.5.3.1.1. Alcance. “La educación de adultos, ya sea formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano o informal hace parte del servicio público educativo, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus Decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1860 de 1994, en la manera en que queda compilado en el presente Decreto, y la presente Sección.

Se regirá igualmente por las disposiciones que para el efecto dicten las entidades territoriales según sus competencias.”

Artículo 2.3.3.5.3.1.4. Propósitos de la educación de adultos. “Atendiendo los fines de la educación y los objetivos específicos de la educación de adultos, establecidos por la Ley 115 de 1994, son propósitos de los programas de educación de adultos:

(...)

b) Contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación científica y tecnológica que fortalezcan el desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la producción de bienes y servicios;

(...)

d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en procesos de educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano e informal destinados a satisfacer intereses, necesidades y competencias en condiciones de equidad;”

Artículo 2.3.3.5.3.2.1. Composición de la educación de adultos. “La educación de adultos ofrecerá programas de:

1. Alfabetización.

2. Educación básica.

3. Educación media.

4. Educación para el trabajo y el desarrollo humano

5. Educación informal.”

Artículo 2.3.3.5.3.2.8. Educación para el trabajo y desarrollo humano en el marco de la educación para adultos.

(...)

La educación de adultos comprende igualmente las acciones y procesos de educación informal, que tienen como objetivo ofrecer oportunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, como también de educación permanente, de fomento, promoción, difusión y acceso a la cultura, y de transmisión, apropiación y valoración de tradiciones, costumbres y comportamientos sociales. Su organización y ejecución no requieren de autorización previa por parte de las secretarías de educación departamentales y distritales.”
(subrayado fuera del texto original).

4.2.4 Resoluciones del orden nacional

Resolución 3066 de 2022
“Por la cual se crean Grupos Internos de Trabajo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se asignan funciones y se derogan unas Resoluciones”

Artículo 14. funciones de los grupos internos de trabajo de la dirección de apropiación. “Los grupos internos de trabajo de la Dirección de Apropiación tendrán a su cargo las siguientes funciones:

(...)

2. Desarrollar estrategias encaminadas a realizar alfabetización digital, así como fomentar el desarrollo de competencias y habilidades TIC y su aprovechamiento productivo en los distintos sectores de la sociedad.

3. Implementar estrategias conjuntas para la apropiación y el fomento del uso efectivo y productivo de las TIC en los territorios conectados por el Ministerio.

4. Diseñar e implementar estrategias para la generación de contenidos digitales multiplataforma y desarrollos TIC que fomenten las habilidades digitales para la productividad.
(...)”

Resolución **5129** **de** **2023**
“Por medio de la cual se reglamenta la certificación de cumplimiento de requisitos para acceder a beneficios contemplados en la Ley 2040 de 2020, se modifica la Resolución 3190 de 2022 y se deroga la Circular externa No. 004 del 18 de enero 2021”

Artículo 1. Objeto. *“La presente Resolución tiene por objeto reglamentar la certificación que deben presentar los empleadores para acreditar el cumplimiento de requisitos para acceder a la deducción tributaria contemplada en el artículo 2 de la Ley 2040 de 2020; y el procedimiento que deben cumplir las empresas para el otorgamiento del Sello Amigable “Adulto Mayor” de que trata el artículo 7 de la misma ley (...) garantizando su reclutamiento, selección, vinculación, desarrollo profesional, retención y desempeño, dentro de la organización”.*

4.3 NORMAS DISTRITALES

Decreto 345 de 2010

“Por medio del cual se adopta la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital”

Con la finalidad de fortalecer el bien común entre las personas mayores del Distrito Capital, dicha Política Pública propone como estrategia, la accesibilidad y apropiación de las nuevas tecnologías por parte de las personas mayores, apropiando el conocimiento y disminuyendo la brecha tecnológica. Para ello, establece el siguiente texto:

Artículo 9. Dimensiones, ejes y líneas. *“La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital se estructura a partir de las siguientes dimensiones: Vivir como se quiere en la vejez, vivir bien en la vejez, vivir sin humillaciones en la vejez y envejecer juntos y juntas”.*

1. Vivir como se quiere en la vejez.
(...)

Eje 2: Construyendo el bien común: *Este eje articula las líneas y/o derechos que van dirigidos a fortalecer la participación informada, con incidencia y decisión de las personas mayores en los diferentes escenarios, fomentando la asociación y organización de las personas mayores. Este eje busca la garantía de los siguientes derechos:*

-Derecho a la información, comunicación y conocimiento.

-Derecho a la participación”.

En lo que se trata de asegurarles el acceso a un mercado laboral en condiciones idóneas para su estado físico y Psicológico, propone como estrategia la generación de fuentes de empleo productivos y remunerados con equidad para personas mayores que desean trabajar, concertadas entre el sector público y el privado, identificando necesidades de capacitación. Allí, dispone lo siguiente:

Artículo 9. Dimensiones, ejes y líneas.
“(…)”

Eje 3: Techo, comida y sustento: *Este eje busca agrupar las líneas/derechos que van dirigidas a garantizar la satisfacción de necesidades materiales esenciales para proteger la vida y la dignidad humana en la vejez, en*

relación con un lugar donde vivir, alimento suficiente y nutritivo y los medios económicos para vivir, como son:
(...)
-Derecho al trabajo.
(...)”.

Decreto 544 de 2011

“Por el cual se adopta la Política Pública de y para la Adultez en el Distrito Capital”

Artículo 6. Objetivos Específicos. *La Política Pública de y para la Adultez, tiene los siguientes objetivos específicos:*

(...)
b) Desarrollar estrategias que permitan el goce efectivo de los derechos sociales (salud, educación, alimentación y nutrición, recreación y deporte) y económicos (seguridad económica y trabajo digno y decente) de los/as adultos/as de Bogotá, D.C., a través de la generación de oportunidades para lograr una vida autónoma y plena.
(...)

Artículo 9. Dimensiones, ejes y líneas de acción. *La Política Pública de y para la Adultez se articula a través de Dimensiones, Ejes, y Líneas de Acción.*
(...)

1. Dimensión Socioeconómica. *Constituye el pilar que soporta acciones de Política orientadas a fomentar el desarrollo humano de adultos/as, y el mejoramiento de sus condiciones de vida en la ciudad. Se convierte en la base principal de la intervención pública en los derechos socio-económicos (Seguridad Económica, Trabajo Digno y Decente, Educación, Salud, Alimentación y Nutrición, y Recreación y Deporte). Los ejes y las líneas de acción de esta dimensión son:*

Eje 1: Adultos/as con trabajo digno y decente, y oportunidades económicas. Este eje contiene las siguientes líneas de acción:

** Seguridad económica*

** Trabajo digno y decente*

(...)

Decreto 399 de 2022

“Por medio del cual se crea el Programa Empleo Incluyente para el cierre de brechas de población de difícil empleabilidad y se dictan otras disposiciones”

Artículo 2. Destinatarios y destinatarias del programa y acreditación de condiciones. *“El presente programa está dirigido a empresas y población que tengan las siguientes características:*

a. Empresas formalizadas en la ciudad de Bogotá D.C., que demuestren una vinculación laboral formal de al menos tres (3) meses consecutivos con la población que enfrenta brechas de acceso al empleo señaladas en este decreto, por medio de un contrato laboral con un término de duración de seis (6) meses o más con alguna de las poblaciones mencionadas en el literal b del presente artículo. El contrato que acredite la vinculación laboral no podrá tener una remuneración inferior a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV).

b. Población residente en la ciudad de Bogotá que se encuentren en la búsqueda de empleo, y que no tengan ningún tipo de relación laboral vigente o de prestación de servicios al momento de suscribir el contrato laboral, y que pueda acreditar al menos una de las condiciones de vulnerabilidad establecidas en siguiente lista:

(...)
2. Persona mayor de 50 años.
(...)”

Acuerdo 927 de 2024
“Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”

12.2. Programa 17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas. *“Con el propósito de garantizar una oferta amplia y de calidad para la formación para el trabajo y formación posmedia, este programa busca ofrecer cursos cortos de formación considerando las demandas de las cadenas productivas, los ecosistemas de innovación y emprendimiento (...)*

Este programa reconoce especialmente a las personas adultas y mayores que se sitúan entre los 50 años o más, y que enfrentan lo que se conoce como la “segunda crisis laboral”, pues pierden su empleo y por su edad ya les es difícil vincularse laboralmente. Con este programa se contempla acompañar a las y los buscadores de empleo en la potencialización de las habilidades personales blandas que se requieren para el proceso de vinculación laboral (...)”

4.4 JURISPRUDENCIA

Sentencia T-030 de 2020 de la Corte Constitucional - Revisión de Tutela

“(…) sobre la relación entre el acceso a las TIC y las brechas sociales, expresó que la brecha digital puede verse como una consecuencia de la brecha social. Adujo que aún si la pobreza hace, efectivamente, más difícil el acceso a la tecnología, ésta no constituye el único motivo, pues la falta de conocimiento y habilidades para el uso de las mismas contribuyen al incremento de dicha brecha digital. Señaló que negar la alfabetización digital a los estudiantes dificulta su desarrollo social y laboral, en una sociedad cada vez más atravesada por las TIC, los pone en desventaja frente a personas alfabetizadas digitalmente, frente a oportunidades laborales. Ello explica la obligación del Estado disminuir la mencionada brecha”.

Sentencia C-395 de 2021 de la Corte Constitucional - Revisión constitucional de la Ley 2055 de 10 de septiembre de 2020, “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores’, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015”

“La garantía del derecho al trabajo que realiza la Convención se articula con los preceptos y finalidades constitucionales, ya que resalta la protección especial que debe brindarse a los adultos mayores en materia laboral, lo cual constituye un elemento cardinal para la promoción de su integración a la vida activa social, y que, por demás, exalta la posibilidad de materializar sus derechos al mínimo vital, y a vivir una vida autónoma e independiente”.

Sentencia SU-109 de 2022 - Corte Constitucional.

“De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política, las personas de la tercera edad son sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, debido a “las condiciones fisiológicas propias del paso del tiempo”. A partir de la normativa superior, la familia, la sociedad y el Estado deben concurrir a la protección y asistencia de los adultos de la tercera edad, dada la mayor dificultad que enfrentan para el goce efectivo de sus derechos. Además, la Corte ha expresado que los adultos mayores no pueden ser discriminados ni marginados en razón de su edad, pues además de transgredir sus derechos fundamentales, se priva a la sociedad de contar con su experiencia de manera enriquecedora”.

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá D.C. es competente para estudiar, tramitar y promulgar la presente iniciativa, conforme las atribuciones reconocidas en la Constitución Política y el Estatuto Orgánico de Bogotá D.C., a saber:

Artículo 313 numeral 1 de la Constitución Política:

Artículo 313. *“Corresponde a los concejos:*

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. (...)”.

Artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993:

Artículo 12. Atribuciones. *“Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:*

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)”.

6. IMPACTO FISCAL

El proyecto de acuerdo puede generar algunos gastos adicionales, que se pueden asumir con los recursos asignados a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico al interior del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 "Bogotá Camina Segura" en el Objetivo 5 el cual busca Promover el dinamismo, la reactivación económica y las capacidades de emprendimiento de la población en Bogotá, así como en el Objetivo 3; al interior de este objetivo se establecen los presupuestos necesarios que se ejecutarán a través de estrategias dentro de las que se incluye ampliar la infraestructura de centros de formación para el emprendimiento y las capacidades digitales.

De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de las entidades competentes.

Es procedente indicar que no obstante lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando: “En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”. “(...) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirán a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento.

El objetivo del mencionado artículo es asegurar que las leyes promulgadas consideren las realidades económicas del país, sin restringir indebidamente la función legislativa ni conferir al Ministro de Hacienda un poder de veto sobre la legislación. En otras palabras, se busca equilibrar la estabilidad económica con la autonomía del poder legislativo, evitando barreras injustificadas que puedan obstaculizar el proceso democrático.

Atentamente,

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Liberal Colombiano

SAMIR ABISAMBRA VESGA

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Liberal Colombiano

DARÍO FERNANDO CEPEDA

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Liberal Colombiano

GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Liberal Colombiano

MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Liberal Colombiano

ANDRÉS BARRIOS BERNAL

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Centro Democrático

OSCAR RAMÍREZ VAHOS

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Centro Democrático

ANDRÉS GARCÍA VARGAS

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Alianza Verde

MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ

Concejala de Bogotá D.C.
Partido Alianza Verde

JULIÁN ESPINOSA ORTIZ

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Alianza Verde

FABIÁN PUENTES SIERRA

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Político MIRA

EMEL ROJAS CASTILLO

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Nueva Fuerza Democrática

RICARDO CORREA MOJICA

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Nuevo Liberalismo

RUBÉN TORRADO PACHECO

Concejal de Bogotá D.C.
Partido de la U

ROCÍO DUSSÁN PÉREZ

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Polo Democrático Alternativo

ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Cambio Radical

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Concejal de Bogotá D.C.
Partido Con Toda Por Bogotá

PROYECTO DE ACUERDO NO 220 DE 2025**PRIMER DEBATE****PROYECTO DE ACUERDO No. ____ de 2025**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
COMPETENCIAS DIGITALES Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN MAYOR DE 50 AÑOS EN
BOGOTÁ D.C.”**

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el artículo 313 de la
Constitución Política y en el artículo 12, numerales 1 y 25 del Decreto Ley 1421 de 1993

ACUERDA

ARTÍCULO 1. OBJETO. Establecer lineamientos para fortalecer las competencias digitales y de emprendimiento de la población mayor de 50 años, facilitando el acceso y uso de herramientas tecnológicas y reduciendo brechas digitales que les permita acceder a oportunidades laborales, económicas y sociales para generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS. Este Acuerdo distrital se rige por los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley 1251 de 2008 y en el artículo 8 del Decreto 544 de 2011:

- a. **Acceso a beneficios:** El Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a las personas mayores el acceso a beneficios con el fin de eliminar las desigualdades sociales y territoriales.
- b. **Autonomía:** Es la libertad de cada individuo de ejercer su proyecto de vida en el paradigma del desarrollo humano y en el marco de las oportunidades que le brinda la sociedad.
- c. **Corresponsabilidad:** El Estado, la familia la sociedad civil y el sector privado en conjunto deben promover y fortalecer la participación activa e integración de las personas en la planificación, ejecución y evaluación de los programas, planes y acciones que se desarrollen para su inclusión en la vida política, económica, social y cultural de la Nación.
- d. **Equidad:** Es el trato justo y proporcional que se da a las personas sin distingo del género, cultura, etnia, religión, condición económica, legal, física, síquica o social, dentro del reconocimiento de la pluralidad constitucional. Implica reconocer la existencia de diferencias injustas y evitables en términos de oportunidades y posibilidades de ejercer plenamente la autonomía.
- e. **Formación permanente:** Aprovechamiento oportunidades que desarrollen plenamente su potencial, mediante el acceso a los recursos educativos, de productividad, culturales y recreativos de la sociedad.
- f. **Justicia social:** Exige la concreción de instrumentos y mecanismos para la redistribución de los recursos públicos, en aras de disminuir las brechas establecidas por la segregación socioeconómica y territorial en la ciudad.

ARTÍCULO 3. COMPETENCIA Y LINEAMIENTOS. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y en coordinación con las demás entidades competentes, propenderá por implementar el presente Acuerdo bajo los siguientes lineamientos:

1. Acceso a las nuevas tecnologías: Garantizar el acceso y la conectividad a través del aprovechamiento de la tecnología, los datos y la innovación para contribuir a su desarrollo educativo, económico y social, aumentar la productividad y competitividad aportando al cierre de la brecha digital de la población mayor de 50 años en Bogotá D.C.

2. Fortalecimiento de competencias digitales: Desarrollar e implementar iniciativas de capacitación en competencias digitales dirigido a personas mayores de 50 años, que les permita adquirir habilidades tecnológicas básicas y avanzadas.

3. Promoción del emprendimiento: Fomentar el emprendimiento la población mayor de 50 años a través de asesoría técnica, capacitación en gestión tecnológica, herramientas y recursos de emprendimiento, con el fin de fomentar la creación de Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) o iniciativas empresariales en el ámbito digital. Este lineamiento se complementará con las siguientes acciones:

- a. Realización de ferias y eventos de networking específicos para emprendedores mayores de 50 años.
- b. Impulsar plataformas en línea para la promoción y comercialización de productos y servicios ofrecidos por emprendedores mayores de 50 años.

4. Inclusión laboral: Establecer alianzas estratégicas con empresas y organizaciones del sector público y privado para promover la inclusión laboral, garantizando el acceso a oportunidades de empleo dignas.

Asimismo, se divulgará en medios físicos y virtuales los incentivos contemplados en la Ley 2040 de 2020 para empresas que contraten población mayor de 50 años.

5. Comunicación y divulgación: La Administración Distrital desarrollará los mecanismos necesarios de comunicación y difusión física y digital, que informen a la población mayor de 50 años del Distrito Capital sobre las capacitaciones digitales, asesorías técnicas y demás estrategias disponibles.

PARÁGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en este Acuerdo, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico propenderá por asignar recursos económicos del presupuesto distrital para financiar los programas ya existentes dirigidos a la población objeto de este acuerdo, garantizando su sostenibilidad a mediano y largo plazo.

ARTÍCULO 4. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. La Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en cooperación con la Consejería Distrital de TIC, buscará facilitar la colaboración entre diferentes entidades distritales y nacionales, como el Servicio Público de Empleo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), para asegurar la efectividad de las acciones desarrolladas en cumplimiento de este Acuerdo.

ARTÍCULO 5. MONITOREO Y EVALUACIÓN. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, definirá mecanismos de seguimiento y evaluación para medir los resultados y el impacto de las acciones en torno a la capacitación digital y el emprendimiento en la generación de ingresos, la empleabilidad y la calidad de vida de las personas mayores de 50 años, asegurando que se ajusten las estrategias según los resultados obtenidos.

ARTÍCULO 6. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE